

ÍNDICE

Curso interrumpido. EL PAÍS	Pág 2
Madrid llega a un acuerdo con todas las universidades sobre cómo evaluar a estudiantes. ABC	Pág 2
Las incógnitas a las que se enfrentan diez millones de estudiantes y sus posibles soluciones. HUFFINGTONPOST.es	Pág 3
Educació 360 reclama un "verano educador" para rehacer la "brecha de desigualdades" que dejará el confinamiento. LA VANGUARDIA	Pág 5
Cómo cerrar el curso escolar se ha convertido en el principal debate educativo: ¿qué hacer con el tercer trimestre?. EL DIARIO.es	Pág 6
La desesperada búsqueda de los alumnos que se han quedado desconectados del sistema educativo. EL PAÍS	Pág 8
El trimestre escolar 'on line' arranca bajo el yugo de la brecha digital. EL PERIÓDICO de Catalunya	Pág 9
Alumnos sin acceso a la educación a distancia: la pandemia saca a la luz grandes desigualdades. HUFFINGTONPOST.es	Pág 10
Hoy dan 'mates' en La 2. EL PAÍS	Pág 12
Ciudadanos pide sustituir la 'ley Celaá' por una nueva reforma tras analizar los efectos de la pandemia en la educación. EUROPA PRESS	Pág 13
La Junta no descarta que regresen los profesores a las aulas pero sin alumnos. EL MUNDO	Pág 13
Las familias y expertos en educación piden que se abran los colegios en verano. EL PAÍS	Pág 14
Lanzan una herramienta gratuita de formación online para las escuelas cerradas por el coronavirus.ABC	Pág 16
La desigualdad empieza en la guardería: Madrid suspende el contrato a uno de cada cinco centros mientras el resto teletrabaja. EL DIARIO.es	Pág 17
Un final de curso con retorno a las aulas. LA RAZÓN	Pág 18
La mayoría de profesores españoles rechaza el aprobado general. EL PAÍS	Pág 19
División en la escuela sobre si hay que abrir en verano para recuperar las clases perdidas. EL MUNDO	Pág 21
Celaá asegura en el Congreso que el aprobado será "la regla general" y la repetición "la excepción". EL PAÍS	Pág 22
Los colegios podrán abrir este verano para ofrecer a los estudiantes actividades de refuerzo voluntarias. EUROPA PRESS	Pág 22
Isabel Celaá defiende la "promoción general" y dice que los alumnos no suspenderán el tercer trimestre del curso. EL MUNDO	Pág 23
Celaá dice descartar el aprobado general pero se pasará de curso "como norma". ABC	Pág 24
Isabel Celaá: "El alumno repetirá solo si eso le va a hacer mejorar". EL PAÍS	Pág 26
Sin un plan B para la EVAU si no se puede hacer en julio. LA RAZÓN	Pág 27
El tercer trimestre escolar se dedicará a tareas de refuerzo y los alumnos pasarán de curso salvo en casos excepcionales. EL DIARIO.es	Pág 28
Docentes, padres y alumnos celebran no evaluar las tareas durante el confinamiento: "Garantiza la equidad". EUROPA PRESS	Pág 29
Comunidades del PP no firmarán el acuerdo de Celaá que permite que los alumnos pasen curso de forma generalizada. EL MUNDO	Pág 30
Madrid, Murcia y País Vasco no aplicarán el acuerdo del Gobierno para el final de curso. EL PAÍS	Pág 31
Save the Children celebra las medidas de Educación pero avisa: pueden no ser adecuadas en la práctica	Pág 32
El fin de curso, de nuevo a debate este miércoles por Gobierno y comunidades. MAGISTERIO	Pág 33
Una brecha que crece semana tras semana. MAGISTERIO	Pág 33
Ministerio y CCAA acuerdan generalizar la promoción de curso y no avanzar más temario. MAGISTERIO	Pág 35

Evaluación final del curso: el virus desempolva viejos dilemas. EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN	Pág 36
«La segregación imposibilita que la educación a distancia tenga la menor eficacia». EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN	Pág 38
Los docentes, divididos por la manera de afrontar la evaluación final del curso. EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN	Pág 40
La «regla general» será pasar de curso; repetir, «la excepción». ESCUELA	Pág 42
Post Covid-19: lecciones aprendidas sobre lo que las escuelas deben hacer. ESCUELA	Pág 42
No habrá curso en verano, los alumnos podrán suspender y repetir será «excepcional». ESCUELA	Pág 46
Ciberdelincuencia, otro virus que acecha a la educación. ESCUELA	Pág 48

EL PAÍS

EDITORIAL

Curso interrumpido

La evaluación escolar no puede ignorar los desequilibrios tecnológicos

EL PAÍS. 10 ABR 2020

La comunidad educativa está pendiente de la decisión que adopten las autoridades académicas sobre el futuro del curso escolar tras el cierre de los colegios, hace ya un mes, por la crisis del coronavirus. El Consejo Escolar del Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno en la materia pero cuyas decisiones no son vinculantes, es partidario de que el conjunto de actividades que los alumnos han venido realizando en sus domicilios a través de herramientas telemáticas sean evaluables. Mantiene, no obstante, una excepción para aquellas familias que no dispongan de los medios tecnológicos apropiados para que sus hijos puedan seguir las clases *on line*, pero no da instrucciones sobre cómo llevar a cabo esta función. Proponer que el profesorado realice seguimientos personalizados para valorar las tareas realizadas por los alumnos es poco realista y totalmente incomprensible ante las dificultades derivadas del confinamiento.

Frente a los problemas para completar el curso, algunos países han optado por plantear un aprobado general, obviando las calificaciones obtenidas antes del aislamiento. Esta posibilidad, por la que se inclina Italia, ha sido rechazada de plano por el Consejo Escolar que, además, es partidario de que los alumnos puedan repetir curso en casos extraordinarios. La cuestión es cómo discernir en qué situaciones han quedado rezagados por decisión propia o si lo han hecho por carecer de los instrumentos necesarios para engancharse a las clases virtuales. Es preciso tener en cuenta que al menos el 10% de los 8,2 millones de alumnos de las enseñanzas regladas no universitarias carecen de Internet en sus hogares. Aplicar un rasero único sin valorar los desequilibrios tecnológicos a la hora de evaluar el aprendizaje durante la cuarentena sería una medida injusta que perjudicaría a los sectores menos favorecidos.

Especial relevancia adquiere la situación de los estudiantes convocados a Selectividad. Algunas voces reclaman que los exámenes solo contemplen la materia que se ha impartido hasta marzo. La decisión sobre los contenidos de la prueba de acceso a la Universidad está todavía pendiente y se espera que próximamente haya un pronunciamiento por parte del Ministerio de Educación y de las comunidades, pero parecería razonable que para garantizar la igualdad de oportunidades el examen se circunscribiera al temario anterior a la declaración del estado de alarma. Sería la mejor manera de no perjudicar al colectivo de estudiantes más vulnerable, aquellos que han quedado desconectados de las clases *on line* por falta de equipamiento. Ante un curso alterado abruptamente en todas las etapas escolares por la emergencia sanitaria, las autoridades educativas deberían aplicar criterios acordes a las circunstancias.



Madrid llega a un acuerdo con todas las universidades sobre cómo evaluar a estudiantes

La sustitución de las pruebas presenciales están previstas por pruebas online en tiempo real síncrono con preguntas cortas de desarrollo temporizadas y aleatorizadas en la que se exija al alumno razonar la respuesta

EP. 10/04/2020

La Comunidad de Madrid, a través de la Fundación para el Conocimiento madri+d, ha llegado a un acuerdo con todas las universidades públicas y privadas sobre cómo evaluar a los estudiantes en estas circunstancias excepcionales de estado de alarma por coronavirus.

En declaraciones remitidas a los medios, el consejero de Universidad, Ciencia e Innovación de la Comunidad de Madrid, Eduardo Sicilia, ha señalado que el acuerdo se enmarca en la evaluación de los universitarios madrileños en este ejercicio académico.

«En un tiempo récord han llegado a un acuerdo las todas las universidades con la agencia de evaluación sobre cómo en estas circunstancias excepcionales se puede evaluar a los universitarios de una forma justa teniendo en cuenta la situación, la carrera y los estudios que cada uno está realizando. Estamos muy satisfechos», ha celebrado el consejero.

En concreto, en el documento al que se adhieren todas las universidades se producen cambios en las pruebas de evaluación. En las pruebas finales correspondientes a las convocatorias oficiales de evaluación ordinaria y extraordinaria se realizarán de manera presencial, «esperando que la situación cambie».

La sustitución de las pruebas presenciales están previstas por pruebas online en tiempo real síncrono con preguntas cortas de desarrollo temporizadas y aleatorizadas en la que se exija al alumno razonar la respuesta. Habrá también exámenes con batería de preguntas tipo test multiple choice, exámenes con parte tipo test y parte de redacción, con una contraseña para entrar en el examen y un tiempo para realizarlo y entregarlo, sin posibilidad de ir hacia atrás una vez iniciada cada parte y que las preguntas aparezcan en orden aleatorio para cada estudiante.

Exámenes orales a distancia con interacción directa entre el docente y el estudiante, se realizarán mediante videoconferencia articulando sistemas de grabación y custodia de las pruebas.

La evaluación continua será evaluación sumativa por actividades/proyectos realizados, exámenes a libro abierto, portafolios digitales, entrevistas de autoría y la evaluación continua final a través de la plataforma educativa, que aporte la calificación que antes se obtenía del examen final.

Esta actividad podrá adoptar diferentes modalidades (Cuestionarios, casos prácticos, informes...) en función de las características de las asignaturas y llevarse a cabo de forma síncrona y en un periodo limitado de tiempo. A efectos de asegurar la identidad del estudiante, sería posible prever una entrevista a cámara abierta entre el profesor y el estudiante debidamente identificado que compruebe que sus respuestas y argumentación coinciden con la prueba realizada.

HUFFPOST

Las incógnitas a las que se enfrentan diez millones de estudiantes y sus posibles soluciones

Mila Fernández / Paula M. González. 10/04/2020

En unos días se cumple un mes desde que todos los centros educativos de españoles cerraron sus puertas como medida para luchar contra la expansión del coronavirus. En un horizonte cercano no se vislumbra la posibilidad de que los diez millones de escolares y universitarios vuelvan a las aulas en las próximas semanas y recuperen el ritmo de su aprendizaje y formación.

Pero comienza la cuenta atrás: al curso 2019-2020 le quedan pocas semanas de vida y aún se desconoce cuál va a ser ese final. ¿Cómo y de qué manera van a ser evaluados los alumnos? ¿Cuándo se hará la prueba de la EBAU? ¿Baraja el Gobierno el aprobado general? ¿El curso se extenderá hasta julio?

Desde el Ministerio que dirige Isabel Celaá recuerdan que en España la gestión de la Educación está transferida a las comunidades autónomas. Son los consejeros de cada una de las autonomías los que determinan cómo evaluar el curso. Según la portavoz del Ministerio de Educación, todavía no hay ningún planteamiento claro y emplaza a esperar a la reunión que el miércoles mantendrá la ministra con los consejeros, de donde saldrán decisiones más o menos definitivas.

Mientras el desconcierto y la incertidumbre se extienden entre alumnos, padres y docentes, la comunidad educativa ha intensificado en los últimos días el debate sobre este final de curso, manejando diferentes soluciones que garanticen la calidad y la equidad de la educación en las actuales circunstancias.

Estos son algunos de los debates abiertos:

¿Baraja el Gobierno el aprobado general como ha hecho Italia?

En los últimos días esta ha sido una de las medidas más debatidas en redes sociales, especialmente desde que Italia anunció su aplicación.

Aunque no se trata de lo que figuraba en un primer borrador, ya que el aprobado general en Italia tiene sus límites: el Gobierno garantiza que todos los alumnos pasarán de curso, sí, pero también serán evaluados de los contenidos impartidos en estas semanas de confinamiento teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad.

En España, el Consejo Escolar de Estado, el máximo órgano consultivo en materia de Educación, rechaza la opción aprobada por Italia. Ahora bien, sugiere que suspensos y repeticiones sean casos extraordinarios.

La FAPA Giner de los Ríos (Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres de Alumnos) reconoce que la expresión “aprobado general” asusta a gran parte de la población, “pero lo cierto es que si alguien repite tiene que ser de una manera excepcional y muy justificada”. “En una situación especial hay que tomar medidas extraordinarias y esa posibilidad en las enseñanzas medias es, sin duda, posible”, agregan fuentes de la Federación.

Una de las organizaciones que apuesta de forma rotunda por eliminar las repeticiones es el Sindicato de Estudiantes. “La única forma de garantizar que ningún estudiante se quede atrás, independientemente de su posición socioeconómica, es que todos y todas pasemos de curso y que se readapten los planes de estudio para que cursemos los contenidos esenciales de este año el año que viene”, reclama su secretaria general, Coral Latorre.

¿Cómo se va a evaluar a los alumnos?

Este es el punto que suscita el debate principal. La portavoz del Ministerio de Educación insiste en que la semana que viene la ministra y los consejeros abordarán cómo se podrá poner nota a esta tercera evaluación. “No sabemos cuándo va a acabar esto, y sin un horizonte claro es complicado tomar una decisión, aunque los estudiantes necesitan tener alguna certeza”.

De momento, la única que pueden ofrecer es que ningún alumno va a perder el curso por esta circunstancia. “Habrá que adaptar las pruebas de evaluación con justicia y equidad”, señala la portavoz, quien subraya que se debe trabajar para que “esa brecha digital” no se convierta en “una brecha social”.

El Consejo Escolar de Estado recomienda la evaluación de los contenidos impartidos desde el pasado 15 de marzo, cuando quedaron suspendidas las clases presenciales en toda España y fueron sustituidas por clases telemáticas.

Esta propuesta se ha encontrado con la oposición de algunas organizaciones. Para el Sindicato de Estudiantes “es un absoluto sinsentido examinar de esos contenidos porque mientras vemos en los hogares el drama de la enfermedad, los fallecimientos de familiares, los ERTes y despidos... parece que tenemos que actuar como si no pasase nada y siguiéramos el curso con normalidad”. Además, insisten en que la brecha digital dejará en un segundo plano a los que menos recursos tienen: “Se plantean los exámenes con las clases **online** como alternativa, y esa herramienta no llega a muchos estudiantes. Es injusto y antidemocrático”.

La misma opinión manifiesta el presidente de la FAPA Giner de los Ríos, Camilo Jené: “Es injusto, no ya por la brecha digital que existe y que es imposible que durante este periodo de tiempo se consiga evitar, sino porque en realidad se va a evaluar no al alumnado, sino a la situación familiar que vive. Hay una gran variedad de situaciones que se están viviendo, y las familias y las posibilidades socioeconómicas y socioculturales, además de las situaciones personales, influyen mucho en nuestros hijos. De evaluar de esta manera, se dejaría de apostar por la equidad y la igualdad de oportunidades, algo que no se debe permitir”.

¿Hay fecha para la EBAU?

Se ha hablado de algunas fechas, pero no se ha llegado a concretar nada. En la anterior reunión interterritorial, celebrada el 17 de marzo, las comunidades, universidades y los ministerios de Educación y Universidades acordaron retrasar las pruebas de la EBAU (Selectividad) y celebrarlas entre el 25 de junio y el 9 de julio. Desde el ministerio aseguran que será adaptada a las circunstancias: los alumnos tendrán muchas más opciones a elegir y no se encontrarán con un examen pensado para “pillar”.

Tras la reunión que el Consejo Escolar mantuvo el martes, este órgano aconseja estudiar una nueva propuesta dada la evolución de la pandemia y que las autonomías fijen un nuevo calendario para “garantizar el acceso del alumnado con la debida seguridad, según las indicaciones de las autoridades sanitarias”.

¿Se alargará el curso?

Es improbable. En un principio fue una de las posibilidades que se barajó para completar el programa lectivo. Esta opción parece ahora descartada y ya son varias las comunidades que se han pronunciado contra la medida.

En este sentido, el Consejo Escolar del Estado entiende que no se deben prolongar las clases por dos motivos: primero, el profesorado, el alumnado y las familias están haciendo un gran esfuerzo intelectual para seguir el curso con la formación no presencial; y segundo, hay que tener en cuenta “los inconvenientes que podría suponer esta medida para la programación de las vacaciones y la conciliación familiar”.

¿Qué está pasando en las universidades?

La gran mayoría de facultades de España han suspendido definitivamente las clases presenciales, pero el curso se ha visto considerablemente alterado. Mientras siguen con las clases online, las prácticas en muchas ocasiones son toda una incógnita, así como los exámenes, a la espera de ver cómo evoluciona la pandemia y vamos retornando a la vida normal.

El Gobierno ha decidido dejar en manos de las diferentes universidades—y de las comunidades autónomas—la decisión de dar por terminado el curso de forma presencial, así como de aplazar o reducir prácticas y temarios.

En las últimas horas, las 13 universidades de la Comunidad de Madrid han llegado a un acuerdo con la Consejería de Educación que prevé una prórroga general de dos semanas del calendario y de las convocatorias ordinaria y extraordinaria.

En líneas generales, las clases teóricas serán virtuales, mientras que las prácticas se sustituirán por otros contenidos, se harán en junio o se aplazarán, en función de las materias. Si no puede ser presencial, la evaluación final podrá realizarse de forma virtual, en directo y grabadas para su posterior comprobación, o bien por evaluación continua.

En un comunicado remitido a los alumnos estos días, la Universidad Complutense ha aclarado que la docencia virtual se mantendrá hasta el 29 de mayo; que cada facultad “determinará los períodos (junio/julio y julio/septiembre) y modalidades de evaluación (virtual o presencial) que mejor se adapten a las necesidades específicas de su área de conocimiento y que cada una decidirá también la posibilidad de retomar las prácticas presenciales si la situación de crisis sanitaria lo permite.

En plenas vacaciones de Semana Santa, la incertidumbre planea sobre estudiantes, familias y profesores. “El tiempo pasa y necesitamos saber qué va a ocurrir con nuestro futuro”, reclama la secretaria general del Sindicatos de Estudiantes.

LA VANGUARDIA

Educació 360 reclama un “verano educador” para rehacer la “brecha de desigualdades” que dejará el confinamiento

Un verano que permita rehacer tanto las carencias educativas que hayan quedado pero también las emocionales una vez levantado el confinamiento

ACN, BARCELONA. 11/04/2020

El confinamiento por coronavirus afecta de manera directa niños y adolescentes, que desde el 12 de marzo no han podido volver a las aulas y no saben con certeza cuando lo podrán hacer. En este contexto, la Aliança Educació 360 apuesta por un “verano educador” que permita rehacer tanto las carencias educativas que hayan quedado pero también las emocionales una vez levantado el confinamiento.

“La brecha de las desigualdades educativas se ampliará”, afirma a la ACN la directora de la Aliança, Fathia Benhammou. La llamada reclama actividades que combinen el apoyo educativo y competencial con las lúdicas y que éstas sean “accesibles para todos”, especialmente dirigidas a los más vulnerables que durante el confinamiento no hayan tenido los recursos necesarios.

La propuesta surge ante la certeza de que durante las desconexiones escolares, como el verano, hay una pérdida de aprendizajes. Algunos estudios en Estados Unidos apuntan a que al final de la etapa primaria puede haber una diferencia de tres años entre las familias con más recursos socioeconómicos con las de menos por estas desconexiones. “Ahora llevaremos muchos meses”, plantea la directora del Aliança.

Benhammou explica que con el confinamiento se está pidiendo a muchas familias que hagan “un nuevo rol, el de docente” y recuerda que “no todas tienen los recursos para acompañar a los niños y dar todos los elementos necesarios de aprendizaje “. Puntualiza que no habla sólo de recursos tecnológicos sino también competenciales. Ante esto, la propuesta de verano educador señala la importancia de ofrecer actividades que solucionen estas carencias pero incide también en la necesidad de acompañamiento emocional de niños y adolescentes.

“No olvidemos que los niños han sido confinados”, plantea la directora. Añade que el aprendizaje “tiene mucho que ver con la emoción” y por ello reivindica que las herramientas digitales que se puedan utilizar durante el confinamiento t “no sustituyen las relaciones personales”. “Se deberán reconstruir las relaciones personales con los amigos, con los docentes y entre los docentes y las familias”, plantea.

Benhammou reconoce pero que no hay certeza de que durante el verano se puedan llevar a cabo estas actividades grupales según evoluciona la pandemia del coronavirus y por ello plantea garantizar al menos hacerlas durante las dos primeras semanas de septiembre. En este caso debería ser “intensivo” para prepararlos “para que en septiembre puedan continuar con su aprendizaje con igualdad de condiciones y garantías”.

Cómo cerrar el curso escolar se ha convertido en el principal debate educativo: ¿qué hacer con el tercer trimestre?

A la espera de las instrucciones de cada comunidad autónoma respecto al final de curso, los profesores creen que no se pueden poner notas en un trimestre sin clases presenciales, aunque dudan del aprobado general

Daniel Sánchez Caballero / Pau Rodríguez. 12/04/2020

Con más de diez millones de estudiantes en todo el país, rara es la familia que no sufre estos días la incertidumbre educativa. Las dudas se amontonan, y muchas de ellas no se van a resolver como pronto hasta el día 15, cuando está prevista la Conferencia Sectorial entre Ministerio de Educación y comunidades autónomas para tomar decisiones una vez que haya, se espera, alguna certeza más respecto al confinamiento.

¿Qué hacemos con el tercer trimestre, a punto de empezar? ¿Y con el curso entero? ¿Aprobado general, como piden los estudiantes pero ha descartado el Consejo Escolar del Estado? ¿Debe evaluarse el tercer trimestre con clases a distancia o solo lo impartido presencialmente? El debate divide a familias y profesores, como se puede comprobar en una pequeña muestra revisando los comentarios de los lectores de este texto de Isaac Rosa.

La discusión, en parte, remite a otra un poco más amplia. ¿Qué importancia le damos a un curso escolar en el orden de las cosas en plena pandemia mundial? ¿Está en la primera línea de nuestras preocupaciones o con la que está cayendo ha pasado a un segundo nivel? ¿Sería muy grave que los alumnos perdieran un año? ¿Les afectaría académicamente en un futuro inmediato promocionar sin haber cursado un trimestre? Y, por otro lado, ¿se puede permitir la sociedad española dejar a los niños y adolescentes sin apenas estímulos educativos durante tres meses, más otros tres de vacaciones? ¿Cuán perjudicial puede ser eso para los alumnos de entornos más desfavorecidos, que suelen ser los que más se benefician del colegio?

Hasta ahora, y mientras se esperaba a ver si el futuro se despejaba, la solución adoptada por la mayoría de las comunidades autónomas y centros ha sido repasar y consolidar contenido sin avanzar en el temario. Al menos no se avanza mucho, y seguro que no de manera generalizada, según cuentan los profesores. La brecha digital es una realidad para muchas familias, que no cuentan con buena conexión a internet o que no tienen suficientes dispositivos, y no se puede obligar a los alumnos a avanzar todos a una con la variedad de casuísticas que hay.

La estadística habla de que un 14% de los hogares con menores no tienen ordenador en casa, dato que sube al 30% (casi uno de cada tres) cuando tienen pocos recursos. Con o sin menores, el 58% de los hogares más pobres tiene uno o ningún PC en casa, mientras el 61% de los más ricos tienen tres o más.

Pero algo tienen claro los profesores. Todos los consultados para elaborar este reportaje sobre cómo cerrar el curso 2019-2020 han contestado, espontáneamente, que lo más importante es mantener el contacto con los alumnos, tratar de que sigan haciendo actividades vinculadas a lo que han aprendido hasta ahora y que ninguno de ellos acabe penalizado por culpa de la epidemia.

Lo que sí parece descartado es el aprobado general que pedían algunas asociaciones de estudiantes y que va a aplicar Italia. Los consejeros de Educación del PSOE lo han descartado, misma línea que ha tomado el madrileño, del PP, quien afirmó el miércoles que hacerlo "sería enviar un mensaje de que el esfuerzo no sirve para nada. Es nocivo y no compartimos ese criterio".

Una de las pocas certezas en este momento, siempre a expensas de cómo evolucione la situación, es que Gobierno y comunidades autónomas han decidido que la Selectividad se va a celebrar.

La importancia de seguir 'enchufado'

En el colegio Eduard Marquina de Barcelona, con un elevado porcentaje de alumnado de clase baja, los primeros días del estado de alarma se dedicaron casi exclusivamente a gestionar las tarjetas monedero para las becas comedor y a llamar a todas las familias para saber cómo estaban sus hijos. "A partir de aquí, hemos ido enviando tareas periódicamente a través del blog, con contactos semanales por teléfono con los tutores", explica su director, David Martín.

Este docente tiene claro que no podrán llegar a todas las familias "en las mismas condiciones" debido a la brecha digital, pero aun así se resiste a dar el curso por perdido. En buena medida, porque por precaria que sea la relación actual con sus pupilos, asegura que estos lo agradecen. "Sin contacto presencial es muy difícil tener un retorno, sobre todo en Primaria, pero no hacer nada es peor. Hemos de intentar que no desconecten de lo que han aprendido", resume.

Alberto Arriazu, director de un instituto en Navarra, también incide en la importancia de mantener la actividad. "Hacemos una función social muy importante el profesorado para que se pueda llevar el confinamiento en las casas. En las casas con varios adolescentes, si no tienen unos ratos en los que estudiar y trabajar, con un seguimiento, sería mucho más complejo", reivindica.

En Navarra, la consejería envió una instrucción "lo suficientemente ambigua, en el buen sentido" para que los centros continuaran su labor con la vista en el alumnado. Arriazu explica que no es lo mismo Infantil o Primaria que Secundaria a la hora de valorar cómo se sigue y se evalúa. Otros profesores añadirán: "Los cursos importantes son 4º de la ESO y 2º de Bachillerato, que son terminales [cierran una etapa y otorgan un título]. Ahí está la clave".

En Madrid, la consejería tampoco ha dado indicaciones sobre cómo hay que proceder con el trimestre. "Yo tengo un 2º de Bachillerato y mi obligación es prepararles para la EBAU [la selectividad, llamada también EvAU en algunas comunidades autónomas]", explica un docente. "En 1º igual no hace tanta falta, se pueden enmendar las posibles carencias de este curso en 2º".

Evaluaciones y repetición

Ligadas entre sí, qué va a pasar con las evaluaciones y la repetición es una de las cuestiones más comentadas estos días. El Sindicato de Estudiantes y la confederación de asociaciones de estudiantes CANAE solicitaron una especie de "aprobado general" y que todos los alumnos promocionen. El Consejo Escolar del Estado tumbó la propuesta el martes.

El director Martín, en Barcelona, descarta de plano que se realicen evaluaciones al uso. Mucho menos que se ponga nota o se haga repetir curso. Sobre ello, en Catalunya el Departamento de Educación envió un comunicado a los claustros pidiendo que preparasen ya una tercera evaluación a partir del 14 de abril, que con toda probabilidad será en situación de confinamiento. En esa directriz, la Administración catalana planteaba seguir adelante con las calificaciones, pero adaptadas a las limitaciones formativas actuales y haciendo hincapié en la necesidad de no penalizar a nadie.

Para salvar la brecha digital que sufren los más desfavorecidos, el conseller catalán, Josep Bargalló, anunció que harían acopio de tabletas y ordenadores de los colegios y otros equipamientos para repartirlos entre las familias y que negociaría con las operadoras. Pero de momento no hay novedades sobre esta solución, que se propugna en otras comunidades aunque muchos docentes no creen que –sin hablar siquiera de que las tabletas lleguen o no– pueda utilizarse como un argumento para seguir avanzando.

Cada comunidad está funcionando como mejor le parece. En Murcia la instrucción de cara a la evaluación ha sido atender lo que se hizo durante el curso presencial. En Navarra no hay indicación, pero "la consigna interna era que se tiene que contar lo que estamos haciendo, aunque no sabemos cómo", cuenta Arriazu. En Madrid tampoco se ha notificado de manera oficial.

Ismael Palacín, director de la Fundación Jaume Bofill, cree que sería "injusto" que en una situación así se pusiese presión al alumnado con las notas, o con el temario, pero a la vez añade que no por ello hay que renunciar a hacer una evaluación, que al fin y al cabo consiste en valorar los aprendizajes de cada alumno, sea en el contexto que sea. Al contrario, lo que plantea es que los docentes puedan hacer planes personalizados y proponer actividades y lecturas que los escolares puedan hacer más o menos solos, y de las que puedan extraer aprendizajes. "Las limitaciones durante estos meses serán muchas, hay que asumir que algo se perderá, pero no todo, y no tanto porque los alumnos estén en casa, sino también porque no estamos preparados ni metodológicamente ni culturalmente para un aprendizaje en línea", sostiene.

En una línea similar se expresa Raimundo De los Reyes, presidente de la federación de directores de institutos Fedadi y director de un centro en Murcia. "A los alumnos que pueden", y remarca este condicionante, "hay que colaborar para que su tiempo sea formativamente rentable", opina. "Si un profesor tiene la posibilidad de impartir una clase telemática a su grupo de alumnos y que trabajen en igualdad de condiciones, ¿por qué no?".

"No es tan grave perder un trimestre"

Arriazu sostiene que "la cuestión de qué hacer con estos dos meses de curso es casi irrelevante. "La idea es que el alumnado pueda trabajar. Unos lo harán bien, otros no, pero eso no puede servir para evaluar a nadie", dice. Pero, más allá, cree que la pérdida académica es irrelevante. "Lo importante es que los chavales tengan disciplina, se levanten a una hora, hagan sus tareas... No es tan grave perder un trimestre. Son dos meses como mucho (el tercer trimestre suele ser más corto). En la vida estudiantil de cualquier alumno no es nada", reflexiona, y cita el caso de los estudiantes de medicina que están siendo llamados a filas por la falta de personal sanitario: "No han terminado la carrera, que es una de las más complejas y en la que todos esperamos que estén bien preparados, y nadie pone en duda que se estén enviando a hospitales".

En esta circunstancia, los profesores no defienden el "aprobado general", pero sí creen que "más vale que nos equivoquemos aprobando a alguien [que no lo merecería] que suspendiéndolo", explica Arriazu. "Y si pasa alguno que no debía, ya sufrirá el siguiente curso". Además, recuerda este director, la repetición ya es un recurso extraordinario. "Igual aprendemos algo este año a costa de que no repita casi nadie y vemos que no es tan dramático", desliza.

De los Reyes cree que sería más correcto hablar de "promoción automática". ¿Cuál es la diferencia? Que no se aprueba a nadie, no se regalan aprobados. La idea sería conectar este curso con el que viene y programar teniendo en cuenta esto. Si yo tuve un grupo que pudo seguir clases telemáticas y he podido dar contenidos, no los repito", explica.

"Lo que sí me parecería mal es que el motivo de la repetición fuera no haber tenido los recursos para seguir la enseñanza telemática", añade este director. "Y los profesores saben qué alumnos tienen los recursos y cuáles no. Se trata de no dejar atrás al que no ha podido, no al que no ha querido. Y ahí las circunstancias van a variar mucho de una zona a otra".

El docente madrileño se muestra de acuerdo con esta apreciación. "Los alumnos que hayan suspendido la primera y la segunda evaluación igual sí tienen que repetir, no me parecería bien como docente que quien no ha hecho nada en todo el curso se aproveche de esto para pasar de curso con una formación nula".

Palacín, sociólogo, cree que la brecha digital no puede ser una excusa. "Si el problema es que no hay aparatos, repartámoslos. Si la Administración no puede hacer eso, ¿de qué nos sirve?", se pregunta. Y reconoce que más importante que la tecnología para los alumnos es tener a un adulto que les pueda ayudar mientras hacen las tareas. Para ello recomienda las llamadas de profesores o el WhatsApp. "Si no hacemos nada, será por despreocupación", defiende.

EL PAÍS

La desesperada búsqueda de los alumnos que se han quedado desconectados del sistema educativo

El día que cerraron las escuelas el 10% del alumnado perdió el contacto con sus profesores. En algunas comunidades autónomas la policía les lleva las tareas en papel

IGNACIO ZAFRA. Valencia 13 ABR 2020

Para la mayoría de alumnos seguir el curso por Internet está siendo difícil; para un sector está resultando un infierno, y hay un tercer grupo que el mismo día del cierre escolar, hace cuatro semanas, desaparecieron del radar académico y los centros no han vuelto a saber nada de ellos. Estos son los que le quitan el sueño a Antonio Solano, director del instituto Bovalar de Castellón. "Uno de los que más me preocupa es un chico que tengo en clase, que iba trabajando bien y al que por mucho que hemos estado llamando, nada. Y pienso: pero ¿dónde estará, qué estará haciendo? Quiero creer que está bien, pero la angustia no me la quito".

Solano es uno de los muchos profesores que, sin importarles que sean o no vacaciones, están buscando "como locos" a los alumnos que han quedado desconectados del sistema educativo, parte de los cuales cursan enseñanzas obligatorias. Nadie puede precisar su número, porque las autonomías todavía están elaborando censos con la información que les van remitiendo los centros. Una vez localizados, algunos territorios, como Navarra y el País Vasco, están recurriendo a policías y voluntarios para entregar las tareas casa por casa en papel. Madres, como Noelia Güelfo, cuyo hijo estudia en San Roque (Cádiz), están haciendo llegar los ejercicios a través de WhatsApp a familias que no tienen otra conexión que el móvil. Y casi todas las comunidades han iniciado el reparto de ordenadores y tabletas en cantidades variables -entre un millar y 14.000, según la autonomía-, pero insuficientes.

El Ministerio de Educación estima que un 10% de los 8,2 millones de alumnos de enseñanzas generales no puede seguir las clases por Internet. La estadística es, sin embargo, muy aproximada, basada en la encuesta sobre tecnología doméstica del INE. Cataluña y la Comunidad Valenciana consideran que el porcentaje ronda probablemente el 15%. Y los sondeos que han hecho las asociaciones de madres y padres de Granada, Jaén y Sevilla lo elevan al 20%.

El problema, dice Leticia Vázquez, presidenta de la conferencia de asociaciones de padres de Andalucía, no es solo tecnológico: "Muchas casas no tienen bastantes ordenadores para teletrabajar y estudiar, ni todas las familias tienen el tiempo y los conocimientos necesarios para ayudar a sus hijos". Miguel Soler, secretario autonómico de Educación valenciano, cree que al menos un tercio del alumnado no está en condiciones de seguir bien el curso.

Capturas de pantalla

Llamando por teléfono a distintas horas del día y haciendo correr la voz entre los compañeros de clase, el instituto de Antonio Solano ha encontrado a 50 estudiantes que inicialmente no respondieron a los correos electrónicos. Entre ellos figuran los dos hijos de Paula Mosquera. En su pequeña vivienda de Castellón no hay ordenadores ni conexión a Internet. Pero en la casa donde Mosquera ha encontrado trabajo cuidando a un anciano sí hay wifi. "Lo uso para entrar en las páginas que dicen los profesores, hago capturas de pantalla de las tareas y se las mando a los niños. Les he recargado el móvil como he podido con cinco euros a cada uno para que puedan recibirlas. Lo que pasa es que algunos deberes tendrían que hacerlos directamente en las páginas y también hay aplicaciones que no entiendo, así que el 50% de las tareas están sin hacer", cuenta. La mujer está a la espera de recibir una de las 14.000 tabletas con acceso a Internet que la Generalitat valenciana está distribuyendo en los centros con índices socioeconómicos bajos.

También aguardan un dispositivo los dos hijos de Lucía Giménez, alumnos del mismo instituto de Castellón. "Yo no puedo permitirle comprarles un ordenador. Lo justo que cobramos es para pagar la casa, para los gastos y para comer", se lamenta Giménez. A ella la despidieron de una empresa de limpieza al inicio de la crisis sanitaria, y su marido cobra una pequeña pensión de invalidez.

La epidemia de coronavirus ha arrollado especialmente al sistema público, que acoge de forma desproporcionada al alumnado más desfavorecido. Estos, admiten los responsables educativos, sufren doblemente el cierre escolar: disponen de menos tecnología para seguir conectados a sus profesores y su entorno sociocultural no compensa la pérdida de aprendizaje que implica no ir a clase. "Llevo 24 años en la enseñanza pública y las últimas tres semanas son las peores de mi vida. En las que me sentí más impotente, desprotegida y sin posibilidad de alcanzar una cierta normalidad con mi alumnado", afirma Mercedes Queixas,

profesora de gallego en A Coruña, que no ha logrado conectar con el 40% de sus alumnos de primero de la ESO.

"Este año habíamos empezado a conectar a los responsables TIC de los centros", asegura Amanda Fernández, directora general de Innovación Educativa en Baleares, "pero de un día para otro pasamos de la actividad presencial para la que está diseñada la escuela pública a un modelo a distancia. Tenemos que dar una respuesta, pero es muy complicado".

CADENAS HUMANAS PARA ENTREGAR LAS TAREAS ESCOLARES

Decenas de municipios navarros están implantando sistemas para entregar puerta por puerta las tareas escolares en papel a los alumnos que no tienen medios para seguir la docencia por Internet, explica Gil Sevillano, director general de Educación del Gobierno Foral. Unas cadenas humanas en las que intervienen policías, bomberos, funcionarios municipales, voluntarios de Protección Civil y de la asociación Detente y Ayuda (DYA). La iniciativa empezó en lugares como Marcilla, Tafalla, Villafranca y el barrio de Mendillorri, en Pamplona, y ahora la mayoría de Ayuntamientos está articulando las suyas con el apoyo de la Federación Navarra de Municipios y Concejos y el departamento de Educación, señala Sevilla.

En Euskadi, la Ertzaintza y Protección Civil también están entregando trabajos escolares puerta por puerta. "En el colegio preparamos el material y ellos hacen la entrega. Estamos usando todos los medios posibles para conseguir contactar con los alumnos que no tienen acceso a Internet", afirma Inés Domínguez, profesora en un centro público de Sestao (Bizkaia). "muchos hogares que están viviendo el confinamiento en situaciones muy, muy precarias".

el Periódico de Catalunya

El trimestre escolar 'on line' arranca bajo el yugo de la brecha digital

*El Govern detecta 55.000 familias sin recursos tecnológicos para acceder a la educación desde casa
Educació apuesta por un "acompañamiento emocional" y descarta que los trabajos sean evaluables*

Carlos Márquez Daniel. BARCELONA. LUNES 13/04/2020

En estas cuatro semanas de confinamiento han florecido los especialistas en coronavirus y todo lo que tiene que ver de manera tangencial con la pandemia, como la educación, que inicia su tercer trimestre con el reto de seguir formando desde la distancia y en medio de un encendido debate sobre la falta de ordenadores que incrementa la brecha digital, el internet que no llega, las cuotas que no se han rebajado lo esperado, los profes ausentes, hiperactivos o sin medios, o los padres que trabajan y al tiempo corrigen una multiplicación o revisan una manualidad con plastilina. El Departament d'Educació, en aras de poner algo de orden y a expensas de si se vuelve o no a las aulas antes de que termine el curso, está intentando marcar las pautas de los próximos tres meses. Hay tres cosas más o menos claras: se intentará no dejar a nadie atrás y acompañar más que formar; las tareas, en principio, porque hay debate político, no serán evaluables, y solo se pondrán notas a los estudiantes de FP que estén a punto de conseguir un título y a los de segundo de bachillerato, donde los alumnos tienen la selectividad retrasada hasta julio. Y hay tres cosas que no están nada claras: se descarta, por ahora, el aprobado general; los padres y madres no tienen ni idea de qué harán con los niños pequeños cuando ellos tengan que volver a la oficina, y nadie sabe si los alumnos volverán a su pupitre antes del 19 de junio.

Los días que siguieron al fin de las escuelas, ese viernes 13 de marzo en el que las familias fueron avisadas 24 horas antes, el 'conseller' Josep Bargalló repitió en varias ocasiones la negativa del Govern a seguir formando a los chavales a distancia, con el argumento de que eso ensancharía la segregación escolar y la brecha entre los que, en general, en todo en la vida, tienen y no tienen. Aquel discurso se fue suavizando conforme el COVID-19 iba ganando terreno, y la 'conselleria' empezó a aportar material para que los centros lo distribuyeran de la manera más conveniente. De algún modo, se intentaba terminar el segundo trimestre al ralenti, con la vista puesta en el avance de la pandemia y en la semana santa, confiando, como suele hacerse, en que cada dirección de centro tomaría el sendero más adecuado. Un portavoz de Educació explicaba días atrás que pasadas las fiestas se darían "instrucciones nivel por nivel pero con el mensaje de fondo de que no se busca evaluar sino un acompañamiento". Eso se ha traducido en más de 100 modelos de propuestas didácticas para poder trabajar de manera virtual. Pero con un enfoque muy claro: "Tenemos que olvidarnos del concepto temario y de replicar el horario escolar durante el confinamiento", concretan desde el Govern. El plan, sin embargo, no es del agrado de sindicatos como CCOO, que advierte de que muchos docentes tienen personas dependientes a su cargo, lo que les "complicará mucho poder trabajar en las condiciones adecuadas". Según sus cálculos, tras una encuesta a 3.200 educadores, el 70% de los profesores no podrán seguir el curso desde la distancia.

Así las cosas, el curso se valorará en función de los dos primeros trimestres, con la citada excepción del último curso de FP y los que estén a punto de acceder a la universidad. En estos dos casos, tal y como ya avanzó el 'conseller', es probable que la formación -y las prácticas, en caso de la formación profesional- se alarguen 15 días para poder atenderlos. No está previsto por el momento el aprobado general. Y anunciarlo ahora sería un suicidio académico, puesto que sería como decirle a los chavales que acaba de empezar el verano. Si finalmente se toma esa decisión, lo más seguro es que se anuncie cuando el curso llegue a su ocaso. Lo de evaluar o no desde ahora hasta el cierre de las aulas, de hecho, es otro debate abierto, puesto que el Consejo Escolar Estatal recomendó la semana pasada al Ministerio de Educación que todo lo que hagan los estudiantes entre esta semana y mediados de junio sí tenga una nota computable. ¿Objetivo? Evitar que se "relajen". Con la salvedad de las familias sin recursos tecnológicos, para los que se suavizaría el nivel de exigencia. El Gobierno todavía no se ha posicionado.

Eso, sin embargo, parece que podría ensanchar efectivamente las diferencias sociales. En el caso de Catalunya, la segregación escolar a la que hacía referencia Bargalló intentará paliarse con un plan de choque tanto en la educación pública como en la concertada. Se ha enviado un cuestionario a todos los centros para poder detectar los casos en los que sea necesario aportar infraestructura de manera que los chavales puedan seguir el curso desde casa. La conclusión es que cerca de 55.000 hogares catalanes no disponen de los medios tecnológicos -informáticos o de conexión- para poder adaptarse a la nueva situación de educación confinada. La mayoría de casos, como es obvio, se dan en los colegios de máxima complejidad.

Censo tecnológico

Educació ha elaborado un censo de todo el material informático móvil del que disponen las escuelas (tablets y pequeños portátiles). Se han contabilizado 100.000 unidades que, con la radiografía de todo el territorio, empezarán a repartirse esta misma semana. Internet será otro cantar. Muchos hogares no disponen de red para conectarse, o la que tienen es muy deficiente para poder seguir la formación en condiciones. Para ello, el Govern ha hablado con empresas de telefonía para dotar a estas familias de tarjetas que les permitan tener una educación 'on line' aceptable. Está previsto entregar unos 23.000 paquetes de datos, a los que hay que sumar otros 3.000 que repartirá el Ayuntamiento de Barcelona. El propio 'conseller' ha admitido que le inquieta más el tema de internet que el problema de los ordenadores. "No llegaremos al 100%, ni de los niños ni de los profesores a los que también les hacen falta recursos, pero sí alcanzaremos un altísimo porcentaje".

Sentadas las bases, con el mensaje del "acompañamiento emocional", con el reto de democratizar la tecnología y con todo el material pedagógico a disposición en internet, es la hora de las escuelas y de los maestros. La hora de que, con el profundo conocimiento que tienen del tipo de alumnado al que atienden, y sin olvidar que también sufren los efectos de la pandemia y deberán hacer frente a todo tipo de malabarismos, planteen de qué manera pueden seguir siendo el puntal formativo de sus chavales. Eso sí, sin que ni ahora ni en el futuro les falten los medios necesarios para alcanzar el éxito educativo.



Alumnos sin acceso a la educación a distancia: la pandemia saca a la luz grandes desigualdades

No todos los estudiantes tienen acceso a Internet.

Aitor Álvarez Bardón, director del área de Psicología de la Educación. Facultad de Educación, UNIR - Universidad Internacional de La Rioja. 13/04/2020

Ante el imparable avance de la COVID-19 y su expansión a nivel mundial, una de las primeras medidas recaía directamente en las aulas. De un día para otro, los aproximadamente 10 millones de estudiantes que hay en España, según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, se quedaban en casa.

Y junto a ese cerrojo educativo surgían las primeras dudas, y algunos miedos también, sobre cómo dar respuesta a los alumnos y seguir apoyando su proceso de aprendizaje sin su presencia en las aulas.

Resurge el mundo online

En este punto, como respuesta ante el nuevo escenario que ha irrumpido en nuestras vidas, es cuando resurge el mundo **on-line** como modo alternativo a la educación presencial, ganando la credibilidad que durante muchos años se le ha negado al presentarlo como algo ajeno al ámbito educativo y cuyo uso se debía limitar a escasas actividades en línea. Casi nadie parecía concebirlo como algo que abre un sinfín de posibilidades para un desarrollo pleno del proceso educativo de los estudiantes.

Obligados por las circunstancias, los docentes empezaron a lanzar las primeras clases **on-line**, contando únicamente con su creatividad y su querer hacer las cosas bien, a pesar de que muchos nunca habían experimentado la docencia en un entorno fuera del presencial. Y así, de manera paulatina, se han ido sumando otro tipo de actividades de carácter extraescolar, de entretenimiento o de juego, con fines educativos o no, que pretenden aportar su granito de arena en este duro proceso por el que estamos pasando.

Ante el cambio de paradigma, nuevas desigualdades

Una vez que todo está en marcha, empiezan a surgir nuevas dudas razonables donde lo académico pasa a un segundo plano y comienza a adquirir importancia la valoración de las desigualdades que esta nueva realidad podría estar provocando.

Encontramos que cada colegio, instituto, universidad y Comunidad Autónoma establece su propio plan de actuación, diferentes entre ellos, y que limitan su proceso de adaptación. Los más avezados consiguen adaptarse a la nueva realidad y mantener, aunque sea de una manera distinta a la habitual, un ritmo “normalizado” de clases, tareas y exámenes, mientras otros, más anclados a estructuras presenciales, quedan atrás.

En este caso, se establece una primera desigualdad que no permite que en todo el país se avance de la misma manera ni al mismo ritmo, dando lugar a un importante malestar social, especialmente dentro del ámbito educativo. ¿Qué van a hacer los estudiantes que no tienen acceso a plataformas **on-line**, que no pueden hacer sus exámenes, que no pueden terminar sus temarios o que no pueden preparar la EBAU tal y como se esperaba?

No todos los estudiantes tienen acceso a Internet

Ante estas cuestiones que estudiantes, familias y docentes se plantean, se suman otras reflexiones que levantan un muro difícil de derribar y que nos hacen pensar en las características individuales de los alumnos y sus familias.

En primer lugar, y a pesar de que en España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el 91,4 % de hogares españoles tienen acceso a internet, a muchos alumnos, especialmente a aquellos en condiciones más desfavorecidas, se les priva de poder continuar con el aprendizaje curricular.

Pero también hay que sumar otros problemas a nivel tecnológico, pues no todos los hogares cuentan con ordenadores adecuados o suficientes (muchos tienen un solo ordenador para toda la familia, incluso ninguno), ni con impresoras o escáneres para poder realizar adecuadamente todas las tareas que se pueden exigir. Esta situación se agrava más aún en los hogares donde no hay una formación o experiencia previa en la utilización de estas herramientas.

También hay que tener en cuenta que, por su parte, los docentes se han tenido que poner al día, en tiempo récord, en el manejo de herramientas **online**, elaboración de recursos, así como para mantener el ritmo de aprendizaje de los alumnos adaptando el material de los contenidos programados para este curso educativo.

La brecha tecnológica se ha hecho más evidente que nunca. Todo esto ha generado una saturación en las familias y en los estudiantes de los niveles educativos más altos, que requieren un nivel de autonomía mayor y una mejor planificación.

En segundo lugar, preocupa el ambiente familiar en el que algunos estudiantes se encuentran actualmente, caracterizado por numerosas carencias y realidades como la violencia, la enfermedad o la falta de una estructura social que les apoye, y que les sitúa en entornos difíciles que no permiten dar respuesta a lo realmente importante, su bienestar.

Aún así, podemos encontrar una oportunidad para fomentar entre los alumnos la tan deseada y necesaria competencia de aprender a aprender, de ser autónomos en sus tareas y, en definitiva, de ser responsables de su propio proceso de aprendizaje. Una educación entendida desde la figura del docente con una labor de acompañamiento y desde una visión que coloca al alumno en el centro debería facilitar este proceso.

Y después del virus, ¿qué?

Nos enfrentamos a partir de ahora a un cambio social y educativo mucho más profundo de lo que posiblemente podíamos llegar a imaginar. Tenemos la oportunidad de generar nuevas respuestas a estas nuevas necesidades, y no solo de hacerlo, sino de hacerlo bien.

Todo parece indicar que el mundo **online** seguirá adquiriendo el protagonismo que merece, entendiéndolo como un entorno que convive con la presencialidad educativa, especialmente en el ámbito universitario, y que lejos de lo esperado nos permite interactuar y socializar más de lo que se creía, que nos permite emocionarnos con lo que hacemos y sentirnos parte de un todo, mucho más grande de lo que pensábamos.

Pero debemos tener presente que la educación **online** no consiste simplemente en adaptar de forma improvisada el contenido educativo a plataformas **online** para que los alumnos puedan enviar sus tareas y exámenes, dar clases virtualmente o establecer una vía de comunicación.

La docencia **online** requiere de un conjunto de recursos para asegurar que el estudiante esté acompañado en todo su proceso de aprendizaje, que se cuenta con los apoyos adecuados y con la experiencia y preparación necesarias para ofrecer recursos de calidad, trabajo en equipo entre docentes y estudiantes y, cómo no, un sólido modelo educativo y pedagógico.

Hoy dan ‘mates’ en La 2

Más de 170.000 escolares ven a diario los programas educativos de RTVE que incorporan a Ricky Rubio para sesiones de Educación Física y a escritores para contar cuentos

BEATRIZ LUCAS. MADRID - 13 ABR 2020

Raquel, de 12 años, duda cuando le preguntan qué está estudiando en Matemáticas: “¿En la tele o en el cole?”. Desde hace tres semanas, todas las mañanas Raquel y sus tres hermanos tienen una cita matinal con su nuevo profesor: el televisor. Porque en su casa no tienen la suerte de tener cinco portátiles o cinco tabletas. “Me sirve para desconectar de todo esto que me pone tan triste. Y me ayuda a repasar. ¡Y los contenidos de Ciencias Sociales me encantan! Ojalá hubiera siempre tele para aprender”, desea Raquel, que estudia 6º de Primaria.

Ella es una de los más de 170.000 alumnos que desde el 23 de marzo encienden la televisión para ver *Aprendemos en casa*, la televisión educativa que el Ministerio de Educación y Formación Profesional y RTVE han puesto en marcha para compensar la falta de clases presenciales. El objetivo: dotar de alternativas a los estudiantes sin medios tecnológicos. “Las familias están encantadas porque explican a los niños cosas que ellos a veces no pueden, ni saben. Es un alivio. Aunque los contenidos son mejorables y media hora al día por cada curso es insuficiente, es algo”, dice Nuria Hernández, directora del colegio Valle Inclán de Madrid.

El programa se puso en marcha en cuatro días, y es ya un referente. India, Francia, Portugal y el Banco Mundial han contactado con el ministerio para replicar la iniciativa. El reto era titánico: conseguir contra reloj contenidos educativos ya existentes, de calidad y que se adaptasen al currículo. Debían abordar cinco áreas educativas de los seis a los 16 años para emitir cinco horas diarias, de lunes a viernes.

Veinte técnicos de RTVE y de Educación teletrabajan clasificando materiales de editoriales, *youtubers* o plataformas educativas *online* que han cedido contenidos: “Nos reunimos por vía telemática, y diseñamos las parrillas con una semana de antelación” explica Federico Buyolo, coordinador de *Aprendemos en casa* y director adjunto del gabinete de la ministra de Educación Isabel Celáa. Lo más duro fue el arranque: “Nos pusimos en marcha un martes, y el lunes empezamos a emitir. En cuatro días vimos 978 vídeos, con colirio en los ojos, pero llegamos a tiempo”, señala. “Preparar un proyecto así habría llevado seis meses de trabajo. Pero hemos contado con la buena fe y la solidaridad de muchísimas personas”, explica Yago Fandiño, director de contenidos infantiles de RTVE. Diseñaron un horario para encajar las cinco materias y buscaron los huecos en la parrilla: tres horas en Clan TV, para estudiantes de seis a 12 años, y dos horas en La 2 para alumnos de 12 a 16 años. Cada día, una materia.

Las primeras emisiones lideraron las audiencias en sus canales, superando a imbatibles como *Bob Esponja* o *Peppa Pig* y concentrando hasta el 40% del público en su franja. Y a la audiencia analógica hay que sumar los 236.000 niños que vieron los contenidos *online*. El proyecto ha tenido también efectos inesperados: “Hay profesores que adaptan sus tareas a nuestros contenidos, o plantean retos en función de las clases de la tele”, apunta Buyolo. En casa de Mónica Alonso, en Astorga, sus dos hijos de seis y 10 años ven cada día las tres horas de televisión en Clan. “Es una fiesta. Les interesa, aprenden y a mí me da tiempo para mis cosas”, explica por teléfono. Cuando apagan la televisión llega la hora de las tareas del colegio.

En RTVE son conscientes de que salieron con contenidos mejorables y por eso han ido evolucionando. Unas semanas antes de la declaración del estado de alarma habían lanzado con el ministerio un proyecto educativo *online*, EduClan, que acumula en poco más de un mes 670.000 usuarios y 4 millones de vídeos vistos. El salto era llegar a la televisión analógica y aprovechar lo ya generado: “La directora Rosa María Mateo apostó por el rol de servicio de la tele pública desde que surgió la idea”. El parón de Semana Santa ha sido clave para seguir mejorando. “Tocaba repensar, incluir nuevos contenidos de educación emocional, nuevas metodologías...”, explica Federico Buyolo. Deportistas como la estrella de la NBA Ricky Rubio van a dar pautas de Educación Física, y habrá escritores leyendo cuentos desde sus casas. Además, un profesor cada día introducirá los contenidos y lanzará un reto a los telespectadores. Y han sumado al proyecto a la Asociación de Profesores de Matemáticas que han introducido nuevas metodologías.

Un cambio de paradigma

Los buenos resultados han animado a varias televisiones autonómicas a lanzar proyectos educativos como ETB, TV3, Aragón TV, TV Castilla y León o A Punt en Valencia. “Es un cambio de paradigma: ha puesto sobre la mesa que había un hueco por cubrir y una audiencia a la que le gusta aprender en la tele”, explica el coordinador del proyecto. “Que la tele se convierta en un vehículo educativo es bonito, fantástico y muy loco. Esto nos hace pensar en lo que ha de venir después. Los niños están ahí escuchando y tenemos que cuidarlos, no ignorarlos, ni tenerlos al margen”, concluye el director de contenidos infantiles de RTVE.

“La tele funciona como herramienta educativa y hay que seguir apostando por ella”

“Lo que demuestra esta experiencia es que la televisión funciona como herramienta educativa y ha de apostarse por ello, como ya se hace en Argentina o en Australia”, asegura Verónica Pastrana, organizadora del festival de televisión de calidad la Maleta Jeunesse y directora del programa infantil *LLamada Peluche* que adapta un formato danés.

Para Pastrana la clave del éxito en los contenidos educativos para niños es que "conecten con ellos, sean divertidos, les emocionen y se sientan identificados con los personajes escogidos para vehicular el aprendizaje", señala la productora. Cree que uno de los problemas al crear programas para niños es que los piensan adultos, desde la óptica y los prejuicios adultos y eso infantiliza demasiado a los espectadores: "A veces se les trata como si fueran tontos por ser niños, es mejor empoderarles, ser estimulantes, despertar su curiosidad, que aspiren a hacer cosas y resolver problemas en su vida cotidiana, que encajen con sus inquietudes y preocupaciones y con su edad". Y cree que algunas de las series de ficción que ya se están emitiendo en Clan cumplen a la perfección con estos requisitos. Por ejemplo Peg+Gato o Llamada Peluche, mezclados con las piezas más convencionales pueden encajar para ser una tele de referencia a nivel mundial", concluye.

europapress.es

Ciudadanos pide sustituir la 'ley Celaá' por una nueva reforma tras analizar los efectos de la pandemia en la educación

La formación naranja propone "actualizar de manera urgente los umbrales de renta familiar" para obtener becas al estudio

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) –

Ciudadanos ha pedido al Gobierno que retire su proyecto de reforma educativa, también conocida como 'ley Celaá', para crear una nueva subcomisión en el Congreso que elabore un proyecto alternativo mediante un "pacto nacional por la educación" tras analizar el impacto que ha tenido la pandemia del coronavirus en el sistema educativo español. Así lo expone el grupo parlamentario en una proposición no de ley presentada en el Congreso que contiene varias propuestas relacionadas con el impacto del COVID-19 en la educación.

Entre ellas, Ciudadanos reclama encargar al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) que estudie la incidencia de la suspensión de las clases presenciales en los resultados académicos del alumnado. También que ese estudio recopile "los problemas que hubieran podido obstaculizar la labor del profesorado a la hora de impartir las clases" de forma telemática, y proponga medidas "para hacer frente a situación similares que puedan darse en el futuro", según el escrito consultado por Europa Press que los diputados de la formación naranja Edmundo Bal y Marta Martín han dirigido a la Mesa del Congreso.

Con estas conclusiones, Ciudadanos sugiere abrir un debate parlamentario para consensuar un proyecto de reforma educativa. Una iniciativa similar a la emprendida en 2016 en busca de un pacto de estado sobre la educación, que fracasó dos años después cuando el PSOE y otros grupos de la oposición abandonaron esta subcomisión creada en el Congreso antes de que se alcanzara un acuerdo.

En su propuesta, Ciudadanos pide la retirada del proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), elaborado por el Ministerio que dirige Isabel Celaá, y que fue aprobado por segunda ocasión el pasado mes de marzo en Consejo de Ministros para iniciar su definitivo trámite parlamentario.

MODIFICAR LA RENTA PARA CONSEGUIR BECA

En esta proposición no de ley "sobre la optimización de recursos educativos y la resolución del curso 2019/2020 ante la crisis del COVID-19", Ciudadanos también solicita "actualizar de manera urgente los umbrales de renta familiar" para las becas y ayudas que otorga el Ministerio de Educación y Formación Profesional "con especial atención a las circunstancias económicas que ha generado la pandemia".

Además, la formación liderada por Inés Arrimadas insta al Gobierno a acordar con las comunidades autónomas unos "criterios básicos para orientar la evaluación a los docentes de todas las etapas educativas" este mismo curso, contemplando medidas para los estudiantes que "por motivos económicos, o por otras circunstancias, no hubieran podido seguir clases a través de herramientas digitales habilitadas por su centro".

En el mismo sentido, Ciudadanos propone reforzar la competencias básicas durante el periodo estival a través de un Programa de Cooperación Territorial "que sirva para complementar el contenido curricular impartido en las clases a distancia desde que se decretó el Estado de Alarma".

EL MUNDO ANDALUCÍA

La Junta no descarta que regresen los profesores a las aulas pero sin alumnos

Pide información a los centros para identificar a los alumnos que se han descolgado de la formación a distancia por falta de recursos. Además, la Junta ha reactivado ya la cobertura de las bajas docentes y los sustitutos podrán incorporarse esta semana

TERESA LÓPEZ PAVÓN. Sevilla. Lunes, 13 abril 2020

Aulas con profesores pero sin alumnos. Uno de los escenarios con los que trabaja la Consejería de Educación de cara al desconfinamiento a medio plazo es llamar a la reincorporación de los docentes pero para mantener la formación a distancia de los estudiantes. Antes de las vacaciones de Semana Santa, la viceconsejera, María del Carmen Castillo, apuntaba esta posibilidad en conversaciones mantenidas con algunos directores y el propio consejero, Javier Imbroda, lo admitía recientemente en una entrevista concedida a Europa Press.

Así, la Consejería baraja tres salidas posibles para lo que queda de curso: La primera, que se pueda recuperar la normalidad de las clases una vez que se relajen las medidas de distanciamiento social. Esta opción es hoy por hoy muy improbable. La segunda, que se prolongue la situación actual (con alumnos y profesores trabajando desde casa) hasta final de curso; y la tercera y más plausible, que los docentes vuelvan a trabajar de forma presencial a los centros pero sin alumnos, de manera que la misma tarea que ya realizan individualmente se pueda seguir desarrollando de forma mejor coordinada y efectiva y con los medios que la Consejería pueda poner a disposición de los colegios e institutos.

Además, los centros tendrán que garantizar que el proceso de matriculación se completa de manera presencial para aquellas familias que no hayan podido hacer la tramitación de forma telemática. Habrá, así, un periodo de tiempo para presentar solicitudes personalmente en las secretarías de los centros, con la idea de que no quede nadie excluido del proceso por problemas de acceso o de uso de las tecnologías.

Y, dado que es más que posible que el trabajo con los alumnos se siga realizando a distancia en los próximos meses, la Consejería de Educación ha iniciado en los últimos días un recuento de los alumnos que no están siguiendo de forma regular la formación a distancia. Preocupan especialmente los estudiantes de los últimos cursos de Bachillerato y Formación Profesional. Y será a ellos a los que la Junta destinará los fondos habilitados (propios y del Ministerio) para facilitar el acceso a internet, que incluye la compra de ordenadores portátiles y la financiación de la conexión a la red.

La Consejería de Educación ha pedido en los últimos días a los centros que colaboren en la identificación de los alumnos que tengan posibilidades de titular, es decir de terminar el curso con éxito, en 2º de Bachillerato y 2º curso de la Formación Profesional que, por razones económicas o de falta de medios, se hayan quedado descolgados de las clases *online* desde que arrancó la cuarentena.

El plan de la Consejería de Educación está especialmente enfocado a estudiantes de centros con planes de compensación educativa o ubicados en barriadas con especial riesgo de exclusión social (incluidas en el programa Eracis de la Junta). La Junta ha pedido a directores, tutores y equipos de orientación los datos de los alumnos susceptibles de recibir este apoyo extra, aunque la comunicación ha llegado a los centros durante los días festivos de la Semana Santa, lo que sin duda puede haber dificultado la recolección de la información.

SE REACTIVA LA SUSTITUCIÓN DE LAS BAJAS

Además, el consejero Imbroda ha reactivado ya *strong>* la sustitución de los docentes que están de baja, después de un mes de parálisis tras la suspensión el 16 de marzo del sistema de cobertura de los puestos (SIPRI), lo cual ha mermado las plantillas y supuesto un obstáculo añadido a la formación a distancia.

Según ha informado este lunes la Consejería de Educación, el director general del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, Juan Carlos Unión, ha dictado una resolución por la que se reanuda el procedimiento de provisión de puestos docentes a partir del próximo día 15 de abril. Además se modifica, "por razones de fuerza mayor", la forma en que se ha de realizar el acto de la toma de posesión de los puestos que se adjudiquen por este sistema de provisión, mientras se mantenga la situación actual de cierre de los centros docentes públicos, "pudiéndose producir la misma mediante escrito de la persona adjudicataria aceptando el nombramiento a su favor, por cualquier medio que permita su constancia, aceptándose como medio más idóneo, dada la circunstancia de confinamiento, el envío de email dirigido a la Dirección del centro donde va a prestar sus servicios".

Esta reactivación de las sustituciones permitirá completar las plantillas de los centros y, por tanto, facilitar el trabajo a distancia con los alumnos. En las últimas semanas, varias organizaciones sindicales habían reclamado que cubrieran las bajas, dado que el trabajo y el curso continúa en marcha.

EL PAÍS

Las familias y expertos en educación piden que se abran los colegios en verano

40 organizaciones y exdirigentes políticos instan a la ministra y a las comunidades a hacer "esfuerzos" para que los alumnos no se descuelguen del sistema y apoyo para la conciliación de las familias

ANA TORRES MENÁRGUEZ. MADRID - 14 ABR 2020

Se cumple un mes desde que cerraron los centros educativos y hay más incertidumbres que certezas. Los profesores todavía no han recibido una hoja de ruta sobre cómo evaluar a sus alumnos en un momento en el que aún no está claro si España optará por el aprobado general, como han hecho otros países europeos como Italia, o no. Ahora, organizaciones educativas y expertos lanzan una nueva petición: que se abran los colegios

durante el verano (si las condiciones sanitarias lo permiten) para que los alumnos que lo necesiten puedan reforzar contenidos curriculares, acceder a actividades deportivas y a un menú diario.

"Muchas familias no tienen los dispositivos digitales necesarios ni las habilidades o el nivel cultural para acompañar a sus hijos en un aprendizaje autónomo; nos estamos jugando que muchos chavales se descuelguen del sistema", explica Álvaro Ferrer, investigador de la ONG Save the Children, la impulsora de la carta remitida a la ministra del ramo, Isabel Celaá, y a los consejeros autonómicos, y firmada por 12 organizaciones educativas (entre ellas, la confederación de asociaciones de familiares de alumnos Ceapa) y por más de 30 expertos ligados a la Universidad y ex altos cargos en Educación (tanto del PSOE, como el ex secretario de Estado Álvaro Marchesi, como del PP), entre otros. La misiva —que contempla otras cuatro medidas— persigue que los dirigentes políticos, que se reúnen este miércoles para decidir cómo cerrar el curso ante la pandemia del coronavirus, aprueben medidas que frenen la brecha entre los alumnos más aventajados y los más desfavorecidos.

Desde que se decretó el estado de alarma, 8,2 millones de estudiantes de enseñanzas regladas no universitarias siguen el curso desde casa. A la brecha digital (el 10% de esos hogares no tiene acceso a Internet), se suma la situación de estrés que viven las familias por la pérdida de empleos y el confinamiento en espacios, muchas veces, reducidos. "No se trata solo de dar apoyo curricular, sino psicológico y de conciliación para las familias, que están viviendo situaciones muy duras", apunta Lucas Gortázar, investigador del Banco Mundial y firmante de la carta.

En el Reino Unido, la Defensora del Menor, Anne Longfield, reclamaba este fin de semana que las escuelas abran en algún momento durante las seis semanas de vacaciones estivales para ayudar a los niños a "ponerse al día" con el temario y, al mismo tiempo, ofrecer un apoyo a las familias que se reincorporarán a sus puestos. "Tanto si se abren para todos los alumnos como si no, tienen una función muy importante, especialmente para los más vulnerables", señaló Longfield. El sindicato de profesores británico manifestó que no es viable ni negociable porque supondría dejar a los docentes sin descanso.

Uno de los firmantes de la carta, Ismael Sanz, ex director general de Educación de la Comunidad de Madrid (con el Gobierno del PP) y profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, señala en el estudio *Efectos de la crisis del coronavirus en la educación*, publicado la semana pasada por la OEI (la organización de los estados iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura) que con el confinamiento los alumnos perderán de media un 11% de lo que se aprende en un curso escolar. Los efectos a largo plazo pueden suponer una pérdida del 1% de su salario cuando se incorporen al mercado laboral a los 30 años, según esa misma proyección. En ese informe, en el que participan otros dos investigadores, propone que durante el mes de julio se contrate a interinos que no están trabajando y a antiguos alumnos de los propios centros con estudios superiores y en el paro para atender a los estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato que lo soliciten.

La propuesta contempla recuperar el llamado plan PROA, impulsado por el Gobierno y las autonomías de 2005 a 2012 para prestar apoyo educativo a los alumnos con necesidades, y aplicarlo tanto en julio como a lo largo del curso 2020-2021. "Hay que actuar cuanto antes; si dejamos que ahora se descuelguen del sistema educativo, luego será mucho más difícil recuperarlos", indica.

España es el país de la Unión Europea con la mayor tasa de abandono escolar (un 17,3% frente al 10,6% de media de la UE) y, según los expertos consultados, el cierre de los centros y la pérdida de poder adquisitivo por parte de las familias podría empeorar esa cifra. Entre 2007 y 2012, la investigadora Jenifer Ruiz-Valenzuela, de London School of Economics, analizó el rendimiento académico de alumnos catalanes antes y después de que uno de sus padres perdiera el empleo como consecuencia de la crisis. La situación de desempleo conllevó una disminución de la nota media de los hijos del 13%, lo que supone medio punto al año.

En España, algunas comunidades llevan años organizando actividades en los colegios durante el verano para los niños más desfavorecidos. En julio de 2018, el Alto Comisionado de Lucha contra la Pobreza Infantil lanzó el programa Veca, para que los centros diesen cobertura a niños en riesgo de exclusión social durante las vacaciones. Ese año se destinaron 5,2 millones de euros para un total de 66.000 menores. "La situación de crisis que afrontamos puede servir a la Administración para innovar: hay que hacer extensibles esos programas a todo el alumnado que lo solicite y con un enfoque académico, además de alimentario", opina Carles López, expresidente de la confederación de estudiantes Canae y firmante de la carta. De lo contrario, la parte del alumnado que no está siguiendo el ritmo escolar durante el confinamiento "corre el riesgo de desvincularse de la escuela e incluso abandonar", añade.

Para Paco García, secretario de Educación del sindicato CC OO, se trata de una medida "muy interesante" que merece la pena analizar. A su juicio, el gran problema es la financiación. "¿Quién va a pagar el sueldo de esos profesores de refuerzo, el Ministerio o las autonomías?", cuestiona. "Teniendo en cuenta que estamos en un escenario en el que la caída del PIB puede superar a la de la gran crisis de 2007, es muy importante tener en cuenta en qué condiciones se va a contratar a ese personal".

Según los cálculos de Jorge Sainz, ex secretario general de Universidades con el Gobierno del PP y catedrático de Economía y firmante de la carta, el coste de un programa de refuerzo en julio y durante el próximo curso podría ascender a 248 euros por alumno, unos 2.000 millones en caso de que lo solicitaran los 8,2 millones de alumnos ahora confinados. Este cálculo lo ha hecho a partir del presupuesto contemplado en el capítulo de educación en el plan de estímulo a la economía por el coronavirus lanzado por el Gobierno de Estados Unidos, analizado por la Brookings Institution, de la Universidad de Stanford.

MODIFICAR LA EVALUACIÓN Y LIMITAR LA REPETICIÓN DE CURSO

En la carta enviada por la ONG Save the Children a la ministra Isabel Celaá —suscrita por 40 organizaciones y expertos— se piden además otras cuatro medidas para frenar la desigualdad entre estudiantes provocada por el coronavirus. Proponen que se modifique la evaluación para limitar la repetición de curso, una medida “muy habitual” en los centros españoles que se puede agravar de manera “muy injusta” estos meses. “Debe ser una opción residual como sucede en la mayoría de países europeos”.

También apuestan por adaptar el currículo del próximo curso de forma “urgente”. “En lugar de la sobrecarga de contenidos actual, proponemos priorizar e incorporar aprendizajes no abordados en función de las necesidades de cada estudiante”, señala el documento. Con el objetivo de ampliar el refuerzo educativo en horario escolar y extraescolar durante el próximo curso, consideran oportuno reeditar el programa PROA y otros de carácter autonómico para dar soporte a los que presenten más dificultades.

Por último, incluyen que se dote a los centros educativos y a los propios estudiantes de la tecnología y la formación necesaria para poder seguir los programas a distancia. “Hay que asegurar que el sistema esté preparado para enfrentar situaciones similares, de forma que la competencia digital esté al alcance de todos”, independientemente de la situación socioeconómica de la familia. “Necesitamos liderazgo para la puesta en marcha de programas tecnológicos en la red pública”. De momento, el Ministerio de Educación ha enviado 20.000 tarjetas SIM de 40 Gbs mensuales a los estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional con menos recursos.

ENLACE:

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-04/CartaAbiertaMinistraEducacionSaveTheChildren_ES.pdf



Lanzan una herramienta gratuita de formación online para las escuelas cerradas por el coronavirus

Classlife Rooms es un espacio de colaboración gratuito dirigido a profesores y estudiantes

S.F. Madrid 14/04/2020

Unos emprendedores españoles acaban de lanzar Classlife Rooms, una herramienta gratuita para profesores y alumnos que busca ayudar a los cerca de diez millones de estudiantes que no pueden acudir a clase en España por el COVID-19.

La protección de todas las personas involucradas con el centro; profesionales, estudiantes y familiares es lo más importante y por esta razón se ha declarado el estado de alarma en todo el país, lo que se traduce en que los alumnos no podrán acudir a las clases de forma presencial durante al menos dos semanas.

Muchos de estos centros ya contaban con plataformas de formación online, en las cuales profesores y alumnos disponen de un espacio de comunicación virtual, donde poder interactuar, desde cualquier lugar y en la mayoría de los casos desde cualquier tipo de dispositivo, ya sea ordenador personal o dispositivos móviles, como tabletas o «smartphones».

Pese a las posibilidades que ofrecen diferentes plataformas de formación online, la mayoría de cursos y titulaciones siguen siendo presenciales, lo que se ha traducido en no poder continuar con la planificación lectiva durante el confinamiento de los estudiantes. Plataformas de formación online como Google Classroom o el mismo ministerio de Ministerio de Educación y Formación Profesional ya ofrecen «Recursos para el aprendizaje en línea» gratuitos para ayudar en la medida de lo posible al profesorado, a las familias y al alumnado.

En línea con estas iniciativas, Classlife, la plataforma todo-en-uno para la gestión de los centros educativos, lanza desde el día 16 de marzo, Classlife Rooms, la versión gratuita dirigida a profesores y estudiantes. En este nuevo espacio de colaboración para conectar a profesores y alumnos, los cursos y aulas virtuales cuentan con las herramientas más importantes de la plataforma original, como exámenes online, foros, un espacio de comunicación al estilo red social o control de asistencia. Esta solución es compatible con todos los navegadores actuales y cuenta con una versión app móvil para iOS y Android desde donde se facilita el acceso a todas las funciones que encontramos en la versión de escritorio de la plataforma.

Para darse de alta como profesor en Classlife Rooms únicamente es necesario acceder a www.classlife.education, donde encontraremos información sobre cómo acceder al registro como profesor. Cada aula o curso creado genera un código único que se envía a los estudiantes a través de la misma plataforma, lo que les permite el acceso a todo el contenido que el profesor haya preparado para ellos.

Más de 50.000 estudiantes, en 6 países alrededor del mundo ya usan Classlife en su día a día, cifra que «se incrementará de forma exponencial en las próximas semanas ya que el único requisito para usar Classlife Rooms es disponer de una conexión a internet», según explica Mario Espósito, fundador y CEO de Classlife Education.

El director de producto de Classlife, Eduard Pineda, aclara que «lo más importante para nosotros es ofrecer a los profesores un espacio en la nube donde puedan trasladar todo el material lectivo y facilitar que los estudiantes puedan continuar con su formación durante las semanas en que se vean obligados a estar en casa. Además, creemos que es una oportunidad excelente para mostrar a los centros, a los profesionales e incluso a los mismos estudiantes, que la formación online es una herramienta ya casi imprescindible en todos los centros».



La desigualdad empieza en la guardería: Madrid suspende el contrato a uno de cada cinco centros mientras el resto teletrabaja

Algunas cooperativas de educadoras denuncian que las Juntas de Distrito, que toman las decisiones de manera desigual.

Les advierten de que el interventor no aceptará sus facturas y eso les aboca a aceptar la suspensión del servicio

Sofía Pérez Mendoza. Madrid 14/04/2020

Las educadoras infantiles de las escuelas de Madrid llevan un mes en vilo. El Gobierno municipal, dirigido por PP y Ciudadanos, no ha dado directrices claras sobre si suspender temporalmente los contratos por la epidemia o permitir a las maestras continuar con el teletrabajo, como en el resto de niveles educativos de la red pública. Cada distrito está tomando decisiones por su cuenta pese a que hay un decreto de Coordinación Territorial que recomienda mantener la actividad en remoto y actuar del mismo modo en todos los territorios de la ciudad.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, prometió hace tres semanas que el Gobierno iba a "arbitrar todos los medios para que los empleados de las empresas concesionarias no vean mermados sus derechos laborales ni retributivos". Hoy, sin embargo, una de cada cinco escuelas infantiles de la ciudad no está recibiendo dinero público para continuar con la actividad lectiva desde casa, según datos aportados por el Consistorio. Son 15 de un total de 68 gestionadas por empresas. Solo hay dos centros con trabajadoras funcionarias, que están trabajando desde casa como el resto de empleados públicos.

Muchas educadoras han seguido trabajando a la espera de que el Ayuntamiento de Madrid les aclarara si cortaba la contratación de manera temporal, y algunas han enviado por su cuenta sus proyectos educativos al Consistorio para convencerles de que en la etapa 0-3 también es importante mantener el vínculo de los niños y niñas con la escuela y las educadoras en esta extraña coyuntura.

Al final, el Ayuntamiento ha terminado pidiendo a todas memorias justificativas para validar si pueden continuar la actividad desde casa, según explicó el alcalde en una entrevista en La Sexta el pasado domingo. "La mayoría nos lo ha presentado pero hay, las menos, que no han podido o que han entendido que no podían hacerlo y tenían que suspender los contratos", justificaba el regidor.

La escuela El Globo Rojo o La Revoltosa, por ejemplo, siguieron las directrices. Enviaron su programación a sus Juntas de Distrito (Chamberí y Vallecas, respectivamente) y no obtuvieron respuesta, según sendas directoras. El silencio administrativo, en este caso, se contempla como una negativa. No han tenido otra salida que aceptar la suspensión de contratos.

Sin comunicaciones por escrito

"No nos dieron por escrito esa negativa, sino que nos llamaron para decirnos que hiciéramos lo que quisiéramos pero que la intervención no iba a pagar la factura", explica Isabel, la educadora al frente de La Revoltosa, en conversación con eldiario.es. Considera que el Ayuntamiento, de algún modo, está "coaccionando" a las escuelas ante la amenaza de que, si no aceptan la suspensión del contrato, pueden quedarse sin nada. "De ese modo parece que es una decisión nuestra. Pero es que sí que tenemos medios para continuar trabajando. Las familias agradecen estrategias y consejos. Tener a un niño de entre cero y tres años encerrado en casa es muy complicado. El problema es que no nos quieren pagar el servicio modificado".

El mismo relato se repite en otras escuelas: comunicaciones no escritas con la recomendación de no insistir en el teletrabajo porque podrían darse por no válidas las facturas en este periodo sin actividad presencial. El área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, dirigida por Pepe Aniorte, justifica que todas las suspensiones de contratos se realizaron de manera voluntaria por parte de las empresas gestoras y que solo dos se cancelaron

porque sus proyectos "no se ajustaban a lo requerido en los pliegos". "No todos los pliegos son iguales ni los proyectos ni el criterio de los técnicos", matizan las mismas fuentes, que confirman que no hay criterios homogéneos para tomar las decisiones.

"Estoy indignada. Hemos presentado la suspensión como una segunda opción porque se ha desestimado nuestro plan de trabajo. ¿No era lo suficientemente bueno? No hemos tenido respuesta y hemos hecho o que nos pidieron", dice por su parte Pilar de El Globo Rojo, una escuela cuyas maestras han seguido trabajando desde casa hasta principios de abril con la esperanza de que avalaran su programa. "Aún me pregunto por qué unas sí y otras no. No sé si es descoordinación, que es difícil valorar el teletrabajo en estos sectores...", reflexiona. Grandes grupos como Clece, que gestionan cuatro escuelas en la ciudad, han continuado con la actividad lectiva tras presentar su proyecto, confirman fuentes de la compañía.

La asociación que agrupa a las escuelas infantiles de Madrid (Ameigi) acusa al alcalde de hacer "falsas declaraciones" sobre la situación. "En esto el Ayuntamiento es como un reino de taifas. Se ha producido una actuación desigual de los interventores de las juntas municipales, que tienen la última decisión", se queja Blanca Azanza, presidenta de la entidad que agrupa a centenar de escuelas infantiles de gestión indirecta de la Comunidad de Madrid.

Ameigi también denuncia que hay casos de escuelas a las que no se ha notificado aún nada, pese a que todas forman parte de la misma red única y pública del Ayuntamiento de Madrid. La consecuencia más directa de esta falta de comunicaciones en firme es que algunos centros tendrán que asumir los salarios de parte del mes de marzo sin colchón público porque han seguido trabajando a la espera de una orden definitiva.

El caos se replica en muchos otros centros, que hasta el día de hoy no han sabido qué iba a ser de su futuro. Las Nubes, por ejemplo, en el distrito de Retiro, ha recibido este lunes la confirmación de que su actividad podría continuar desde casa. Sus alumnos y alumnas sí tendrán durante los días de confinamiento actividades y vídeos de sus educadoras frente a otros muchos que no. "Como beneficiadas de esto pensamos que no puede ser que a unas escuelas se les permita trabajar y a otras no dependiendo de la Junta de Distritos", considera su directora, Mónica, que defiende que hay cooperativistas que han presentado "con detalle" su proyecto educativo y lo "han echado atrás".



Un final de curso con retorno a las aulas

Comunidades autónomas y Ministerio de Educación buscan hoy una solución consensuada al remate más incierto de la actividad académica

Rocío Ruiz. 15/04/2020

Las comunidades autónomas se adentran en final de curso más incierto por el Covid-19 con un cúmulo de incógnitas que tratarán de despejarse hoy. Las autonomías mantienen un encuentro con la ministra de Educación y FP para tratar de dar una respuesta consensuada en todo el territorio español, aunque cada comunidad autónoma tiene competencias en materia educativa para dar la solución que crea más oportuna. Estas son las principales ideas que se barajan sobre como será el fin de curso.

Cuándo acaban las clases

Las comunidades autónomas no prevén un adelanto del fin de curso. Esperan cumplir con el calendario previsto y que haya un remate de la actividad académica presencial, aunque sea sólo de unos días. La Comunidad de Madrid, de hecho, cree que las clases podrán reanudarse a finales de mayo y que los niños puedan tener entre 15 y 30 días presenciales. Cataluña también confía en que las escuelas e institutos se puedan abrir antes del 24 de junio "porque lo necesitamos como sociedad", ha dicho el consejero Josep Bargalló. La propia ministra de Educación, Isabel Celaá, prevé un retorno presencial en el mes de junio.

Repeticiones y suspensos

El Consejo Escolar del Estado y algunas comunidades autónomas se han pronunciado en contra del aprobado general porque eso supondría que el alumno desconectara de todo a estas alturas de curso. Sin embargo, existe unanimidad en la idea de que la repetición será un "recurso extraordinario" o más de lo que es hasta ahora viene siendo. También se pretende que los suspensos sean los menos posibles teniendo en cuenta la situación extraordinaria a la que se ha enfrentado la comunidad educativa de tal manera que haya "ayuda" para los rezagados.

Evaluaciones

La idea general es que, a la hora de evaluar a un alumno, tengan más peso en la nota final los trimestres presenciales de tal manera que el alumno que ha aprobado los dos primeros, tenga superado el curso. No obstante la nota del tercero también se tendrá en cuenta, si es para beneficiar al estudiante. ¿Y qué pasa con los que tienen los trimestres anteriores suspensos? Se podrán habilitar exámenes de recuperación a distancia o mediante trabajos que, sumados a un buen trabajo en el último trimestre, puedan llevarle a superar la asignatura con un refuerzo el siguiente curso. Los que no se hayan esforzado en ninguno de los trimestres acabarán suspendiendo y tendrán que acudir a la prueba extraordinaria de recuperación que en algunas comunidades autónomas es a finales de junio y en otras en septiembre. En la evaluación, los profesores tendrán en cuenta, además, las circunstancias personales de los alumnos y de salud y sus posibilidades de acceso a las nuevas tecnologías. La propia ministra de Educación estimó entre un 10 y un 12% el porcentaje

de absentismo a las clases virtuales de alumnos que no se conectan a las clases y no participan en el aprendizaje online por falta de dispositivos electrónicos ante la circunstancia de tener que compartir con padres y hermanos ordenadores o tabletas o no tener conexión a internet. “Las comunidades autónomas deberían dedicarse ahora a identificar a esos alumnos que se han desenganchado de la actividad escolar para establecer planes de refuerzo”, dice el secretario general de Escuelas Católicas, Luis Centeno.

Contenidos: ¿se avanza o no?

Este es uno de los principales puntos de discrepancia puesto que hay comunidades autónomas que expresamente han pedido al profesorado que no avance en contenidos este último trimestre, como es el caso de Asturias y otras que sí, como Madrid, lo que genera una situación de desigualdad. En términos generales, la situación ha obligado a una reprogramación curricular en el último trimestre que, en la mayoría de los casos se ha basado en un repaso y refuerzo de contenidos de trimestres anteriores y en este último el avance se ha producido “en contenidos básicos y mínimos para garantizar al alumnado la promoción y superación del curso escolar”, según las directrices marcadas por la Comunidad de Castilla-La Mancha. Esta es la misma línea seguida por Galicia, Andalucía, Baleares y Castilla y León.

En cualquier caso, hay comunidades autónomas como, Madrid y Navarra, que proponen unir el curso actual con el siguiente para completar los déficit educativos de los alumnos en el último trimestre, exceptuando 4º de la ESO y 2º de Bachillerato.

Recuperaciones en septiembre

Hay diez autonomías que en los últimos años han trasladado sus exámenes de septiembre a junio pero una de las propuestas del Consejo Escolar del Estado y de otras instituciones educativas, como Escuelas Católicas, es la de trasladar este año las recuperaciones extraordinarias a septiembre. La Asociación de Academias Ascade también propone como medida fundamental la realización de la convocatoria extraordinaria en septiembre “lo que permitiría que el nivel académico de los alumnos se mantuviera y proporcionara una segunda oportunidad a los que suspendan para que en un futuro no tengan carencia alguna de conocimientos”. Comunidades como Madrid han descartado esta opción.

Clases en verano

Un informe de la OIE mantiene que si los niños vuelven a clase en junio equivaldría a perder un 11% de lo que se aprende en un curso escolar. Por eso, expertos como Ismael Sanz, doctor en Economía Aplicada, se muestran partidarios de poner en marcha campamentos de verano académicos en el mes de julio que puedan servir para reforzar conocimientos. “Ayuda a socializar a los menores pero no es recomendable que de ellos se encarguen los mismos profesores que los estudiantes han mantenido en el curso. Lo ideal sería contratar a interinos y antiguos alumnos y eso serviría, además, para mejorar la economía”. Otro de los argumentos que respaldan su propuesta es que, según Sanz, los alumnos olvidan en verano parte de lo aprendido, sobre todo en Matemáticas.

Algunas ONG, como Save The Children, son partidarias de que haya clases en julio, al igual que asociaciones de padres. La idea, no obstante, tiene sus detractores entre las escuelas católicas que, después de un largo confinamiento, los niños vayan a a querer ir a clase a 40 grados en verano.

EL PAÍS

La mayoría de profesores españoles rechaza el aprobado general

Una encuesta a más de 3.000 docentes muestra que la opción más apoyada es valorar los contenidos trabajados en casa. La decisión la tomarán hoy miércoles Celaá y los consejeros.

ANA TORRES MENÁRGUEZ. Madrid, 15 ABR 2020

Un mes después del cierre de los centros educativos, la gran incógnita sigue siendo qué va a pasar con la evaluación del tercer trimestre. Este miércoles, la ministra de Educación, Isabel Celaá, se reúne con los consejeros autonómicos para decidir cómo se va a cerrar el curso en mitad de la crisis sanitaria causada por el coronavirus, con 8,2 millones de estudiantes de enseñanzas regladas no universitarias confinados en sus casas. Durante este tiempo, los docentes han gestionado la educación telemática sin instrucciones, sin una línea clara de qué hacer con los estudiantes. Por primera vez, una investigación de la Universidad de Granada ha buscado la opinión de más de 3.000 profesores sobre cuál es la mejor opción de evaluación. La mayoría de ellos rechaza el aprobado general, la medida adoptada por el Gobierno de Italia que permitirá a todos los alumnos pasar de curso sin importar las notas obtenidas en los dos trimestres anteriores.

“Los datos nos dicen que los profesores rechazan la promoción automática porque valoran la cultura del esfuerzo, del mérito y de la justicia... si en algo han coincidido casi todos es en la convicción de que quieren ser justos con sus alumnos”, explica Fernando Trujillo, profesor de Educación de la Universidad de Granada y coautor del estudio *Escenarios de evaluación en el contexto de la pandemia por Covid-19: la opinión del*

profesorado, en el que han participado de forma anónima 3.047 docentes de las diferentes etapas educativas, el 81% pertenecientes a centros públicos y el 19% a privados y concertados (según la medición de los autores, con un mínimo de 1.065 respuestas, los resultados del informe ya representan una muestra significativa de la percepción del profesorado en España). “Era importante darles voz, por la gravedad de la situación y por el papel trascendental que están jugando”, señala.

En la encuesta planteada al profesorado, los investigadores presentaban cuatro escenarios posibles. En el primero, no hacía falta ningún tipo de intervención por parte de la Administración y los centros continuaban con la docencia y la evaluación propias de una situación de normalidad. En el segundo, el currículo se ajustaba a la situación de confinamiento y los profesores evaluaban los contenidos mínimos. En el tercero, se optaba por una evaluación positiva para todos, pero con condiciones: la elaboración de una serie de tareas y su entrega en junio. Por último, los profesores podían optar por un cuarto escenario: el aprobado general sin condiciones, pensado especialmente para no perjudicar al alumnado más desfavorecido y sin acceso a Internet en sus hogares (un 10% de los 8,2 millones de estudiantes). Tanto el tercer como el cuarto escenario requerirían un cambio de la normativa por parte del ministerio y las comunidades, ya que implican poner una misma nota a todo el alumnado.

Solo el 12% de los profesores de secundaria se decantaron por el aprobado general; el 16% de los de Bachillerato y el 30% en el caso de los de primaria. “La clave para entender las respuestas reside en la etapa en la que trabaja cada docente: los de infantil y primaria son más partidarios de la opción tres, el aprobado con condiciones; mientras que los de secundaria y bachillerato se decantan por el escenario dos, en el que se reducen los contenidos y se evalúa a los alumnos”, detalla Trujillo. Lo que está claro es que salvo los de infantil (el 42% escogió el aprobado general), la mayoría de profesores considera que es necesario valorar el trabajo realizado durante el confinamiento.

Vicente Manzón, director del instituto público Pablo de Olavide, en La Luisiana (Sevilla), es uno de los docentes que se muestra “totalmente en contra” del aprobado general. “Ya hemos superado dos tercios del curso; no evaluarlos es sinónimo de devaluarlos, de despreciar su trabajo”, expone. En su opinión, la mejor opción es avanzar en el temario sin perder de vista a los alumnos con necesidades especiales de aprendizaje y a los que no disponen de los medios necesarios en casa. “En una situación de normalidad también prestamos una atención individualizada, no es nada nuevo”. En su centro, el 90% de los estudiantes dispone de dispositivos digitales y, diariamente, contactan por videoconferencia. “Sin saturarles, les mandamos tareas todos los días, eso hay que evaluarlo”, zanja.

Otro de los resultados de la encuesta es la diferencia entre las respuestas de las mujeres y de los hombres. Mientras ellas se muestran más partidarias de dar más facilidades a los alumnos para no perjudicar a los que ahora no pueden seguir aprendiendo —eso sí, siempre con contraprestaciones como la realización de trabajos—; ellos buscan no perjudicar a los que más se han esforzado y son más proclives a la evaluación tradicional. “Independientemente del género, se ven dos grandes culturas escolares: una más relacionada con la transmisión de conocimientos (exámenes convencionales) y otra más vinculada con los proyectos, con la idea de experiencias en el aula”, indica Trujillo.

Además del método de evaluación, el ministerio tendrá que decidir este miércoles qué pasa con la repetición de curso, si se blinda para todos los alumnos con el objetivo de proteger a los más desfavorecidos, o si queda al criterio de la autonomía de los centros. En el informe presentado la semana pasada por el Consejo Escolar del Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno en materia educativa, se descartó esa opción, aunque se recomendó que las repeticiones se limiten a casos “extraordinarios”.

En el colegio público Clara Compoamor, en Huerca de Almería, solo ha repetido curso un niño en los últimos siete años. Le hicieron repetir para que permaneciera un año más con ellos. Para la directora del centro, Sofía Deza, el aprobado general puede perjudicar al alumno. “La experiencia nos ha demostrado que si un niño de sexto de primaria pasa a la ESO sin estar preparado, lo perdemos”. El problema, cuenta, es que en muchos de los casos la familia no ha podido transmitirle el valor de la educación y los niños necesitan un cuidado emocional que reciben en primaria. “Esos cuidados no existen en secundaria y los chavales se caen del sistema”. Para el resto de cursos, sí es partidaria de un aprobado general sujeto a compromisos por parte del alumnado.

Para los autores del estudio, “parece difícil que una solución única pueda ser bien recibida por todos los docentes” y, por ello, plantean que se apruebe un paquete de medidas adaptado a cada una de las etapas.

“EL PROBLEMA ESTÁ EN JUNIO; LA SOLUCIÓN EN SEPTIEMBRE”

Para Fernando Trujillo, investigador de la Universidad de Granada y coautor del estudio, el principal reto al que se enfrenta el profesorado es el de no perjudicar a nadie porque “es imposible” garantizar lo que está aprendiendo cada alumno. Por ello, cree que aunque el problema está en qué hacer con las evaluaciones en junio, la solución está en lo que se hará a partir de septiembre en los dos siguientes cursos. “¿Cómo vamos a trabajar con ese alumnado para que recupere los contenidos pendientes? Tiene que haber planes de actuación que contemplen que este trimestre algunos niños lo han pasado en blanco”. El “esfuerzo” de la Administración tanto en inversión como en imaginación es clave, ya que, según el experto, serán necesarios más profesores para incrementar los desdobles en las materias más complejas, así como aulas de docencia compartida —en las que dos o más profesores atienden a un grupo y pueden ofrecer una atención más personalizada—, o planes individuales acompañados de profesores de refuerzo. “En septiembre habrá que hacer una evaluación inicial y buscar los problemas que ha dejado el coronavirus”, apunta. La parte emocional también requerirá gran

atención, porque los efectos de dos o más meses de confinamiento en menores pueden ser graves. “No sabemos en qué condiciones van a volver a las aulas y para atender esa parte también será necesario un refuerzo en el número de orientadores por centro”, añade. En los institutos españoles, de media, hay un orientador por cada 800 alumnos (en algunos casos por cada mil). La recomendación de la Unesco es de uno por cada 250 estudiantes.

EL MUNDO

División en la escuela sobre si hay que abrir en verano para recuperar las clases perdidas

Los sindicatos se oponen pero así lo reclaman padres, alumnos, ONG y también el PP, que pedirá clases en julio para los rezagados

OLGA R. SANMARTÍN. Madrid. Miércoles, 15 abril 2020

La comunidad educativa está dividida sobre la posibilidad de abrir los colegios este verano para recuperar el tiempo perdido por la suspensión de las clases presenciales por el coronavirus. A un lado están los sindicatos de profesores, que se resisten. Al otro, una parte de los padres (los de la Ceapa), que lo ve una ayuda a la conciliación. A este grupo se han unido los propios estudiantes de Canae, una veintena de expertos y una docena de asociaciones y ONG que este martes difundieron una carta promovida por Save the Children y firmada por ex altos cargos tanto del PSOE como del PP en la que instan a la ministra Isabel Celaá y a las comunidades autónomas a aprovechar las vacaciones para atender sobre todo a los alumnos rezagados y sin recursos.

También la diputada del PP Sandra Moneo va a defender este miércoles, durante el Pleno de control al Gobierno, la tesis de que hay que abrir en verano los colegios para atender las necesidades de los alumnos que no han alcanzado las competencias, según fuentes populares. Y Ciudadanos está igualmente a favor. Sorprendentemente, podría alcanzarse cierto consenso político en este asunto.

Pero los sindicatos argumentan que el verano debe ser un periodo de relajamiento tanto para los estudiantes como para los profesores, sobre todo tras el confinamiento, y «hay que priorizar el bienestar y el tiempo de descanso del alumnado, que en estos días, junto al profesorado y a las familias, están sometidos a una presión increíble» (Maribel Loranca, UGT). La propuesta de abrir en verano es, según Mario Gutiérrez (CSIF) «entender los centros educativos como medios de conciliación y no como lo que son, centros de enseñanza».

«En todo caso, no sería con personal laboral de los centros y no para dar clases lectivas, sino otro tipo de actividades», opina Francisco García, al frente de la Federación de Enseñanza de CCOO. Coincide con él Nicolás Fernández, de Anpe, que tampoco está de acuerdo con prorrogar el curso salvo que se abran los centros por ayuntamientos y empresas «externas ajenas al profesorado» y que recuerda que en el mes de julio «los profesores tienen que hacer reuniones preparatorias del claustro y programaciones para el curso que viene». También alegan «razones climatológicas»: las aulas españolas no tienen aire acondicionado.

«Hay maneras para hacerlo, es posible vencer las dificultades», objeta Álvaro Ferrer, de Save the Children. «Se pueden abrir los centros de 08.00 a 12.00 horas, antes de que empiece el calor, o contratar a interinos o a otro personal o dar complementos a los profesores que se ofrezcan. Abrir los colegios en verano, argumentan los firmantes de la carta, puede servir para dar contenido educativo, pero también ocio y una alimentación adecuada a quienes tienen menos recursos.

LOS PRECEDENTES

La medida, en realidad, no es nueva. Detrás del éxito de Castilla y León en PISA está la apertura de colegios en julio para los alumnos de 15 años. También en Andalucía se puso en marcha el verano pasado un programa de refuerzo escolar. Cataluña es otra región que tiene tradición de abrir los colegios en horarios extraescolares con programas que se impulsan desde los ayuntamientos.

Actividades de carácter educativo se vienen realizando desde hace años. En la mayoría de las CCAA los gobiernos municipales organizan campamentos de verano, actividades deportivas o talleres de idiomas en los colegios, pero las plazas son limitadas y buena parte de las familias se queda fuera de los sorteos.

Lo que proponen los firmantes viene a ser una recuperación del programa PROA, que la crisis canceló en 2012 y que contemplaba clases fuera del horario ordinario a los alumnos con más necesidades. Programas similares en EEUU han tenido mucha efectividad académica para reducir el abandono escolar temprano, que en España es de los más altos de la UE.

El ex secretario de Universidades del PP Jorge Sainz, firmante de la carta, calcula que abrir los centros en julio para un 30% de los alumnos de Primaria y ESO (los que estima que podrían necesitar estas clases) costaría en

torno a los 100 millones de euros, alrededor de 100 euros por alumno. Es decir, el 0,19% de todo el gasto global en educación y el 3,9% de la cuantía contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2019.

EL PAÍS

Celaá asegura en el Congreso que el aprobado será “la regla general” y la repetición “la excepción”

La ministra de Educación responde en el Congreso a una pregunta del PP y anuncia que trabaja con las autonomías en un “gran acuerdo que proporcione certidumbre a las familias”

ANA TORRES MENÁRGUEZ. MADRID - 15 ABR 2020

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha asegurado este miércoles que “la promoción será la regla general y la repetición la excepción” y ha anunciado que está trabajando con las autonomías en un “gran acuerdo” que propicie certidumbre a las familias frente al escenario del cierre de escuelas por la pandemia del coronavirus. Celaá ha respondido así a una pregunta de la portavoz de Educación del PP en el Congreso, Sandra Moneo, que le ha planteado la urgencia de abrir los centros educativos cuanto antes. La ministra sigue así la recomendación realizada por el Consejo Escolar del Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno en materia educativa, que la semana pasada se decantó por evaluar los contenidos trabajados por los alumnos en casa durante el confinamiento, pero a la vez reducir al mínimo los suspensos para no perjudicar a los estudiantes que no tienen acceso a Internet en sus casas (un 10% de los 8,2 millones de alumnos de enseñanzas no universitarias afectados por el cierre de los centros).

“Estamos trabajando con todas las Administraciones educativas, también con las del PP, y coordinadamente hemos adaptado el horario lectivo o flexibilizado la Formación Profesional... hemos hablado mucho con los consejeros y estamos en línea”, ha dicho la ministra, que ha aclarado que la idea es finalizar este curso apoyándose en el arranque el próximo, “siendo la promoción la regla general y la repetición la excepción que nada tendrá que ver con las causas del coronavirus”.

Este miércoles Celaá se reúne con los consejeros autonómicos para decidir cómo se cierra el curso escolar y una de las incógnitas que está sobre la mesa es qué tipo de evaluación se va a hacer a los alumnos, si el aprobado general decretado por Italia (donde los estudiantes pasarán de curso independientemente de las notas de los primeros trimestres), o por una evaluación más flexible. La gran diferencia entre el aprobado general y la promoción positiva es que en esta segunda sí se evalúa a los alumnos; todos pasan de curso pero no con la misma nota. Esta parece ser la vía por la que se decanta el ministerio, pero necesita el apoyo mayoritario de las autonomías para aprobar una orden ministerial.

Moneo ha urgido a Celaá a “presionar” al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para que se tomen las medidas sanitarias necesarias para que los alumnos “vuelvan cuanto antes a las aulas”, ya que “ese mundo idílico donde de la noche a la mañana hemos puesto a más de ocho millones de alumnos delante del ordenador y hemos pretendido que sustituya la relación personal con el profesor, no existe”, ha dicho.

La portavoz del PP ha acusado a la ministra de dar por sentado que “en todos los hogares existen dos y hasta tres dispositivos electrónicos, donde los padres pueden trabajar y donde cada niño tiene un ordenador a su disposición, y eso es no conocer la realidad”. “Tiene que liderar y poner en marcha un plan específico de apoyo, cuantificarlo y dotarlo económicamente”, le ha lanzado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Celaá ha tildado la petición de presionar a Sanidad para la reapertura de los centros de “irresponsabilidad” y ha recordado que “no son circunstancias que dependan de Educación”. “En el momento en el que Sanidad informe de que existen las condiciones para poder reabrir las escuelas, lo haremos muy gustosamente”, ha afirmado. Además, ha manifestado que el Gobierno sí está preocupado por la brecha digital, pero ha matizado que el problema de fondo es la brecha social, “y esa no es tan fácil de resolver, no se arregla en 24 horas”.

europapress.es

Los colegios podrán abrir este verano para ofrecer a los estudiantes actividades de refuerzo voluntarias

El Gobierno y las Comunidades autónomas acuerdan esta medida para paliar la desconexión de muchos escolares durante el confinamiento

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El Gobierno y las comunidades autónomas han acordado este miércoles que los colegios puedan abrir verano para ofrecer clases de refuerzo voluntarias a los estudiantes con problemas para seguir la educación a distancia durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha pactado esta medida con los consejeros autonómicos en la reunión telemática de la Conferencia Sectorial de Educación celebrada este miércoles,

donde también se ha discutido cómo cerrar el curso y examinar a los más de ocho millones de estudiantes no universitarios connotados en sus hogares desde hace un mes.

Según ha informado el Ministerio, Celaá y los consejeros de educación han decidido no prolongar el curso más allá de junio, como estaba previsto, aunque se permitirá que las comunidades autónomas organicen o apoyen la realización de actividades de refuerzo en el periodo estival "en formas diversas y combinadas con actividades lúdicas". Estas actividades pueden estar promovidas incluso por ONG o asociaciones "contando con el concurso del voluntariado y en contacto con los centros educativos y sus docentes".

La propuesta de abrir los colegios en verano para ofrecer clases de apoyo es una petición de organizaciones como Save The Children y la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos CEAPA para que los estudiantes "en situación desfavorecida o con desfase educativo" puedan recuperar materia, pero también para ayudar a la conciliación de las familias "en momentos económicos que se prevén muy duros" cuando finalice el Estado de Alarma.

La mayoría de los sindicatos docentes se habían opuesto en las últimas semanas a la posibilidad de que el curso se prolongase durante verano para dar descanso tanto a profesores como estudiantes y familias. Los sindicatos defienden que la suspensión de las clases presenciales no ha supuesto la interrupción del curso, y los docentes han seguido teletrabajando desde que cerraron los centros escolares.

REPETIR SERÁ UNA EXCEPCIÓN

El comienzo de la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación se ha demorado hasta el mediodía porque la ministra Celaá debía asistir antes al Pleno del Congreso de los Diputados para responder a una pregunta del Partido Popular sobre la previsión del Ministerio para reanudar las clases presenciales. En su respuesta a la diputada del PP Sandra Moneo, Celaá adelantaba su propuesta para reducir al mínimo las repeticiones este curso, "siendo la promoción la regla general y la repetición, la excepción", ha asegurado en el hemiciclo. Un criterio que las comunidades han aceptado.

Sin embargo, algunos gobiernos autonómicos precisan que no se trata de conceder el aprobado general a todos los escolares. La consejera de Educación de Castilla y León, Rocío Lucas, ha asegurado que ni siquiera se ha planteado esa opción durante la reunión telemática de la Conferencia Sectorial. En rueda de prensa, la consejera castellanoleonés ha detallado que las comunidades y el Ministerio de Educación han acordado que los profesores evalúen a sus alumnos en función de los resultados de los dos primeros trimestres del curso, los que se desarrollaron en las aulas antes del Estado de Alarma y que suponen el 65 por ciento de los contenidos anuales.

De este modo, el Gobierno y las comunidades asumen la sugerencia del Consejo Escolar del Estado de convertir la repetición en algo muy excepcional este curso. La semana pasada, el máximo órgano consultivo en educación aprobó un documento con recomendaciones para adaptar el final del curso escolar al confinamiento, y descartó eliminar por completo las repeticiones como había propuesto la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes CANAE.

EL MUNDO

Isabel Celaá defiende la "promoción general" y dice que los alumnos no suspenderán el tercer trimestre del curso

Cada comunidad autónoma decidirá el número de suspensos con los que los alumnos pueden obtener el título

OLGA R. SANMARTÍN. Madrid. Jueves, 16 abril 2020

Todos los alumnos pasarán al curso siguiente de forma generalizada. La evaluación del tercer trimestre sólo servirá para hacer diagnóstico y no podrá suspenderse. Si acaso, servirá para recuperar las otras dos anteriores. Cada comunidad autónoma decidirá por su cuenta los criterios con los que los estudiantes se podrán sacar el título.

Éstas son algunas de las medidas acordadas este miércoles entre la ministra de Educación, Isabel Celaá, y las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación para cerrar este curso sin precedentes por el cierre de las aulas debido a la pandemia del coronavirus.

El Gobierno insiste en que no se trata de un aprobado general, porque el curso que viene los alumnos tendrán que recuperar lo que no hayan superado éste, pero el consejero de Educación de Madrid, Enrique Ossorio, apunta que las soluciones pactadas son demasiado benevolentes.

"Van por mala dirección y alguna comunidad autónoma podría tener la tentación de hacerlo [el aprobado general]", ha dicho el consejero madrileño.

MADRID DISCREPA

El documento con las medidas acordadas, que dará lugar a una orden ministerial, fue aprobado por la mayoría de las regiones, pero Madrid no lo respaldó. Esta región no comparte la propuesta de que la tercera evaluación tenga sólo carácter «diagnóstico». Eso significa que las calificaciones finales sólo valorarán los dos primeros trimestres, en los que se ha impartido clase presencial. Más claro: ningún alumno podrá suspender por lo que estudie a partir de ahora. Esta evaluación incluso servirá para limpiar las malas notas previas y recuperará los trimestres anteriores si se han suspendido.

Las palabras de Celaá han sido: "Que ese tercer trimestre no sea una desventaja para ningún alumno, que sirva, en todo caso, para beneficiarle, para recuperar los dos primeros trimestres. El tercer trimestre tiene que ser computado de forma positiva, no podrá ser computado de forma negativa".

El ministerio planteó durante la reunión sustituir el carácter "académico" de esta tercera evaluación por el "formativo". "Reducir la evaluación a su valor diagnóstico o formativo es devaluar el concepto de evaluación", ha denunciado Ossorio.

CRITERIOS 'ARBITRARIOS'

Hay más medidas que traerán problemas. Celaá defendió esta mañana en el Congreso que la "regla general" será la promoción automática y la "excepción" será repetir. Eso, en la práctica, implica que las comunidades autónomas podrán "flexibilizar" los criterios de obtención de los títulos de la ESO, Bachillerato o FP «renunciando a un cumplimiento exhaustivo de los mismos», algo que se traduce, según Madrid, en poder «sacarse el título con siete asignaturas suspensas».

El documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO, deja claro que, como señaló Celaá, conseguir el título de la ESO o el Bachillerato «deberá ser la práctica habitual». «No serán tenidas en cuenta limitaciones para obtener la titulación que afecten al número de áreas pendientes», señala. Los suspensos no serán obstáculos.

Dado que la norma ahora es que haya una «promoción general», los equipos docentes deberán justificar de una forma «muy sólidamente argumentada» por qué quieren que un alumno repita. Deberán aportar un informe individualizado y un plan de recuperación. Cuando le han preguntado a Celaá si la Selectividad podría hacerse con suspensos, se escabulló: "No hablamos de suspensos ni de aprobados, hablamos de una evaluación continua, global. Todo lo que no pueda ser trabajado al final de este curso será trabajado el siguiente". ¿Y los alumnos que pasan a la universidad?

Por otro lado, el Gobierno y las comunidades autónomas acordaron abrir los colegios en julio para dar clases de refuerzo sobre las asignaturas troncales (Lengua, Matemáticas, Ciencias, Lengua Extranjera) a los alumnos con necesidades educativas, tal y como reclamaban algunas organizaciones como Save the Children. Será de oferta obligatoria para las comunidades autónomas y de elección voluntaria para los alumnos.

PLAN DE REFUERZO

La idea será hacer un plan de refuerzo, pero sin avanzar en el temario, una especie de mezcla entre el PROA y los planes autonómicos que tienen Andalucía, Castilla y León o Cataluña, que ya abren las aulas en horario extraescolar para ayudar a los rezagados.

Esto no significa que el curso se extienda más allá de junio, ha advertido Celaá, que ha explicado que las actividades de refuerzo estarán combinadas con actividades "de ocio y tiempo libre".

Los sindicatos de profesores son muy críticos con esta medida y exigen que los profesores que impartan estas clases no sean los mismos que trabajan durante todo el curso, algo a lo que acceden el Gobierno y las autonomías. Serán monitores o internos ajenos a los centros.

Los consejeros pidieron recursos económicos adicionales al ministerio "porque se haría con pagos adicionales al personal docente".



Celaá dice descartar el aprobado general pero se pasará de curso "como norma"

Fuentes educativas aseguran a ABC que la Selectividad será presencial y que los alumnos harán el examen distribuidos en más aulas

Josefina G. Stegmann.MADRID 16/04/2020

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, dijo ayer que el aprobado general como solución a la paralización de las clases presenciales por la pandemia «sería injusto». Negó esta posibilidad en una rueda de prensa posterior a la reunión que tuvo con los consejeros de las comunidades autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación. Sin embargo planteó que «la promoción de curso sea la norma general y la repetición, la excepción». Esta última, además, «deberá estar sólidamente argumentada». «Hay algo que tiene que seguir mejorando porque, de lo contrario, se producirá un déficit de formación. La práctica de la repetición está muy arraigada en España, y no tanto en otros países como Francia. Hay otras maneras de recuperar que no son repitiendo», señaló, por su parte, el secretario de Estado de Educación,

Alejandro Tiana, que también intervino en la rueda de prensa junto a la secretaria general de Formación Profesional, Clara Sanz López.

Estas medidas recuerdan al espíritu que impregna la ley educativa por la que tanto luchó para sacar adelante la ministra, la Lomloe. En ella se permite superar el Bachillerato con una materia suspendida o hacer esta etapa en tres años y no dos, «para que nadie se quede atrás, que todo el mundo consiga sacar el máximo de sus potencialidades», dijo en su día.

Facilidades

Ayer también aseguró que «el tercer trimestre (los dos primeros se han podido impartir con normalidad) tiene que computar de manera positiva». «Hay que concentrarse en los aprendizajes y competencias imprescindibles y sin sobrecargar al alumnado de tareas excesivas. Se aprovechará el tercer trimestre para la recuperación, el repaso, el refuerzo con actividades globalizadores e interdisciplinares y debidamente tutorizadas».

La ministra también planteó que la titulación «debe ser la práctica habitual para los alumnos de 4º de la ESO, 2º de Bachillerato y FP, y para eso las administraciones educativas adaptarán el currículo y adoptarán los criterios exigibles para obtener esa titulación pudiendo organizar actuaciones de evaluación extraordinaria, de recuperación y titulación a las que podrán presentarse los que así lo deseen». Esta decisión no agradó a la Comunidad de Madrid. El consejero autonómico, Enrique Ossorio, apuntó en un comunicado que «esta propuesta no se puede dejar al albur de cada comunidad, porque se trata de una competencia estatal, la cual debe ser ejercida por el Ministerio de Educación y no dejar al criterio de las regiones con cuántas asignaturas suspensas se pueden obtener títulos con validez en todo el territorio nacional». Y es que el pasar de curso no conllevaría dar por aprobadas todas las asignaturas, estas quedarían pendientes para el siguiente (2020-21).

Otra decisión tomada ayer, adelantada por ABC, es que el curso no se extenderá más allá de junio. «Se mantiene la duración del curso escolar adaptado a la circunstancia; ni acaba el curso ahora ni se alargará más allá de junio, con la excepción de la EBAU». El presente curso seguirá desarrollándose a distancia, contando con los recursos de la administración, de los centros y las familias, hasta que Sanidad permita el regreso a la actividad docente presencial. Así, de hecho, le respondió la ministra a Sandra Moneo, responsable de Educación del PP en la sesión de control al Gobierno. «Cuando Sanidad lo permita, lo haremos gustosamente». El deseo de Educación es que los alumnos puedan regresar a sus centros, al menos 15 días, por el efecto benefactor para ellos y los docentes.

Las aulas sí estarán abiertas en verano para actividades de refuerzo en formas diversas, combinadas con actividades lúdicas pero no habrá actividad lectiva». Con este fin, el Ministerio podrá diseñar programas de cooperación territorial, similares al famoso programa de refuerzo de aprendizaje financiado por Educación para los alumnos rezagados (PROA), o trabajar con administraciones locales y ONG, buscando el contenido educativo y recreativo.

Celaá fue preguntada por quién se haría cargo de dichas actividades y descartó que fueran los docentes.

Una Selectividad diferente

Otro debate abierto es el de la EBAU. Celaá reconoció ayer no tener un «plan B» en el caso de que las pruebas no se hagan de forma presencial.

Aún así, fuentes educativas aseguraron a este diario que se está estudiando la posibilidad de que la Selectividad sea presencial y que los alumnos de distribuyan en más aulas. «En vez de tres aulas, que sean treinta», señalaron estas fuentes, que añadieron que se plantean escenarios de salida al finalizar el examen para que no haya aglomeraciones.

El mensaje que quiso dejar claro la ministra nada más empezar la rueda de prensa fue que nadie se quedará atrás, repetido en otras ocasiones al margen de la pandemia. «Ningún alumno perderá el curso por el Covid-19», dijo ayer. En la misma línea señaló que «el objetivo prioritario es que los estudiantes puedan avanzar en su formación teniendo en cuenta especialmente a los más vulnerables. La evaluación será continua y acentuará su carácter diagnóstico y formativo en todas las etapas, ciclos y enseñanzas». La ministra anunció también que los centros organizarán el curso 20-21, de forma que lo que no se haya trabajado en este curso, se refuerce en el primer trimestre del próximo. Navarra ya ha planteado una vinculación reforzada entre los cursos 19-20 y 20-21.

El hecho de incidir en el aspecto formativo de la evaluación fue otra decisión que tampoco terminó de convencer a Madrid. «No estamos de acuerdo con la propuesta de que la tercera evaluación tenga carácter diagnóstico; debe tener carácter académico. El ministerio ha propuesto sustituir el término académico por formativo, pero es insuficiente. Es devaluar el concepto de evaluación», señaló Ossorio. Aún no hay un criterio claro sobre si se pueden avanzar contenidos y la decisión quedará en manos de las comunidades (Asturias no lo hará pero Madrid, sí).

Isabel Celaá: “El alumno repetirá solo si eso le va a hacer mejorar”

La ministra de Educación detalla que para que un estudiante repita curso, el equipo de docentes tendrá que presentar un argumentario detallado

ANA TORRES MENÁRGUEZ. MADRID 16 ABR 2020

Toda la comunidad educativa estaba este miércoles pendiente del anuncio de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá (Bilbao, 70 años), que tras un mes del cierre de los centros educativos, detalló las medidas acordadas con las autonomías para cerrar el curso escolar. La pandemia del coronavirus ha llevado a 8,2 millones de estudiantes de enseñanzas no universitarias a continuar las clases desde casa, y la mayor incógnita era conocer si los contenidos aprendidos durante el tercer trimestre serían evaluados. “Lo que más nos importa son las personas; ningún alumno se va a quedar atrás”, aseguró la ministra antes de encender la grabadora para dar comienzo a la entrevista.

Pregunta. Cuando habla de que la regla general va a ser la promoción de curso, ¿quiere decir que los profesores deben intentar aprobar a todos los alumnos?

Respuesta. El curso sigue. Ningún alumno lo va a perder por el coronavirus y todos serán evaluados con justicia, atendiendo a las circunstancias excepcionales que estamos viviendo. Es necesaria una evaluación excepcional porque muchos de los estudiantes están desconectados (el 10%, según datos del ministerio). Por eso hemos pedido a los centros que los identifiquen para así hacer un diagnóstico real del sistema. No hemos consensuado un aprobado general para todos (pasar de curso con un 5) porque eso sería injusto. Queremos propiciar que se mantengan los hábitos de estudio; pero pedimos que los equipos docentes se centren en evaluar las competencias esenciales.

P. ¿Es esta una oportunidad para reducir las altas tasas de repetición en España (la más alta junto a Luxemburgo de la UE)?

R. Sería deseable, pero no es lo que estamos intentando hacer ahora mismo. Es verdad que en España tenemos mayor número de repetidores que en los países de nuestro entorno. Lo que pretendemos es que la promoción de curso (pasar al siguiente curso) sea más elevada que en circunstancias de normalidad. Igualmente, la repetición debe ser inferior porque los alumnos están viviendo situaciones complicadas y muy dolorosas; los hogares se han convertido en aulas virtuales. El acuerdo es que los equipos docentes activen esa medida. La repetición tendrá que ser argumentada, cada alumno recibirá un informe personalizado para conocer cuáles son sus carencias, y si se propone que repita será para beneficio del estudiante. Tendrá que estar acreditado.

P. Han acordado abrir los centros durante el verano. Las autonomías ya han pedido financiación para costear los contratos. ¿Es viable que les llegue?

R. Ahora estamos con la salida del curso. Hemos propuesto activar en julio estancias para los alumnos, con participación de voluntariado, para que además de hacer deporte, puedan trabajar en contenidos. Está pensado sobre todo para los más vulnerables.

P. ¿Se contratará a interinos que no estén trabajando?

R. Es un programa que no está desarrollado. En función de la evolución de la pandemia, lo estudiaremos. La idea es recuperar el llamado plan PROA (cofinanciado por las comunidades y el Gobierno entre 2005 y 2012 para dar apoyo a los alumnos con necesidades y menor rendimiento académico) y reforzarlo, que empiece en julio y luego se extienda a lo largo de todo el próximo curso. Esperamos contar con voluntarios, desde las ONG a personas individuales que quieran dar clase en verano.

P. Los planes de refuerzo suponen necesariamente la contratación de nuevo profesorado.

R. La enseñanza personalizada, que es nuestra apuesta, huye de cifras fijas en los ratios. Puede haber grupos más amplios de alumnos con más de un docente en el aula, que puede estar más tiempo con aquel que tiene más dificultades o con el que es más rápido. Es un concepto que tenemos que revisar, el de los ratios. El trabajo colaborativo de los docentes puede hacer avanzar a un alumno.

P. Muchos colegios no están acondicionados para acoger a niños en verano por las altas temperaturas, ¿Hay algún plan en ese sentido?

R. Buscaremos espacios alternativos.

P. ¿Hay consenso sobre que el tercer trimestre pueda servir para recuperar los dos anteriores en caso de suspenso?

R. Los dos primeros trimestres están claros porque han sido presenciales, pero hay alumnos que no los han podido superar y ahora tienen la oportunidad de recuperarlos. El tercer trimestre tendrá un valor diagnóstico, medirá qué dificultades tiene cada alumno. Nada va a impedir que se les evalúe de múltiples formas, no tiene por qué ser con la prueba tradicional.

P. Todos los acuerdos alcanzados se traducirán en una orden ministerial. ¿Hay alguna comunidad que se oponga?

R. El acuerdo tiene un respaldo mayoritario. Vamos a incorporar las nuevas propuestas presentadas este miércoles y les volveremos a pasar el documento para ver si es unánime o no. El siguiente paso es publicar una orden ministerial que firmará el ministro de Sanidad, por la circunstancia actual del estado de alarma.

P. Algunos países como Alemania han encargado un informe para conocer qué condiciones técnicas y sanitarias se deben dar en caso de reapertura de los centros.

R. No hemos encargado ningún informe. No tenemos especificaciones. Continúa el confinamiento y no se ha iniciado una desaceleración. Nuestro deseo es poder tener un contacto con los estudiantes antes del verano, pero estamos pendientes de la pandemia.

P. ¿Qué plan tiene el ministerio para hacer llegar Internet a todos los hogares? Muchos consideran insuficientes las 20.000 tarjetas SIM que han repartido.

R. Sin duda, es insuficiente, pero no hemos dejado de trabajar desde que se cerraron las aulas. No es fácil resolverlo de la noche a la mañana. Estamos hablando con todas las tecnológicas, pero son muchos los condicionantes, empezando por el *stock* y por cuestiones económicas.

P. ¿Es realista pensar que si en septiembre continuara el confinamiento un porcentaje mayoritario de los alumnos dispondrá de esos recursos?

R. En España, el problema de la brecha digital enmascara otra brecha, la social. Una tableta se podría resolver con dinero, pero la brecha social es más complicada y no sería realista pensar que se pueda dar solución en dos o tres meses. Se necesitan más medidas económicas, como la renta mínima. Otros países de nuestro entorno también lo están sufriendo.

P. ¿Qué va a pasar con los alumnos de segundo de bachillerato? ¿Hay algún consenso con respecto al temario, se va a reducir de forma homogénea?

R. Tienen la EVAU y pensamos que la pueden hacer de manera presencial entre el 22 de junio y el 10 de julio. No hemos hablado del temario, pero sí de que en el tercer trimestre se deberían abordar las competencias esenciales. Como ha sucedido siempre, son los centros los que deciden cuántos temas dan, nunca ha habido acuerdo entre comunidades y ahora tampoco lo va a haber.

P. Tampoco ha habido consenso sobre si se debe avanzar en el temario en el resto de etapas. ¿Eso no genera grandes diferencias entre comunidades?

R. Las diferencias no son en términos de comunidades, sino de alumnos. El problema aquí se da entre los estudiantes que están conectados y los que no pueden hacerlo. Por eso tenemos que ser justos; no podemos tratar por igual al que está desconectado.

P. ¿Cuál es la recomendación en cuanto a la evaluación para los alumnos desconectados?

R. Repetir solo si eso le va a hacer mejorar. El trabajo que hay que asumir es el de identificarlos y mantener la relación. Los profesores están volcados con eso. Hay que trabar la relación adecuada, que no tiene por qué ser a través de Internet, sino con material impreso, libros de texto...

P. Las familias están angustiadas, ¿qué mensaje les lanza respecto al próximo curso?

R. El curso que viene, si se dan las condiciones sanitarias oportunas, será un año de medidas de refuerzo. Primero, quiero manifestar gran respeto hacia su esfuerzo, por compaginar el teletrabajo, con la educación de sus hijos y el hecho de no poder salir a la calle. Solo podemos tratar de mantener la calma, lo contrario nos resultaría fatal a todos. Necesitamos medidas terapéuticas. Vamos a intentar que los profesores tengan más interacción con los alumnos, que les den más respuestas.



Sin un plan B para la EVAU si no se puede hacer en julio

La ministra de Educación y FP trasladó todo el peso de la decisión a los equipos docentes de los centros académicos

Rocío Ruiz. 16/04/2020

¿Qué pasa con los alumnos de cuarto de la ESO y de segundo de Bachillerato, que son precisamente los que tienen que titular este año? ¿Se aplicarán los mismos criterios que al resto a la hora de evaluarlos en un curso crucial como éstos? ¿Podrá un alumno hacer la EvAU con suspensos? La ministra de Educación y FP no ofreció muchas certidumbres sobre este asunto y trasladó todo el peso de la decisión a los equipos docentes de los centros académicos en una rueda de prensa celebrada ayer.

«No hablamos de suspensos ni de aprobados, hablamos de evaluación comprensiva, global, continua e integral. Esta es la verdadera sustancia de lo que estamos tratando», dijo ayer a preguntas de los periodistas. Y es que, en su opinión, «estamos en un momento excepcional que precisa de adaptación curricular excepcional por eso hablamos de aprendizajes y competencias esenciales», dijo. Más aún, «todo lo que no pueda ser trabajado al final de este curso será trabajado en el siguiente y la Evau tiene esa naturaleza de prueba que nivela y que de alguna manera sustancia lo que es el conocimiento del alumno, en primero y segundo de Bachillerato y abre la puerta para el acceso a la universidad», dijo sin concreción alguna. Así,

explicó que «todas las comunidades autónomas y el Ministerio somos conscientes de que todavía en el sistema educativo español tenemos alumnos que no tienen conexión por una brecha digital o por una brecha social».

La ministra hizo hincapié en que todos conocemos que hay circunstancias excepcionales y, en estas circunstancias, «hay que salvaguardar lo esencial» y eso es «lo que dice la normativa en relación a los criterios de evaluación del Bachillerato, que cuando habla de ella lo hace de la superación de los objetivos generales de la etapa». «Son los profesionales que conocen perfectamente rasgos de cada alumno, sus conocimientos y sus déficit y «son ellos los que van a clasificar o calificar si el alumno está para superar el curso y pasar al siguiente o para pasar a la EvAU o es más ventajoso para el alumno que de nuevo vuelva a repetir ese curso». No obstante, puntualizó «lo justo es que la promoción sea la norma general». «Todas las comunidades autónomas somos muy conscientes de que todavía hoy hay alumnos que no están conectados». Sea como fuere, lo cierto es que Celaá reconoció ayer que no existe un plan B si la EvAU no se puede celebrar presencialmente a finales de junio o principios de julio. **«Estudiaremos otras opciones»**, dijo.

¿Y qué pasa con las universidades? En materia universitaria, el ministro Manuel Castells, celebró ayer también una reunión con los representantes autonómicos del ramo. El acuerdo alcanzado es que cada universidad, en ejercicio de su autonomía y en coordinación con su comunidad, desarrollará los procedimientos necesarios para terminar el curso en los plazos establecidos, incluyendo docencia y evaluación.



El tercer trimestre escolar se dedicará a tareas de refuerzo y los alumnos pasarán de curso salvo en casos excepcionales

Las administraciones educativas pactan no extender el curso escolar al verano y se realizarán "actividades de refuerzo en periodo estival, combinadas con actividades lúdicas"

Daniel Sánchez Caballero. 16/04/2020

El curso escolar no se alargará pasado junio haya o no clases, el tercer trimestre se dedicará sobre todo a consolidar conceptos ya dados, los alumnos promocionarán de curso salvo situaciones muy excepcionales y se habilitarán los centros educativos durante el verano para dar clases de refuerzo a quien así lo quiera.

Respecto a la Ebaú (la Selectividad), ya fijada para principios de julio en la mayoría de las comunidades, la única novedad es que en este momento no existe un plan b para el caso de que no se pueda celebrar por motivos sanitarios. En cuanto a si entrarán o no los contenidos del tercer trimestre, Celaá ha explicado que "el alumno será requerido sobre las materias que efectivamente se han trabajado", y ha negado que vaya a ser más fácil.

Estos son algunos de los principales acuerdos alcanzados este miércoles entre Gobierno y comunidades autónomas de cara al final del año académico y el verano en las etapas preuniversitarias, según ha informado la ministra de Educación, Isabel Celaá, en rueda de prensa esta tarde.

Aunque aún no se sabe si los ocho millones de alumnos de la etapa preuniversitaria volverán a clase en algún momento —dependerá de la evolución de la situación, cada día que pasa parece menos probable—, el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas, reunidas este miércoles en la Conferencia Sectorial de Educación, han pactado que en ningún caso se darán clases formales en julio o agosto, tal y como habían solicitado algunos colectivos educativos.

La ministra ha afirmado que consejeros y Gobierno central esperan poder abrir los centros "al menos 15 días" antes de que acabe el curso, pero no ha sido capaz de responder qué pasará en el probable caso de que se levante el confinamiento antes de que abran los colegios y los padres tengan que acudir a sus puestos de trabajo.

Casi aprobado general

Uno de los temas que más interés levantaba era qué se iba a decidir respecto a la promoción de curso. Celaá ha asegurado que no se va a dar el aprobado general que demandaban algunas asociaciones de estudiantes, aunque la norma será pasar de curso salvo situaciones "muy excepcionales". La ministra ha recordado que repetir ya es excepcional y que lo que se hará será que estos casos sean aún más restrictivos. "En absoluto" se va a promocionar a alumnos con muchas asignaturas suspendidas, ha afirmado. El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ha explicado que un aprobado general consiste en que el alumno sepa que va a promocionar sí o sí y no haga nada y no va a ser el caso. "Sería injusto y dañino", ha afirmado.

Esta cuestión relaciona con la evaluación del tercer trimestre, que no se va a impartir como tal. Según ha explicado la ministra, el acuerdo es consolidar los contenidos ya impartidos y utilizar estas semanas hasta el final de curso a modo de diagnóstico para detectar carencias de los alumnos y qué materias necesitan ser retomadas el curso que viene.

La evaluación constará de un informe individualizado de cada alumno y en ningún caso podrá ser negativa para el alumno respecto al resto del curso, solo podrá ser positivo. El Ministerio ha explicado que "nada más lejos" de su intención que cargar al profesorado con más trabajo, y recuerdan que estos informes "ya están recogidos en las normas y forman parte de los instrumentos habituales de evaluación, se realizan año tras año".

Celaá se ha defendido de las críticas de muchos docentes, que llevan días (semanas) en un estado de incertidumbre sin saber qué tenían que hacer para el trimestre. "No se ha tardado tanto [en decidir qué hacer]. Cuando nos encontramos con los consejeros de las comunidades autónomas el 25 de marzo decidimos esperar [hasta el término de la segunda alarma] y es lo que hemos hecho. Nadie conocía cuál iba a ser el escenario a finales de abril principios de mayo y hemos decidido hoy qué haremos".

Sí que habrá, según ha informado el Ministerio de Educación tras la reunión, "actividades de refuerzo en periodo estival, combinadas con actividades lúdicas", pero tendrán carácter voluntario. La ministra ha explicado que estas actividades las realizarán "personas que no han estado trabajando durante el curso escolar, si así lo quieren".

En cuanto a la situación de meter alumnos en clase en julio, la ministra ha afirmado que se buscan "situaciones idóneas, nadie está pensando en centros educativos con condiciones climatológicas difíciles, no sería ni planteable", aunque tampoco ha explicado qué pasará si se da la circunstancia.

¿Diferencias entre comunidades?

También se ha concedido, según algunas fuentes, libertad a las comunidades autónomas para decidir si avanzar con el temario o dedicar el tiempo, como se ha hecho mayoritariamente hasta ahora, a repasar conceptos ya tratados en clase. En este sentido, el ministerio apela a la responsabilidad de los gobiernos autonómicos para que no haya diferencias en este ámbito, como podría ser que algunas decidieran avanzar por el temario y otras no.

En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se está moviendo entre los centros un documento de trabajo de la consejería que explica cómo adaptar el currículo para lo que queda de curso ("se deberá priorizar la adquisición de aquellos estándares de aprendizaje evaluables que se consideren imprescindibles, por ser la base de futuros aprendizajes").

La reunión entre ministerio y consejerías autonómicas ha tenido un aperitivo en la sesión de control al Gobierno por la mañana. Allí, Celaá ha comentado que la regla general será la promoción automática y la repetición será la "excepción", una medida que los profesores califican de redundante porque la repetición ya es la excepción. Además, Celaá ha contestado a la portavoz del PP en la materia, Sandra Moneo, que le había dicho que "puede presionar a Sanidad" para que se reabran las clases.

"No son circunstancias que dependen de Educación, sino del Ministerio de Sanidad", le ha respondido Celaá. "¿Considera que presionar al ministro de Sanidad puede llevarnos a una solución?".

europapress.es

Docentes, padres y alumnos celebran no evaluar las tareas durante el confinamiento: "Garantiza la equidad"

También aprecian que se puedan abrir los centros en julio, aunque advierten del calor, y piden que las clases las dé personal externo

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Sindicatos docentes, asociaciones de padres y madres de alumnos celebran que los contenidos educativos trabajados desde casa de manera telemática por el cierre de colegios e institutos como consecuencia de la pandemia por coronavirus no cuenten para la evaluación, ya que subrayan que muchos alumnos no pueden continuar el curso en casa por falta de recursos.

"Se debe incidir en evaluar contenidos que se han podido dar en situación normal porque así se garantiza la equidad y la justicia", ha señalado en declaraciones a Europa Press la responsable de Educación de UGT, Maribel Loranca, que indica que de este modo se da cabida a la "evaluación continua".

Igualmente, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, celebra que no se tenga en cuenta a la hora de evaluar, porque hay entre un 10-12% de alumnos que no tienen dispositivos o conectividad para trabajar en casa, pero sí ve "razonable" que se tenga en cuenta lo realizado para poder "modular la nota". "Hay que garantizar que no sea factor de exclusión, a la vez que se tiene en cuenta el trabajo hecho", expone.

Del mismo modo se manifiesta CSIF, que ve "positiva" esta iniciativa, ya que considera que se aplica así "la lógica de la evaluación continua". "Al no ser presencial (las clases), tenemos que tener un análisis cuidadoso de lo que se ha hecho todo el curso, que es como se hace ordinariamente, pero teniendo en cuenta la situación extraordinaria que tenemos", señala Mario Gutiérrez, responsable de educación de CSIF.

Desde la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), su presidente, Nicolás Fernández, apuesta por la "flexibilidad total" a la hora de evaluar a los alumnos, pero no está de acuerdo con que haya un

"aprobado general" ni con "regalar" el curso porque sería "injusto", sino que a su juicio se debería aplicar la evaluación continua.

En cuanto a las asociaciones de padres y madres, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA) valora "positivamente" lo acordado entre consejeros y Ministerio de Educación de no evaluar los contenidos no presenciales. "Apostamos por que se valore el esfuerzo inmenso de profesorado, alumnado y familias, favoreciendo que esta última evaluación sirviera como continua para la recuperación de materias y la mejora de nota de los alumnos", dice su presidente, Pedro Caballero.

Por su parte, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) está de acuerdo con los sindicatos en la medida, porque "no todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades para trabajar en casa, es decir, acceso a Internet o acceso a dispositivos", por lo que evaluar a los alumnos durante el tiempo en que se permanezca en casa "podría agrandar la desigualdad de oportunidades y afectaría a personas con menos recursos económicos".

Desde el Sindicato de Estudiantes destacan que "millones de estudiantes" no están conectados ni a las clases online ni pueden cursar el contenido escolar por la falta de recursos que tienen en sus casas. "Lo más justo es que nuestra nota media se haga con las dos primeras evaluaciones, que son los contenidos que sí hemos cursado porque las clases online no son ninguna solución y sería totalmente injusto que contaran para nuestras notas", opina su secretaria general, Coral Latorre, si bien reivindican que se dé el curso ya por terminado y "que todo el mundo pase de curso y que nadie se quede atrás".

APERTURA DE CENTROS EN JULIO

Con respecto a la apertura de centros educativos en el mes de julio, tanto UGT como CSIF, CCOO y ANPE ponen el foco en que el personal que imparta las clases de refuerzo o las actividades durante ese mes sea personal externo al centro y "con unas condiciones retributivas y laborales dignas", según indica Maribel Loranca (UGT).

"Si la Administración quiere abrir los centros contratando monitores o interinos nada tenemos que decir", asegura Nicolás Fernández (ANPE). Los sindicatos también se preguntan quién va a financiar la apertura de colegios e institutos durante este mes.

Por otro lado, UGT y la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) hacen hincapié en la posibilidad de que no se puedan abrir centros en determinadas zonas durante el mes de julio por el calor. "Nos parece una buena medida siempre y cuando se asegure que las condiciones ambientales del aula son las adecuadas para dar clase", dice Andra Henry (CANAE). En este sentido, el Sindicato de Estudiantes asegura que "es muy complicado saber qué pasará en julio, si los colegios podrán abrir, si se podrán dar clases de refuerzo", si bien entienden que todo aquello que defienda el derecho de los estudiantes a la educación y garantice que en el menor tiempo posible se puedan recuperar los contenidos que no han podido cursar, será "positivo".

Por el contrario, Pedro Caballero, de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA) se posiciona en contra de la apertura de centros en julio, ya que no aprecia "mejoras". "Saldremos de un confinamiento de casi dos meses y se necesita el periodo estival para rebajar el nivel de estrés acumulado", opina, por lo que apuesta por comenzar el siguiente curso cuanto antes, como por ejemplo, "en el primer día posible del mes de septiembre de este año".



Comunidades del PP no firmarán el acuerdo de Celaá que permite que los alumnos pasen curso de forma generalizada

Consideran que la orden ministerial introduce cuestiones que "aumentarán la disparidad territorial". País Vasco tampoco la suscribirá y seguirá su propio plan

OLGA R. SANMARTÍN. Madrid. Jueves, 16 abril 2020

Comunidades autónomas gobernadas por el PP como Murcia y la Comunidad de Madrid han dicho expresamente que no van a firmar el acuerdo para cerrar el curso escolar que la ministra Isabel Celaá propuso este miércoles a los consejeros educativos. Así lo han explicado fuentes *populares* y de estas CCAA, que señalan que el borrador de orden ministerial que permite que los alumnos pasen de curso de forma generalizada, aunque sea con asignaturas suspendidas, regula aspectos que "aumentarán la disparidad" educativa por regiones y "generarán más desigualdad" en los alumnos.

El Ministerio de Educación ha dado el día de hoy para que las comunidades autónomas presenten sus alegaciones al denominado *Acuerdo para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019/2020 y el inicio del curso 2020/2021*. Ayer Celaá dijo que el respaldo había sido casi unánime pero las cinco regiones del PP (las mencionadas más Castilla y León, Andalucía y Galicia) se oponen.

Otras, como el País Vasco (PNV), sí que valoran positivamente el documento, pero han dicho que tampoco lo firmarán porque "se trata de orientaciones" y esta región trabaja en su "propio plan" para finalizar el curso escolar y desde "sus propias competencias", según las fuentes consultadas.

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio fue el primero este miércoles en desmarcarse públicamente de la propuesta de Celaá acusando de "dejación de funciones" al Gobierno por

permitir que las comunidades autónomas establezcan por su cuenta los criterios de obtención de diferentes títulos, como Bachillerato, ESO o FP. "El Ministerio se lava las manos en una competencia nacional, porque un título expedido por una autonomía tiene validez en todo el territorio nacional", apuntó.

También denunció que en una comunidad autónoma un alumno podrá pasar de curso "con siete suspensos si así lo acuerda", mientras que en otra los criterios podrían ser distintos, una disparidad territorial que debería, en su opinión, estar regulada desde el Ministerio, como se ha hecho hasta ahora.

Fuentes del Gobierno murciano han explicado que tampoco van a firmar la propuesta de acuerdo: "Consideramos que la promoción y titulación del alumnado debe contar con un marco normativo, con la modificación normativa pertinente, ya que no es justo dejar esta responsabilidad en el profesorado, sin que éste cuente con los criterios mínimos para determinar si un alumno debe promocionar o titular o no", señalan.

Y añaden que la medida para abrir los centros educativos en verano "no está planteada como un plan nacional" con dotación económica suficiente para que las comunidades puedan hacer frente el pago a esos profesores que darán clases de refuerzo a los niños que voluntariamente lo soliciten.

Tampoco Andalucía suscribe lo acordado, según ha expresado el consejero de Educación, Javier Imbroda (Ciudadanos) en Canal Sur TV, porque se necesita "un marco común" sobre asignaturas aprobadas para evitar diferencias entre regiones. La viceconsejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha dicho en Canal Sur Radio que podría existir "un problema de seguridad jurídica" porque el Ministerio es quien debería fijar para toda España un criterio común.

CADA COMUNIDAD DECIDE POR SU CUENTA

La orden ministerial permite que las comunidades autónomas sean las que decidan si sus alumnos avanzan o no en el temario este trimestre. Y, más aún, dice que, de cara al curso que viene 2020/2021, podrán realizar "una organización curricular excepcional". Es decir, podrán reelaborar todo el programa de estudios y asumen así una competencia estatal, pues legalmente quien está capacitado para cambiar el currículo es el Ministerio de Educación a través del desarrollo reglamentario de la ley educativa.

Esto preocupa al PP, que también denuncia que en el borrador "se utiliza el estado de alarma" para introducir otras cuestiones que deberían requerir de un cambio en una ley orgánica, pero se hacen por la vía menos garantista de una orden ministerial, que no requiere trámite parlamentario.

"Nos cuelan la Lomloe a través de una orden ministerial", expresa la responsable educativa del PP, Sandra Moneo. "En una situación tan grave como la actual, el Gobierno deja al arbitrio de las comunidades cuestiones tan importantes como la promoción o el refuerzo de los alumnos y renuncia a asumir su responsabilidad".

Galicia, por su parte, ha enviado un borrador con alegaciones al Ministerio en el que expresan varias "discrepancias". "Estamos en desacuerdo con que no haya criterios comunes de promoción y titulación, algo que dará lugar a desigualdades entre comunidades", explican fuentes de la Consellería de Educación. "Desde la lealtad institucional cumpliremos con lo que dice la orden, aunque no la apoyemos en la totalidad", señalan estas fuentes.

Castilla y León ha trasladado su apoyo al acuerdo en general, salvo en el apartado de promoción y titulación, para el que ha pedido más concreción. La consejera Rocío Lucas ha pedido al Ministerio una nueva reunión para llegar a un acuerdo en este punto, "puesto que no es tan urgente como el resto de cuestiones en las que sí hubo consenso y que permite a las CCAA avanzar en la gestión de la educación".

EL PAÍS

Madrid, Murcia y País Vasco no aplicarán el acuerdo del Gobierno para el final de curso

Las tres comunidades están en desacuerdo con, al menos, dos de las medidas: que los alumnos con suspensos puedan pasar de curso y obtener el título de 4º de ESO y 2º de Bachillerato

IGNACIO ZAFRA / ANA TORRES MENÁRGUEZ. VALENCIA / MADRID - 16 ABR 2020

El consenso que la ministra de Educación, Isabel Celaá, creía haber alcanzado este miércoles en la conferencia sectorial celebrada entre el Gobierno y las comunidades autónomas para zanjar los principales elementos de la finalización del curso ha durado poco. Madrid, Murcia y País Vasco han anunciado este jueves que se desmarcan del documento que salió de la reunión. En el caso de las dos comunidades gobernadas por el PP (Madrid y Murcia), están en disconformidad con, al menos, dos de los puntos del documento: la promoción general de los alumnos (que quiere decir que pasen de curso el máximo número de estudiantes) y la obtención de la titulación en 4º de ESO y 2º de Bachillerato pese a tener asignaturas suspensas. Las dos autonomías del PP (Madrid y Murcia) consideran que el ministerio debería fijar un máximo de asignaturas suspensas para poder pasar de curso y titular. El documento del ministerio establece que los alumnos

promocionarán y podrán titularse con carácter general, reservando la repetición para casos excepcionales, independientemente del número de materias suspendidas, que tendrían que ser recuperadas en el curso siguiente. Por su parte, el País Vasco considera que el ministerio no debe establecer normas comunes para todas las comunidades porque considera "el desenlace del curso forma parte de sus competencias educativas" y está ultimando su propio plan. De ahí que fuentes del Ejecutivo vasco rechacen de "forma taxativa" suscribir el documento.

El hecho de que estas tres comunidades se hayan desmarcado del documento no quiere decir que el Ministerio de Educación no vaya a aprobar la orden ministerial con todos los acuerdos alcanzados con las diferentes autonomías, sino que "la orden solo se aplicará en aquellas comunidades que suscriban el documento", según fuentes del ministerio. Las que, por el contrario no lo hagan, se ceñirán a lo que establece la actual ley educativa (Lomce) y a las normativas autonómicas. Además, esas comunidades podrán modificar esas normativas con motivo de la pandemia del coronavirus. "La normativa de la conferencia sectorial —la reunión entre el ministerio y las autonomías para alcanzar consensos— establece que los acuerdos se adoptarán por mayoría, pero solo afectarán a las regiones que manifiesten su conformidad", explican las mismas fuentes.

Por el momento, hay otras tres comunidades que han puesto pegas, pero no que no se han bajado del acuerdo: Castilla y León (PP), Andalucía (PP y Ciudadanos) y Galicia (PP). En el caso de las dos primeras, han manifestado que se acogerán a todos los puntos del documento excepto a la promoción general y la titulación, y que ellos decidirán qué medidas aplicar. Galicia, por su parte, ha mostrado su conformidad por "lealtad institucional" y aplicará las instrucciones, aunque quiere que quede constancia en el documento su discrepancia con esos dos puntos.

La objeción de Madrid y Murcia fue puesta sobre la mesa por sus consejeros de Educación en la reunión del miércoles, y también de forma menos enérgica por el de Galicia, con el argumento de que la promoción y la titulación tienen carácter estatal y no pueden dejarse en manos de cada autonomía. La respuesta del ministerio y de varias comunidades gobernadas por los socialistas fue que el documento no establece que sean las comunidades quienes decidan, sino los equipos docentes atendiendo de forma concreta a la situación de cada alumno, atendiendo a la excepcionalidad generada por la epidemia del coronavirus. La discusión quedó ahí y la impresión de la mayoría de asistentes fue que, pese a esa diferencia, había consenso y sería posible establecer una posición común. Algo que no ha sucedido.

"No se puede compartir la propuesta que establece, ni más ni menos, que se titule con asignaturas suspensas", expone la Comunidad de Madrid en un documento interno al que ha tenido acceso EL PAÍS. La regulación de las repeticiones es "una competencia estatal, que debe ser ejercida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional", se advierte en el documento del departamento que también considera que la tercera evaluación debe tener no solo carácter diagnóstico sino también "académico". "Con el documento del ministerio en la mano podría darse el caso de que titulasen alumnos y fuesen a la selectividad con suspensos", ha añadido una fuente de la consejería de Educación.

Murcia ha manifestado, por su parte, que los equipos docentes no pueden tomar las decisiones sobre repetición de curso y obtención de títulos de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional sin disponer de "un marco claro, no les corresponde a ellos", según ha indicado una portavoz de su Consejería de Educación. El Ejecutivo regional también reclama, para firmar el documento, que el Gobierno clarifique la dotación económica del plan de refuerzo para el verano que ha planteado el ministerio.

La consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, afirmó este miércoles tras la conferencia sectorial: "El Ministerio nos ha trasladado un documento con criterios y orientaciones a las comunidades autónomas y es positivo, pero en Euskadi tenemos nuestras competencias, nos debemos a nuestra comunidad educativa y ese es nuestro marco de trabajo. Llevamos tiempo ya trabajando y definiendo cuáles serían los contenidos esenciales de los currículos de aquí a final de curso. Estamos también trabajando en las evaluaciones y cuáles serían los criterios y herramientas para realizar esta evaluación", señaló.

europapress.es

Save the Children celebra las medidas de Educación pero avisa: pueden no ser adecuadas en la práctica

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Save the Children considera que las medidas acordadas en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada este miércoles para que la crisis provocada por el coronavirus afecte lo menos posible al aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas son "adecuadas" en los objetivos, pero "pueden no serlo en la práctica, dada la falta de concreción normativa y de recursos así como de consenso con las comunidades autónomas, que serán quienes tengan que aplicarlas".

Las medidas acordadas por el Ministerio de Educación y los consejeros autonómicos (posibilidad de apertura de colegios para clases de refuerzo y actividades en julio; adaptar el currículo del próximo curso para incorporar los aprendizajes básicos no abordados en éste; y no evaluar los contenidos dados durante el conamamiento) son algunas de las iniciativas que propusieron Save the Children y cerca de 40 organizaciones y especialistas a la ministra Isabel Celáa.

"Los acuerdos van en la buena dirección pero su eficacia está sujeta a que se concreten aún más y se dote de recursos al sistema educativo", afirma Catalina Perazzo, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children.

Sobre la apertura de los centros en el mes de julio para actividades no lectivas, Perazzo celebra la medida, al considerarla un "estímulo" necesario después de un período de desvinculación del aprendizaje. Pero advierte de que para que éste recurso llegue a quienes más lo precisan "será fundamental conectarlo con la evaluación de necesidades de aprendizaje de cada alumno y poner recursos suficientes".

La ONG aconseja además que la planificación para julio sea liderada desde las administraciones educativas en colaboración con los Ayuntamientos y que el Gobierno central dote a las autonomías de suficientes recursos a través de un programa de cooperación territorial.

Con respecto a la de impulsar un programa especial de refuerzo educativo el próximo curso, la ONG hace hincapié en la necesidad de que haya una dotación presupuestaria para implementar este apoyo, que además tendrá que darse tanto en horario extraescolar como dentro del aula.

"Los centros educativos con alumnado socialmente desaventajado arrastraban déficits de recursos y personal adecuado, como muestra el informe PISA, y ahora las necesidades educativas y psicosociales de los niños y niñas que atienden se agravan --indica Perazzo--. Proponemos que este programa dote de recursos extra a los centros educativos con alumnado desfavorecido, como bajadas focalizadas de ratio, profesorado extra de apoyo, trabajadores sociales, orientadores".

En este sentido, sobre la adaptación del currículo para que en el curso 2020-2021 los niños adquieran los aprendizajes que este año no se les han impartido, la organización muestra su "preocupación" por la sobrecarga de contenido.

MAGISTERIO

El fin de curso, de nuevo a debate este miércoles por Gobierno y comunidades

Las perspectivas de final de curso ante la situación creada por la pandemia de coronavirus serán estudiadas este miércoles en la reunión telemática de la Conferencia Sectorial de Educación, entre la ministra de Educación, Isabel Celaá, y los consejeros de todas las comunidades.

REDACCIÓN Lunes, 13 de abril de 2020

La Conferencia Sectorial de Educación se celebrará este próximo 15 de abril presidida por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y en la que participan los consejeros de Educación de todas las comunidades.

En la Comisión General previa celebrada el pasado día 8 se abordaron, entre otras cuestiones, las perspectivas de final de curso 2019-20 en el contexto de la situación sanitaria actual.

El pasado martes, el Consejo Escolar del Estado había pedido que se evaluase solamente lo que se había dado en clase, así como evitar las repeticiones de curso y mantener el calendario escolar aprobado a principio del mismo.

Una petición que comparte la consejería murciana de Educación, que ha anunciado que pedirá al Ministerio que la evaluación de todas las enseñanzas obligatorias y postobligatorias se realice sobre los contenidos que se hayan impartido de manera presencial antes del inicio de la suspensión de la actividad lectiva.

Además, el Sindicato de Estudiantes ha reclamado la cancelación de todos los exámenes, incluidos los de la prueba de acceso a la Universidad (EBAU), que todos los alumnos pasen de curso y se reorganicen los planes de estudio para recuperar, cuando se pueda, los contenidos esenciales perdidos.

También se ha pronunciado la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), que ha demandado "establecer cuanto antes la finalización de la actividad docente presencial" y ha manifestado que no son partidarios de alargar el calendario escolar más allá del 30 de junio.

El confinamiento afecta a más de 8.200.000 alumnos y 712.000 profesores de colegios e institutos.

Una brecha que crece semana tras semana

Las dificultades para acceder a la tecnología pueden llevar a los alumnos desfavorecidos a perder medio curso.

Los expertos insisten en que no son solo necesarios dispositivos, sino apoyo.

SARAY MARQUÉS Martes, 14 de abril de 2020

El 13 de marzo a las 13.45 los 135 alumnos y 18 maestros del CEIP “Gumersindo Azcárate” de León recibían la noticia de que la semana siguiente no volverían al centro; ni la otra, ni la otra. Esta es la quinta semana que no pisan las aulas por la pandemia de coronavirus Covid-19.

El colegio, en el barrio de Armunia, es denominado 2030 por la Consejería de Educación, esto es, es un centro de especial dificultad que escolariza a un 80% de alumnos vulnerables desde el punto de vista socioeconómico. La decisión del cierre de todos los centros educativos de Castilla y León –fue la última comunidad en tomarla– les pilló de improviso, pero “con los deberes hechos”, según explica su directora, Pilar Bahamonde.

Los alumnos del centro llevan tres años trabajando las competencias digitales de la mano del programa ‘Samsung Smart School’, y de “vírgenes digitales” han pasado a competentes digitales. Eran vírgenes porque “no son niños que reciban una tablet cuando hacen la comunión” y su primer acercamiento a la tecnología fue en la escuela, con un uso educativo. “Sentamos las bases, los criterios, les hacemos responsables”, explica Bahamonde. Por ello, durante el confinamiento, algunos con tablets prestadas por el centro, han seguido trabajando en entornos que ya conocían, como Google Classroom, enviando y recibiendo fotografías de dictados y ejercicios de ortografía, o Snappet, repasando Matemáticas o Inglés.

Antes fue clave llamar familia por familia, entre otras cosas para conocer su conectividad. Las llamadas han seguido estas semanas. “Quiero que sepan que estamos ahí”, sentencia Bahamonde, preocupada si de un grupo de 22 dos o tres no contestan. Durante el curso los niños no tenían deberes, para no ampliar las diferencias, pero ahora están respondiendo con creces a lo que se les exige. Al profesorado, también formado, se le acumula el trabajo en casa entre el seguimiento individualizado, con flexibilidad e incidiendo en lo emocional, actualizar los espacios comunes en la web o elaborar pautas y horarios. “En otros centros los alumnos siguen con sus rutinas como si nada, pero no todos podemos”, reconoce la directora.

Esos dos o tres niños y niñas por grupo que le preocupan a Pilar coinciden con el 12% del alumnado con el que, según la ministra Celaá, los profesores no están logrando conectar. Y el micromundo del “Gumer” evidencia los tres niveles de la brecha digital: en el acceso –en su caso, solventado por los dispositivos prestados–, en el uso y competencias del alumno y en la aproximación de la escuela a la tecnología –también en parte paliado por formar parte del programa ‘Samsung Smart School’–.

El capital cultural

Pau Marí Klose, ex Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, apunta: “La brecha digital entre niños de diferentes familias tiene consecuencias muy importantes con el confinamiento. Los hay que son capaces de seguir con “cierta normalidad” el curso escolar y los hay que no. Se está intentando dar una solución deprisa y corriendo. Diversas comunidades están repartiendo tablets, pero no sabemos qué efecto va a tener, porque no es solo tener o no tener, es poder usar, tener una conexión adecuada, adultos en el hogar que puedan ayudar”. Para el experto, “lo que en Sociología de la Educación se denomina el capital cultural de la familia, que en condiciones normales influye a través del apoyo extraescolar o la estimulación cognitiva en casa, ahora es clave. Los padres se convierten en el principal referente y en algunos casos pueden compensar la ausencia de escuela pero en otros no”.

El sociólogo añade que con la actual crisis se pone de relieve otra brecha relacionada: “Los niños desfavorecidos habitan en viviendas pequeñas, hacinados, sin espacio donde estudiar, frente a niños con sus propias habitaciones pertrechadas de libros, con un ordenador o una tablet para ellos”.

La socióloga María Fernández Mellizo-Soto, que ha analizado los distintos niveles de la brecha digital, coincide: “El primer nivel, el acceso, es condición sine qua non, pero el segundo, los patrones de uso y la competencia digital, también importa. En las familias de un nivel educativo más alto los niños hacen un uso más educativo de la tecnología, se controla más el tiempo, se evita que sea una distracción. A mayor nivel socioeconómico mayor competencia digital también. Esto se debe al mayor acceso y no es el principal factor. Influyen también el grupo de compañeros o los profesores”.

“La brecha de segundo nivel se percibe muy claramente en esta situación. El Estado no cuenta con ningún mecanismo para evitarla, porque lo que puede hacer es sobre todo a través de la escuela: dotarla de ordenadores, formar mejor a los profesores... La escuela tiene sus problemas de cara a compensar desigualdades, pero si hay algo que las compensa mínimamente es la escuela. Si toda la Educación es en los hogares y los estudiantes pierden el contacto con los profesores y con los otros estudiantes, la desigualdad entre familias se va a trasladar al uso digital, a las competencias digitales... y a la posibilidad de seguir el ritmo”, analiza la experta.

Fernández Mellizo-Soto hace el símil con el aprendizaje de una segunda lengua: “Los recursos y el nivel educativo de los padres siempre repercuten. Puedes tener el dispositivo pero si tus padres no saben cómo guiarte... Es como cuando estudias inglés y ellos no saben esta lengua y no te pueden ayudar”. Al tiempo, considera el plan puesto en marcha por el Ministerio de Educación en colaboración con Telefónica, Cisco e IBM para que el aprendizaje siga a través del móvil, destinado a 20.000 estudiantes de Bachillerato y FP de Grado Medio, “es una respuesta a una situación de emergencia, porque hay una mayor implantación de móviles que de tablets u ordenadores, pero no lo ideal. Un móvil es muy limitado a la hora de ver los contenidos o escribir bien. Lo ideal sería un ordenador o por lo menos una tablet”.

Un informe interno del Grupo Socialista calcula que el cierre de aulas durante un mes puede suponer una pérdida cognitiva de 4,5 meses escolares para el alumnado “más desfavorecido” o, lo que es lo mismo, medio curso. Si este se prolonga dos meses, advierte del aumento de la brecha entre las comunidades por su desarrollo de la escuela digital o por su visión demasiado academicista, citando entre las comunidades con mayor riesgo la Comunidad Valenciana, la de Madrid, Aragón, Andalucía y Extremadura, por unirse una alta brecha digital por origen socioeconómico del alumnado y una escuela menos digital.

Aparte de las comunidades, ONG como Save the Children en colaboración con Samsung han repartido 800 tablets entre niños y niñas de familias en riesgo de exclusión dentro de la campaña ‘A tu lado’ y el objetivo es llegar a las 2.000. Álvaro Ferrer, técnico de Incidencia Política y Equidad Educativa de la entidad, recalca la importancia no solo de los dispositivos, sino del apoyo: “El trabajo online es mucho más autónomo. Tenemos familias que no cuentan con esa capacidad de apoyar y alumnos que ya necesitaban apoyo cuando la clase era presencial. Ahora, a distancia, nos preocupa que falte ese refuerzo, el apoyo psicológico, el seguimiento de la situación de las familias. Antes no bastaba con que se sentaran en clase. Ahora no basta con que tengan el dispositivo. Hay que evitar la otra desconexión, priorizar el riesgo de desvinculación por todos los medios”. La ONG incide en la importancia de buscar modalidades de apoyo y refuerzo a distancia, reforzando las plantillas en este punto (orientadores, profesores de compensatoria, de atención a la diversidad, monitores de apoyo y refuerzo) y ayudando a así a los tutores, sobrecargados en las actuales circunstancias.

Los planes del PSOE para reducirla

Aunque no hay ninguna decisión en firme se están explorando distintas iniciativas en esta línea.

1. Una de ellas, mientras dura el confinamiento, es aprovechar los portátiles sin uso en los centros educativos y entregarlos a domicilio por parte de servicios sociales a los alumnos que los necesitan, siguiendo criterios de equidad y necesidad, prestándolos en condiciones de responsabilidad. En el documento interno del PSOE se cifran en 100.000 los portátiles que están disponibles en los centros.
2. Otra es un plan de acceso a la alimentación y el ocio educativo durante el verano. De hecho, ya existe. El programa VECA se puso en marcha hace dos años. El primer verano, con 10 millones, llegó a 30.000 alumnos. El segundo, con 15 millones, a 60.000. Si la evolución de la pandemia permite desarrollarlo se ampliaría y se acompañaría de actividades para solventar posibles problemas psicológicos generados por el confinamiento e intentar corregir la brecha que se produce en verano, que, este curso, se suma a la brecha generada desde marzo, con lo que ambas se acumularían generando una desigualdad muy importante al inicio del curso que viene.

Desde Save the Children se menciona cómo en el Estado de Washington, ante la evidencia de que el aprendizaje online aumenta las desigualdades por origen social, se ha recomendado a las escuelas evitar las clases online a menos que se garantice el acceso para todos, recomendando solo algunas tareas, y, a la par, se estudia alargar el calendario escolar para recuperar. En esta línea, la ONG ve interesante analizar, en el caso de España, extender las clases presenciales más allá del calendario aprobado, con programas de refuerzo educativo generalizado durante el mes de julio.

Ministerio y CCAA acuerdan generalizar la promoción de curso y no avanzar más temario

Los estudiantes de todo el país podrán “pasar al siguiente curso de forma directa y así no restarles oportunidades”, según han acordado hoy el Ministerio y las comunidades autónomas, pero deja abierto el número de materias suspensas con las que se puede promocionar o titular.

DIEGO FRANCESCH. Miércoles, 15 de abril de 2020

Esta iniciativa ha sido aprobada esta mañana en una Conferencia Sectorial en la que ministra y responsables de los departamentos de Educación de todas las comunidades autónomas han dado el visto bueno a otras propuestas, como el hecho de que el tercer trimestre de este curso sirva para ahondar en contenidos ya vistos y en actividades, pero no para avanzar temario.

De esta manera, la evaluación de este curso se realizará teniendo en cuenta el desempeño del alumnado en los dos primeros trimestres y que esa nota “pueda revisarse al alza gracias a la actitud mostrada por el alumnado durante el periodo de actividad lectiva a distancia, destacando su esfuerzo y la realización de las tareas propuestas”, según fuentes de la Conferencia Sectorial.

El Ministerio ha acordado con las comunidades autónomas, por tanto, “promocionar de forma general al alumnado” de todas las etapas, siendo la repetición de curso una medida “muy excepcional”. Además, la titulación debe ser la “práctica habitual para los alumnos de 4º de ESO y de 2º de Bachillerato y de FP”, para lo cual las administraciones educativas “adaptarán los criterios exigibles para obtenerla, pudiendo organizar pruebas extraordinarias de recuperación y titulación a las que podrán presentarse quienes así lo deseen, con posibles exenciones de parte de estas”.

La conselleira de Educación de Galicia, Carmen Pomar, ha reclamado al Gobierno central “definir los criterios de promoción y de titulación, con el fin de garantizar la igualdad de todos los alumnos para pasar de curso, con independencia del territorio donde vivan”. Pomar señala que el documento adoptado señala que las autoridades educativas podrán flexibilizar de manera excepcional durante este curso los criterios de promoción y de titulación “sin tener en cuenta las limitaciones que afecten al número de materias pendientes”.

En su opinión, dejar abierto el número de materias suspensas con las que se puede promocionar o titular “resultaría caótico, no sólo por las desigualdades que puede provocar entre territorios, sino también entre centros educativos según su tipología”. Por ello, hace un llamamiento a consensuar unos “criterios homogéneos” de manera que “el Ministerio, como órgano competente, publique una norma en el Boletín Oficial del Estado”. El Ministerio se ha comprometido a redactar una orden ministerial para “intentar unificar” las medidas generales y evitar así disparidad entre las comunidades.

En los próximos días, además, se van a revisar currículos y programaciones para centrar las actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y competencias imprescindibles, se harán actividades de recuperación y repaso, y en aquellos cursos que tengan como finalidad una titulación, se flexibilizarán para que el alumnado pueda alcanzarla.

Además, se programarán acciones de orientación, especialmente para 4º de ESO, 2º de FP Básica, 2º de Bachillerato y 2º de FP de Grado Medio; y se redactarán planes específicos para el alumnado desconectado con el objetivo de que puedan recuperar en el menor tiempo posible el vínculo escolar y refuerzo sus conocimientos.

Asimismo, el Ministerio ha sugerido dos actuaciones más: la adaptación del modelo de tutorías a la nueva realidad o el apoyo para favorecer la atención a los alumnos con necesidades especiales.

Durante el encuentro también se han abordado otros asuntos como la celebración de la EBAU. En este mes estará finalizado el nuevo modelo de examen, que incluirá más opciones a elegir por parte del alumnado para facilitar que puedan optar por un bloque de contenidos que hayan podido dar en clase.

Como ya se aprobó en la anterior Sectorial, las autonomías han vuelto a secundar que la actividad educativa continúe a distancia mientras la situación no aconseje aún abrir los colegios y garantizar el cumplimiento del calendario escolar previsto, que no se extenderá más allá del mes de junio.

En la reunión celebrada esta mañana por videoconferencia, las autonomías también han dado su visto bueno a una propuesta que consiste en poner en marcha en el próximo curso un programa de refuerzo que sirva como repaso y consolidación para aquellos que alcanzaron las competencias requeridas y para su superación en el caso de aquellos que no lo hubieran podido alcanzar. Unos planes que se apoyarán en los informes individualizados de final de este curso y eventuales evaluaciones iniciales.

Asimismo, la Administración educativa estatal y las autonómicas diseñarán planes de contingencia para responder a posibles nuevos periodos de alteración en la actividad lectiva provocada por el Covid-19. Asimismo, el Ministerio constituirá, contando con la colaboración de las comunidades autónomas, un grupo de expertos para analizar la experiencia acumulada en este periodo y emitir recomendaciones para la transición a la escuela digital y para estar en las mejores condiciones ante situaciones similares.

Por último, las administraciones educativas podrán autorizar para todo o parte del curso 2020-21 una organización curricular excepcional, que garantice la consolidación, adquisición, refuerzo o apoyo de los aprendizajes afectados por la situación del tercer trimestre del presente curso, por parte de todo el alumnado.

EL DIARIO de la EDUCACIÓN

Evaluación final del curso: el virus desempolva viejos dilemas

La comunidad educativa espera como agua de mayo algo de claridad sobre la evaluación del final de curso. Los formatos online y la complejidad de hacer exámenes dificultan la adaptación al nuevo contexto. Mientras las administraciones se ponen de acuerdo, emergen interesantes debates que apuntan al corazón mismo de preguntas educativas de altura: qué, cómo y para qué evaluamos

Rodrigo Santodomingo. 13/04/2020

Este próximo miércoles 15 de abril, la ministra Isabel Celáa y los consejeros de Educación abordarán en la Conferencia Sectorial asuntos candentes de cara al final de curso. En la cima de prioridades, destacan los pormenores de la evaluación. Para todas las etapas de escolarización y, muy en particular, en los cursos avanzados de la Secundaria, cuando los estudiantes se juegan titular o no en ESO y Bachillerato. Y, por supuesto, acceder o no a la carrera que tienen en mente, EVAU mediante. En un mar de dudas, el examen más temido se aferra a relativas certezas: en principio se celebrará entre el 22 de junio y el 10 de julio, sujeto a un nivel de optatividad en las preguntas nunca visto.

El clima de opinión previo a la Sectorial se está alimentando de opiniones cruzadas y rumores en tropel. Vuelan confirmaciones y desmentidos, iniciativas autonómicas particulares y peticiones para articular una estrategia estatal. Se reflexiona e improvisa sobre un futuro incierto, con dos grandes escenarios en el horizonte: que los

chavales vuelvan en algún momento al aula o que el resto del curso tenga un carácter exclusivamente telemático.

Subyacente a la faceta operativa, aflora un debate que desempolva viejas cuestiones sobre la naturaleza de la evaluación. ¿Formativa o punitiva? ¿Continua o focalizada en el examen? ¿Personalizada o regida por el café para todos? ¿Competencial o memorística? Dilemas especialmente relevantes cuando la excepcionalidad hace casi inviable realizar pruebas uniformes y controladas, que siguen siendo el instrumento de evaluación predilecto del sistema español. O cuando la brecha digital y la enorme disparidad de circunstancias en el hogar muestran, quizá más que nunca, que la gran desigualdad educativa germina y crece fuera de la escuela.

Ampliar o no

Presidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), Jesús Marrodán cita otro factor que añade complejidad a la ecuación. «Persiste la duda de si debemos o no avanzar en el currículum. El sentido común nos dice que hemos de reforzar los conocimientos que ya se han impartido. Pero si el confinamiento se alarga el resto del curso, muchos docentes se están planteando ampliar conocimientos, aunque sea de forma limitada y sencilla. Solo reforzar resulta poco motivador».

Sin conocer exactamente qué se va a impartir, se antoja difícil establecer qué se va a evaluar. Y sin tener esto último claro, resulta hasta cierto punto estéril discutir el cómo. El Consejo Escolar del Estado (órgano consultivo con representación de toda la comunidad educativa) ha recomendado, tras su última deliberación, frenar en seco los temarios en Primaria. Pero no hay quórum sobre la Secundaria, tema clave que volverá a debatir en una nueva reunión online prevista para primeros de mayo. Las dificultades se centran en los cursos avanzados de la ESO y en el Bachillerato, donde la EVAU condiciona la ductilidad de opciones.

Director del IES Bovalar (Castellón) y referente de la innovación, Toni Solano, apunta a soluciones flexibles: «Quizá se podría ampliar con los que han ido bien en los dos primeros trimestres, para que no pierdan el hilo, mientras nos centramos en la prioridad de rescatar a los que llevaban el curso más precario». Pero admite no tener una opinión sólida para los cursos decisivos. En ellos, asegura, «no puedes hacer tábula rasa, no se puede obviar un trimestre entero»

Aprendizaje competencial

Se avance o no en el temario, los docentes encuentran una enorme fuente de confusión en el nuevo contexto de aprendizaje impuesto por el Covid-19, que plantea otra disyuntiva: ¿se ha de evaluar o no el trabajo online que están haciendo los alumnos? En caso afirmativo, el asunto vuelve a bifurcarse: ¿debe el profesor tener en cuenta las tareas en confinamiento para la nota final, o utilizarlas con un fin meramente formativo, focalizado en un mayor progreso del alumno? Y de nuevo, la cuestión se ramifica: ¿saben o no la mayoría de profesores españoles evaluar sin priorizar la traslación numérica del aprendizaje?

Enrique Navarro, profesor en la Facultad de Educación de la Complutense, se muestra escéptico. «La evaluación formativa de actividades competenciales, con un **feedback** continuo, sigue siendo minoritaria. El coronavirus está poniendo de manifiesto una contradicción: desde hace tiempo se fomenta la innovación y la adquisición de competencias, pero para titular tienes que superar unas pruebas en formato clásico, demostrando ante todo un dominio de contenidos».

Navarro piensa que la prevalencia de esta pedagogía tradicional explica «que la adaptación esté siendo tan difícil», con muchos profesores limitándose a «enviar a sus alumnos una cantidad inasumible de deberes». Solano argumenta en la misma línea: «si nos hubiéramos creído el aprendizaje por competencias, tendríamos claro qué tareas son productivas para su desarrollo y cuáles son mera reproducción de contenidos. Y no habría estallado el tema de los deberes, que está fuera de toda medida. Estaríamos trabajando competencias transversales por proyectos online». El director del IES Bovalar está viendo mucha didáctica de corte rígido, estilo «para mañana, actividades del tema 6: todas», pero también un repunte de originalidad, con un buen número de profesores apostando por el fomento de la creatividad: «recreación en vivo de grandes obras de la pintura, vídeo-poemas...».

Que nadie se quede atrás

El Consejo Escolar recomienda evaluar el aprendizaje en cuarentena para que los estudiantes «no se relajen», sin dar demasiados detalles sobre las herramientas o fines de la evaluación mientras dure la excepcionalidad. En su opinión, deberían quedar al margen de los procesos evaluativos aquellos chavales con graves carencias tecnológicas en el hogar, para los que se reserva un seguimiento personalizado que evite un ensanchamiento aún mayor de la brecha socioeducativa. Solano conoce de primera mano esta realidad: «Hay chavales en mi instituto que viven en una chabola, sin ordenador ni conexión a internet. Pensar que hay que mandar a todos lo mismo y evaluarlos por lo mismo es no haber entendido nada sobre atención a la diversidad».

Marrodán apunta en esta dirección a la hora de fijar las urgencias del cuerpo de inspectores. «Ante todo, debemos comprobar que ningún alumno se queda descolgado, que se garantiza el derecho a la educación para todos. Es lo que estoy haciendo con mis centros: preguntar qué cambios están introduciendo desde el punto de vista metodológico y qué alumnos se están quedando atrás, ya sea por la brecha digital, que ahora

ralentiza mucho el aprendizaje, o por la falta de colaboración de las familias. Y detectar esos problemas para buscarles una solución», explica.

Mientras el virus galvaniza reflexiones varias en torno a la evaluación, nadie ignora que resulta necesario atajar el desconcierto. De cara a la Conferencia Sectorial, el presidente de USIE confía en que las administraciones «se coordinen y, bajo el liderazgo institucional del Ministerio», sean capaces de enviar instrucciones «homogéneas» para toda España. Sobre todo en las cuestiones más peliagudas como «los títulos de ESO y Bachillerato, que de hecho tienen validez estatal». Política común no incompatible con una mayor «autonomía de cada centro» para idear soluciones *ad hoc*.

Solano valora que la inspección esté relajando la presión burocrática. «Se ha dejado de lado la petición de informes, seguimientos..., que era uno de nuestros grandes temores: encima de que nos estamos dejando la piel, que tuviéramos que detallar a la inspección qué se está haciendo en cada asignatura», confiesa. En cualquier caso, Marrodán entiende que es imprescindible modificar «las programaciones didácticas, que contemplan contenidos e instrumentos de evaluación. Si un alumno reclama alguna nota, pensemos sobre todo en Bachillerato, la programación didáctica actual no se ajusta a lo que se está haciendo. Esto tiene que plasmarse de forma más seria, pactada y consistente».

Soluciones de urgencia en toda Europa

En Italia, se discute un borrador que contempla el aprobado general y la promoción automática, con recuperación pertinente a principios del próximo curso. Si la ley entra finalmente en vigor, no habrá exámenes y las notas tendrán en cuenta la trayectoria continua del alumno, antes y después del cerrojo escolar. Francia ha suspendido este curso sus exámenes nacionales en Secundaria, los temidos Bac y Brevet, salvo la parte oral en el primero. Los alumnos obtendrán su calificación a partir de una valoración global del curso, incluido el tercer trimestre.

Todos los países de la Unión Europea se afanan estas semanas en aprobar medidas excepcionales para lidiar con el problema de la evaluación. El próximo 14 de abril, un día antes de que se celebre la Conferencia Sectorial en nuestro país, los ministros de Educación de la UE intercambiarán por videoconferencia información sobre estrategias estatales concretas.

En cuestionario respondido por correo electrónico, una portavoz de la Comisión Europea asegura a El Diario de la Educación que este organismo ha dispuesto un “foro online donde los estados miembros pueden compartir sus experiencias y buenas prácticas durante la transición de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación” a modalidades telemáticas. Para la Comisión, continúa, la prioridad es “evitar que la situación actual aumente la brecha educativa entre alumnos con buena conexión a internet y aquellos sin ella”. Varios países “están proporcionando equipamiento a alumno desfavorecidos, en ocasiones utilizando fondos de la UE”, añade.

La portavoz de la Comisión considera que las herramientas digitales cuentan con “aspectos positivos” como la posibilidad de “ajustar el nivel de dificultad que se exige a cada alumno, así como la inmediatez en el feedback que da el profesor, lo que ayuda a mantener la motivación”.

«La segregación imposibilita que la educación a distancia tenga la menor eficacia»

Javier Murillo espera que salgamos de esta crisis siendo conscientes de la necesidad de un sector público potente que responda a los retos sociales que tenemos por delante. Asegura que «el actual modelo económico está claro que ha resultado fallido en la medida que hemos necesitado un Estado fuerte, con recursos y que intervenga para frenar la situación».

Pablo Gutiérrez de Álamo. 14/04/2020

Javier Murillo es, entre otras muchas cosas, profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Madrid, en la que, además, dirige la Cátedra UNESCO para la Justicia Social. Se ha especializado, en sus investigaciones, en todo lo relacionado con la segregación escolar que, en los últimos años, está demostrando ser uno de los más importantes lastres del sistema educativo. Las condiciones socioeconómicas de las familias y los entornos impactan fuertemente en la educación, dividiendo al alumnado entre aquellos que pueden y quienes no pueden alcanzar las mejores cotas posibles.

Hablamos con él de cómo la situación actual de cierre de colegios e institutos impactará sobre las cifras de segregación escolar que venían siendo ya preocupantes desde hace algunos años, con el ejemplo de la Comunidad de Madrid, como región que más segrega (tras Hungría) de la Unión Europea. También, de qué podríamos aprender de esta situación de crisis sanitaria y económica.

La segregación escolar es uno de los focos de tu trabajo. ¿Cuál dirías que es la situación general en España?

Los últimos estudios han sido muy claros en demostrar que España vive una situación de alta segregación escolar, especialmente lo que llamamos segregación escolar por nivel socioeconómico; es decir, la existencia de escuelas para pobres y escuelas para ricos. Este hecho ha supuesto un impacto en los últimos años. Tradicionalmente España se caracterizaba por tener un sistema educativo ni especialmente bueno ni especialmente malo, en la media de la OCDE en cuanto a rendimiento, pero uno de los más equitativos del mundo. Incluso a la altura de los países nórdicos. Y, de repente, como si despertáramos de un sueño, nos hemos convertido en líderes de la inequidad educativa en Europa. Afortunadamente muchas administraciones

han sabido reconocer el hecho, no todas, y estamos viendo cómo se multiplican las medidas para abordar este problema.

Madrid destaca por ser una de las regiones que más segrega de toda Europa. ¿Por qué?

Es una buena pregunta que sólo podemos responder con algunas hipótesis de trabajo que poco a poco estamos confirmando. Y yo me atrevería a proponer tres, íntimamente relacionadas entre sí, que según la investigación podrían estar detrás de estas cifras tan espectaculares. En primer lugar, la Comunidad de Madrid, desde hace ya muchos años ha liderado una política neoliberal en educación fomentando la creación de lo que llamamos un cuasi-mercado escolar. Eso se consigue favoreciendo la libertad de oferta, haciendo que esta se diversifique; potenciando la libertad de elección de centro y eliminando cualquier limitación a la misma y haciendo que la competencia por los mejores estudiantes genere que las leyes de mercado hagan que los centros mejoren. Y los peores se quedarán sin estudiantes y tendrán que cerrar. Todo eso, como sabemos, es mera teoría, las leyes de mercado en educación solo generan segregación escolar. En segundo lugar, un apoyo, casi impúdico, hacia la enseñanza privada; privada pero pagada con el dinero de todos. La investigación ha sido clara en demostrar que la educación privada ha contribuido de forma clara a aumentar la segregación en las escuelas. Y, por último, en Madrid ha destacado una especial política de bilingüismo que ha generado una alta segregación dentro del subsistema de enseñanza pública. Es posible que los tres elementos combinados estén explicando esos índices de segregación en Madrid que, aún peor que ser altos es que van en aumento.

En la situación actual de confinamiento y con el sistema educativo convertido de un día para otro en un sistema digital ¿Cuáles crees que son los riesgos que corremos en relación a la segregación?

De entrada, hay que recordar que, a pesar de sus limitaciones, el sistema escolar es la mejor estrategia para garantizar una mínima igualdad de oportunidades. Es casi el único mecanismo de compensación real que tenemos, la única oportunidad para conseguir un mundo más justo. Si desaparecieran las escuelas, perderían especialmente los niños, niñas y adolescentes de familias de menor nivel socioeconómico. Los de mayores recursos, ya encontrarían alternativas. La segregación escolar, la existencia de escuelas segregadas, hace que el sistema educativo pierda ese papel compensador.

El cierre de las escuelas y la repentina apuesta por una educación a distancia va a generar, de forma irremediable, que las desigualdades se incrementen y de una forma muy pronunciada. La existencia de escuelas segregadas imposibilita que la educación a distancia tenga la más mínima eficacia. Las complicaciones propias de una forma a distancia, sin medios, sin preparación, sin formación del profesorado, se multiplican en escuelas donde los retos son mayores.

Muchas chicas y chicos tendrán dificultad a la hora de acceder a los materiales que otros compañeros tendrán con cierta facilidad...

Sin duda, el sistema educativo no estaba preparado para asumir el reto de una educación a distancia, y más aún, siendo de un día para otro. Tenemos estudiantes con diversidad funcional que tiene dificultades en el acceso, también estudiantes con capacidades diferentes a los que la educación a distancia no es posible llegar... No existen esos materiales preparados y adecuados a las necesidades de cada centro y de cada alumno. Los y las docentes, que están haciendo un esfuerzo brutal estos días, se sienten superados, no disponen de medios (usan sus propios recursos), ni de formación, ni siempre funciona internet. No olvidemos que, en amplias zonas del territorio especialmente en la zona rural, no hay internet con unas mínimas condiciones de calidad.

Claro, esa es una primera consecuencia de estos planes de educación a distancia. Por no hablar de las dificultades para muchas familias... Niveles socioeconómicos y culturales bajos, situaciones de exclusión social...

Sin duda alguna ese es uno de los mayores retos, los estudiantes de familias con menos recursos disponen en menor medida de ordenadores adecuados, ni siempre tienen unas condiciones de espacio y ambiente en su casa para estudiar. No olvidemos que hay un número importante de estudiantes que no tienen internet en sus domicilios, incluso tenemos aún hogares sin luz eléctrica. Si a eso le añadimos que, a veces, pedimos a padres y madres sin formación que apoyen a sus hijos e hijas con las tareas que se les solicitan desde la escuela... vemos que los retos se multiplican.

De momento sabemos que hasta el 26 de abril no podremos salir a la calle con normalidad. ¿Qué debería ocurrir en el futuro para paliar las grandes diferencias sociales existentes?

El 26 de abril se acerca y no parece que para esa fecha se pueda normalizar la vida social, y mucho menos que abran las escuelas. En muchas universidades ya se ha tomado la decisión de que no se regresará a las aulas este curso, y que todo debe hacerse a distancia. Es interesante analizar las diferentes propuestas que se han ido haciendo. Desde perder este año, pasando por alargar el curso escolar el tiempo que sea necesario, acabar ya el curso y dedicar el verano a recuperar el curso, o dedicar el verano a descansar y preparar el curso que viene con fuerza. Lo que no nos imaginamos es que después de estas semanas de confinamiento y con el

buen tiempo ya en las calles vayamos a tener a los estudiantes reclusos más allá de lo que es el calendario habitual.

¿Cómo deberíamos salir de esta crisis sanitaria y ya económica?

Deberíamos salir más reforzados como sociedad, más solidarios y con un sistema de prioridades más claro y más justo. Tener un sistema sanitario fuerte se nos ha mostrado imprescindible, pero también lo es el apoyo a los más necesitados y una educación que sea capaz de afrontar estos retos y los futuros. El actual modelo económico está claro que ha resultado fallido en la medida que hemos necesitado un Estado fuerte, con recursos y que intervenga para frenar la situación.

¿Crees que esta situación cambiará la forma en la que percibimos los servicios públicos?

Ese es el gran deseo. Una de las cosas más claras que hemos aprendido es que son los servicios públicos los que de verdad funcionan y dan una respuesta adecuada para todos en situaciones de excepcionalidad... y también en situaciones de normalidad. Ojalá, y es más un deseo que una convicción, nos demos cuenta como sociedad de que lo público, lo de todos, es lo que está siempre con nosotros. Y que los mejores profesionales, en sanidad, en educación, en servicios sociales, están en los sistemas públicos. Solo hace falta que se dote a lo público de forma adecuada y que se le valore en lo que merece.

De la actual crisis el sistema social podría salir más debilitado, con una importante crisis económica y social, además de la sanitaria. O bien, siendo más conscientes de las debilidades que tiene y teniendo más en cuenta a la población que está en peores condiciones. ¿Qué crees que debería pasar para que saliéramos más cerca de lo segundo que de lo primero?

De esta crisis saldremos, y queremos creer que saldremos reforzados porque habremos aprendido algunas lecciones. Aún está en nuestra memoria la fuerte crisis económica de 2008 que tanto daño nos hizo, que ha impulsado importantes cambios y que ha despertado las conciencias de tantos. No sé qué tendrá que ocurrir para salir más fuertes de esta situación y con una mayor sensibilidad a las personas más necesitadas. Esto marcará un antes y un después en nuestras vidas. Ojalá que como sociedad hayamos aprendido la lección.

Los docentes, divididos por la manera de afrontar la evaluación final del curso

Los datos preliminares de un estudio realizado por investigadores de las universidades de Granada, Málaga y UNIR saca a la luz la división del personal docente ante los posibles escenarios de evaluación para el tercer trimestre de este curso.

A pesar de las diferencias, hay coincidencia en que cualquier solución debería no suponer más trabajo burocrático para el personal docente y se hace necesaria la coordinación y apoyo de las diferentes administraciones educativas.

PABLO GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO. 14.04.2020

Desde hace algo más de un mes, alrededor de 10 millones de estudiantes están en sus casas intentando mantener el curso lectivo vivo. Todo su profesorado ha tenido que dar un salto (mortal) para poder, primero, terminar la segunda evaluación y, segundo, enfrentarse, a partir de ahora, a la tercera y al final del curso.

Mañana se reúnen en la Conferencia Sectorial el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas para tomar una decisión en relación a este trimestre. Son muchas las voces que hablan de no empezar a dar contenido nuevo. Otras, abogan por continuar el curso con cierta normalidad.

Esta división de opiniones se refleja en el estudio "Escenarios de evaluación en el contexto de la pandemia por COVID-19: la opinión del profesorado" elaborado por Fernando Trujillo Sáez (Universidad de Granada), Manuel Fernández Navas (Universidad de Málaga), Adrián Segura Robles (Granada) y Manuel Jiménez López (UNIR) entre el 2 y el 12 de abril pasados.

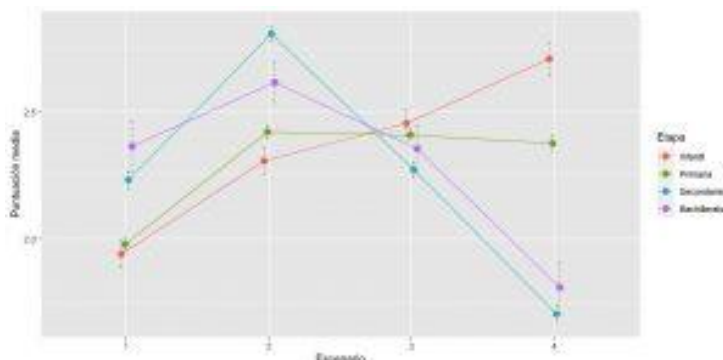
El estudio establece cuatro tipos de escenarios de evaluación: autonomía de los centros (el trabajo desde casa continúa, dándose materia que, posteriormente es evaluada y calificada y con la que se realiza la evaluación final sin que la Administración autonómica tome decisión alguna); ajuste del currículo (Administración o centros realizan un ajuste del contenido hacia sus mínimos, se diseñan tareas para alcanzarlos y estas se evalúan con normalidad, desde el suspenso hasta el sobresaliente); evaluación positiva condicionada (se da evaluación positiva a todo el alumnado tras acordar unas condiciones mínimas relacionadas, por ejemplo, con la entrega de ciertas tareas en junio. Las notas van del aprobado al sobresaliente), y, finalmente, la evaluación positiva sin condiciones (todo el alumnado aprueba sin condiciones, mientras se realizan planes de refuerzo para el siguiente curso. En cursos finales puede calificarse tomando la media de las evaluaciones o de los cursos anteriores).

La opinión va por etapas (y por género)

Han respondido satisfactoriamente cerca de 3.000 docentes desde infantil hasta bachillerato, pasando por primaria y secundaria obligatoria. Y aquí está una de las primeras diferenciaciones, según el informe preliminar de los datos obtenidos.

Por una parte, el personal de infantil, mayoritariamente, apuesta por la evaluación positiva, sea con condiciones o no. Un 65,43% de quienes respondieron al cuestionario en línea redactado por el equipo investigador se encuentra en esta posición. El 42,42% en la evaluación positiva sin condiciones, el 22,04%, con condiciones.

Frente a este, el 18,75% apostaría por hacer ajustes en el currículo y el 11,18% por dejarlo todo a la autonomía de los centros.



Las y los maestros de primaria, con porcentajes parecidos, apuestan también por la evaluación positiva, con y sin condiciones: el 54,16% del total así respondió. El margen es más ajustado que en caso anterior, de manera que un 30,13% seleccionó el escenario 4 (evaluación positiva sin condiciones); un 24,49%, el 2 (ajuste del currículo); un 24,03% el escenario 3 (evaluación positiva con condiciones), y el 15,71%, el 1 (autonomía de los centros).

El cambio importante se da con el paso a la secundaria obligatoria y postobligatoria, en donde los y las docentes apuestan más por los dos primeros escenarios, es decir, que se deje todo a la autonomía de los centros o, como mucho, se hagan ajustes curriculares. En cualquiera de los casos, las calificaciones podrían ser de suspenso.

En el caso de la ESO es el 62,34% el porcentaje de quienes abogan por dejar la situación entre la autonomía de los centros o el ajuste curricular. Del total, cerca del 40% apuesta por el ajuste curricular; el 22,6 por la autonomía de los centros; el 21,29% realizaría una evaluación positiva con condiciones, y el 12,66%, sin condiciones.

Cuando se «sube» al bachillerato, los porcentajes se equilibran más. A pesar de esto, casi el 55% preferiría autonomía o ajuste curricular; el resto, la evaluación positiva. Estos porcentajes se ordenarían de la siguiente manera: el 32,17%, ajuste curricular; el 25,2%, evaluación positiva con condiciones; el 22,62%, autonomía de los centros, y el 16,52% preferiría la evaluación positiva sin condiciones.

A esta división de los criterios a la hora de afrontar la tercera evaluación en función de las etapas educativas hay que sumar la que se da entre las y los profesionales del sector.

El estudio ha intentado conocer si había diferencias de opinión en función de la titularidad o del entorno socioeconómico del centro y concluye que no, pero sí la percibe en relación al género de quienes responden. En mayor medida las personas de género femenino apuestan por una evaluación positiva sin condiciones, mientras que el masculino se inclina en mayor medida por dejarlo todo a la autonomía de los centros. «Sin embargo, no se observaron diferencias de género en la selección de los escenarios 2 y 3», recoge una nota sobre la información preliminar del estudio.

Mismas razones para medidas diferentes

Además del estudio cuantitativo, el equipo investigador ha querido hacer un acercamiento cualitativo a las motivaciones del profesorado a la hora de elegir entre uno y otro modelo de evaluación. Destaca, según el resumen elaborado, el hecho de que las razones para decantarse por alguno de estos modelos son las mismas en los diferentes casos: situación de excepcionalidad, justicia, igualdad, mérito o esfuerzo. Términos «usados e interpretados, aseguran los investigadores, desde posiciones epistemológicas bien diferenciadas y probablemente antagónicas».

El equipo ha agrupado las posiciones en tres bloques conceptuales: concepción del proceso de enseñanza, definición de la evaluación y concepto de justicia. En el primer caso, podría decirse que hay quienes entienden este proceso como la transmisión de contenidos en un tiempo concreto, en palabras del equipo investigador, y que correspondería con los escenarios 1 y 2; mientras que otro grupo cree que se trata de la creación de experiencias de aprendizaje que pueden ocurrir en diferentes momentos (escenarios 3 y 4).

En cuanto a la definición de evaluación, los investigadores dividen al colectivo de nuevo en dos: quienes ven la evaluación como un proceso que certifica los aprendizajes y las calificaciones (escenarios 1 y 2) y quienes la entienden como una forma de regular el aprendizaje y buscar soluciones a los problemas que pudieran surgir (3 y 4).

Finalmente, dos grupos definirían también el concepto de justicia. Por una parte, entiende el equipo investigador, quienes ven la justicia como un concepto distributivo que se vincula a la cultura del esfuerzo. Este grupo sería el que se alinea con los escenarios 1 y 2. Por contra, estaría el grupo alineado con los escenarios 3 y 4, cuyo concepto de justicia es conmutativo y se preocupa más porque ningún alumno salga perjudicado del confinamiento.

A pesar de las diferencias entre, digamos, los dos grupos principales, sí existen acuerdos claros aseguran los investigadores, dentro de todos los grupos: la dificultad de llegar a medidas concretas que puedan atender a toda

la casuística posible; el rechazo a que cualquier medida pueda suponer más carga burocrática, y la necesidad de coordinación y apoyo por parte de la Administración educativa correspondiente a la labor docente.

Dadas las diferencias entre el colectivo docente a la hora de enfrentar la tercera evaluación y la final, el equipo investigador sostiene que lo más razonable sería «un paquete de medidas que contemple la especificidad de cada etapa educativa y que implique no solo actuaciones para el presente curso escolar sino para los próximos años, y siempre basadas en la coordinación y el respeto a la labor realizada por los docentes antes, durante y después de la crisis».

ESCUELA

La «regla general» será pasar de curso; repetir, «la excepción»

EDITORIAL

El coronavirus nos ha llevado a estadios inciertos. Incertidumbre es lo que está caracterizando este 2020 y más si hablamos de educación. Adaptación rápida al mundo digital tanto de las escuelas, docentes, familias y alumnos y medidas del Gobierno que modifican lo dicho el día anterior. Confinamiento e incertidumbre es lo que caracteriza este tiempo de crisis sanitaria.

Los criterios de promoción, titulación y adaptación de los contenidos han ido moldeándose estas semanas, pero realmente, quien conoce realmente la adquisición de competencias y conocimientos de los alumnos son los profesores. El sistema educativo debe adaptarse a estas circunstancias. Tenemos que adaptarnos a lo que hay, en esta crisis excepcional.

La ministra de Educación y el Secretario de Estado lo han dejado claro. No habrá aprobado general, sino una evaluación global, integral y continua. Es un momento excepcional que precisa de adaptación curricular excepcional. Todo lo que no pueda ser trabajado en este curso, será trabajado en el siguiente. No es un aprobado general porque no es justo ni eficaz y no sirve para nada. Cuando valoramos lo que los alumnos han hecho, se ha de tener en cuenta lo qué les queda por hacer.

El Gobierno ha decidido no prolongar el curso más allá de junio, como estaba previsto, aunque se permitirá que las comunidades autónomas organicen o apoyen la realización de actividades de refuerzo en el período estival combinadas con actividades lúdicas.

Y es que en esta crisis sanitaria, también nos hemos dado cuenta que la brecha digital muchas veces enmascara la brecha social. Hay muchos alumnos que no están siguiendo las clases online porque no tienen ordenador o conexiones a Internet, solamente las de los teléfonos móviles... pero cuando se les acaba la tarifa de datos, se les acaba la equidad en la educación. En esta pandemia han entrado en juego términos como online, elearning, colaboración, autonomía, innovación, flexibilidad, seguridad, metodología... pero también, frustración, ansiedad e incertidumbre.

El gobierno y la sociedad confían en el profesorado. Si se sigue enseñando se debe seguir evaluando, se debe ser capaces de emitir un juicio de valor a partir de la información relevante sobre lo que están aprendiendo los alumnos desde sus casas. Además, se evaluarán los conocimientos que se han dado, solo lo que ha dado tiempo a dar. Por ejemplo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha asegurado que a la hora de evaluar el presente curso escolar se tendrá en cuenta «especialmente los dos primeros trimestres», y que no se valorará el temario al que el alumno no haya tenido acceso por la suspensión temporal de la actividad presencial. Y, asimismo, los profesores y los equipos docentes considerarán las dificultades que hayan podido tener los alumnos. Por otro lado, se emitirá un informe individualizado para los alumnos que necesiten actividades de refuerzo durante el verano, en caso de que fuese necesario.

Por tanto, «la regla general» será pasar de curso, y la repetición «la excepción».

Post Covid-19: lecciones aprendidas sobre lo que las escuelas deben hacer

Antonio Bolívar. Catedrático de Didáctica y Organización Escolar. Universidad de Granada

Cuando se vuelva a las aulas, no debería ser simplemente recuperar, sin grandes cambios, dónde nos quedamos en los respectivos temarios antes de cerrar los centros. Cuando las escuelas abran definitivamente sus puertas, debería aprovecharse para replantear lo que, para los alumnos y para el profesorado, han aprendido sobre otros modos de hacer escuela. Muchas familias no tienen los dispositivos necesarios ni, lo que es más importante, las habilidades y el nivel cultural para acompañar a los niños y niñas en un aprendizaje mucho más autónomo. Pero sí ha sido una oportunidad, para un aprendizaje «profundo», para la vida.

Con todo el esfuerzo heroico que ha supuesto para todos, en primer lugar, para los docentes, el trabajo en casa no puede ser replicar lo que se debiera haber hecho (y no se ha podido hacer) en la escuela. Como comentaba —con razón— una profesora de Lengua: «no puedo poner análisis morfosintácticos», sino aprender a gozar de la lectura de una obra y su comprensión. No se puede plantear querer hacer un paréntesis para, al volver, retomarlo a dónde lo habíamos dejado antes, controlando lo que se ha hecho mientras tanto. Menos

aún, más de lo mismo, alargando el curso hasta agosto. La educación, en particular en la educación obligatoria, no se reduce a temarios y aprobar unas asignaturas.

Han proliferado miles de sugerencias y propuestas sobre qué hacer, y qué no hacer, en la enseñanza y la educación a distancia, confinados en el hogar. Desde luego, como se pretende, es preciso garantizar la continuidad del aprendizaje para niños y jóvenes a través del aprendizaje a distancia. En la mayoría de los casos, los esfuerzos involucran el uso de varias plataformas digitales con contenido educativo. Pero la cuestión no puede ser replicar lo que se hace en el aula o distribuir ordenadores o «Tablet» a familias que no saben emplearlas (capital cultural) o no tiene banda ancha en su casa (contextos vulnerables). La brecha digital evidencia, al tiempo, la desigualdad en el aprendizaje. Como declaraba en la prensa la subdirectora de la Unesco (Stefania Giannini): «el mayor riesgo de cerrar los colegios es que aumente la desigualdad». En efecto, como señalan dos colegas (J.M. Moreno y L. Gortazar), en un buen análisis desde una perspectiva global, las soluciones tecnológicas parecen ser la mejor manera de minimizar la pérdida de aprendizajes, pero también corren el riesgo de ampliar aún más las brechas de equidad en la educación. Por esto, concluyen, en estas condiciones, el aprendizaje digital tiene el potencial de evitar la ausencia del aprendizaje con el cierre de las escuelas; también, paradójicamente, pueden exacerbar las desigualdades en educación.

Como informaba un reportaje en BBC News (8 de abril) es imposible, a nivel nacional, que la casa sustituya a la escuela. El cierre de las escuelas generaba una segunda epidemia: niños que regresan al hogar cargados con paquetes de tareas o, en algunos casos, horarios completos en línea y los padres intentando hacer de maestros de matemáticas, inglés y ciencias. Pero aquí se evidencia cómo en estos casos, sólo salen beneficiados los grupos sociales y familias que cuentan con un capital cultural, de clase media, que posibilita que el homeschooling—mal que bien— funcione. En otros, familias desestructuradas, en paro, con varios hermanos, sin wifi y cuya única mesa para hacer las tareas es la que hay en una cocina estrecha, ahora escasa de comida. Para estos grupos sociales, el papel de la escuela es clave, hasta para comer. Por eso, me asombra que pedagogos «expertos» en recursos tecnológicos, sean ciegos a estas desigualdades, consistiendo el problema actual en que tengan medios digitales y formación para el profesorado para emplearlos.

La brecha digital no es solo de profesores o de familias, es resultado de la desigualdad y vulnerabilidad social, acrecentada con los efectos de pérdida de empleo para esas familias. El acceso y el uso autónomo y eficiente de estas tecnologías y recursos es desigual según los contextos familiares, ante los que no podemos ser ciegos. Por lo demás, algo ya sabido, al menos desde que (1964) Bourdieu y Passeron escribieron *Les héritiers* (traducida aquí, en plena dictadura, con el título más anodino de «Los estudiantes y la cultura»). Lo que sabemos después, no es sólo que la escuela reproduce las desigualdades sociales, es que —además— la escuela puede tener unos efectos positivos en aquellos grupos más vulnerables. Sin escuela (o con esta cerrada) sólo quedamos al arbitrio de las condiciones sociales, dejando de ejercer ese papel transformador. El cierre de las escuelas incrementa las desigualdades educativas del alumnado de entornos desfavorecidos, al dejarlas al arbitrio de entornos comunitarios y familiares con capitales sociales y culturales escasos.

En esa medida, por bienintencionado que esté, en una escuela que quiera ejercer un papel compensador no puede centrarse en enviar hojas de tareas a los alumnos o familias y evaluar, a la vuelta, según su grado positivo de realización. El asunto no es que quedaban 5 o 7 temas para acabar el temario. Más relevantes son las consecuencias que la realización de tareas escolares tendrán en la equidad y la cohesión social del sistema educativo. Ante esta emergencia educativa es preciso sacar lecciones de lo que las escuelas deberían hacer, que no coincide con lo que solían hacer, todo ello sin minimizar las consecuencias a medio y largo plazo. La vuelta no puede ser más de lo mismo: revisar como han aprendido lo que se les ha mandado.

En fin, buenos analistas de la educación (Andy Hargreaves, Joel Westheimer o Michael Fullan), coinciden en que este cierre de la escuela no debiera ser cómo recuperar lo que se han retrasado o cómo se pondrán al día. Más bien, se debiera incidir en esos otros aprendizajes «profundos» para la vida que, en unión con las familias y la comunidad, la escuela ha dejado de lado. La crisis del Covid-19 puede ser, entonces, una oportunidad para estos otros aprendizajes que la cultura escolar heredada ha imposibilitado. Cuando la escuela física (con suerte) regrese, además de diagnosticar el estado (y desigualdad) de los aprendizajes imprescindibles, se deben valorar esos otros aprendizajes profundos, y potenciar el capital social de las familias, al tiempo que reconstruir la comunidad perdida a través de este largo período de aislamiento social. Será el momento de incrementar las redes de aprendizaje con el medio comunitario, con otras escuelas y agentes educativos. En fin, saldremos de ésta, pero en un mundo diferente, también para la escuela. En lugar de más de lo mismo, debemos reimaginar cuál es el papel de la escuela y de educación en estos tiempos inciertos.

Tres comunidades mantienen las oposiciones pese a las críticas

Daniel Martín

Hace unas semanas la ministra Isabel Celaá optó por dar la iniciativa a las propias comunidades autónomas para que decidiesen sobre la convocatoria de oposiciones docentes. Hoy, y sin que se descarten nuevos

cambios en el último momento, solo tres comunidades autónomas han elegido mantener sus oposiciones docentes: Cataluña, País Vasco y Galicia. Todas ellas con lenguas propias que sirven de filtro para que docentes de otras comunidades autónomas no se presenten en esas zonas.

La Comunidad de Madrid, la otra región que mantenía la convocatoria, tuvo que recular tras anunciar en un primer momento que seguía adelante con el calendario. Fueron numerosas las voces que clamaban contra el más que probable «efecto llamada» que se produciría en esa comunidad al cortarse la ampliación de plazas por parte de otras regiones, y al ser Madrid la única con un papel exclusivo para el castellano. De las aproximadamente 27.000 plazas docentes repartidas por el conjunto del país, solo están abiertas para 2020 unas 8.000 para un total de 200.000 aspirantes. En la mayoría de casos, los opositores deberán esperar varios meses para poder realizar sus exámenes.

Así las cosas, este es el nuevo mapa de oposiciones docentes según cada comunidad autónoma.

Comunidad de Madrid, de «una convocatoria récord» a la nada

La Comunidad de Madrid decidió dar marcha atrás en su convocatoria de oposiciones para docentes, que en su día anunció como «una convocatoria récord» y que ahora ha quedado reducida a la nada, por el momento. «La Comunidad de Madrid convocará este año un total de 2.900 plazas de profesores de Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, en la que será la mayor cifra de la historia de la región en las oposiciones para estos cuerpos docentes», anunciaba el Ejecutivo madrileño en una nota de prensa a finales del pasado mes de enero. El 31 de marzo en un mensaje publicado en la red social Twitter, Ossorio señalaba que «la posición que la Comunidad de Madrid ha trasladado al Ministerio de Educación y Formación Profesional sobre las oposiciones de profesores de Secundaria es mantenerlas como estaban previstas, salvo que se prorrogue el estado de alarma el próximo 11 de abril. En ese caso se celebrarían en el verano de 2021».

El pasado día 5 de abril, con la pandemia golpeando de lleno nuestro país, especialmente en Madrid, la Comunidad decidió aplazar al año 2021 la convocatoria tras confirmarse la prórroga del estado de alarma decretado en España a mediados del mes de marzo decretada por Pedro Sánchez. Según declaró posteriormente el consejero en La Razón, la intención de la Consejería de Educación es que el próximo año se lleve a cabo una convocatoria de plazas docentes aun mayor que la que iba a ser de récord, sumando los nuevos puestos de la oferta del curso que viene, aunque de momento no hay ninguna cifra establecida ni sugerida, aunque, eso sí, ya se sabe que incluirá también plazas para el cuerpo de maestros, que en este 2020 no contaba con nuevas ofertas de empleo.

Cataluña mueve las fechas tres meses con el consenso de la mayoría de sindicatos

Unos días antes de que Madrid decidiera aplazar su convocatoria al próximo año, la Generalitat de Cataluña decidía aplazar las suyas, pero solo unos meses, y mantenerlas a 2020. Las pruebas, programadas inicialmente entre junio y septiembre, se realizarán entre el mes de septiembre y el de diciembre de este año, según los planes previstos por el consejero del ramo, Josep Bargalló, quien tras reunirse con los sindicatos docentes indicó que se había acordado el aplazamiento «en consenso con buena parte» de los mismos.

La decisión del aplazamiento no ha tenido una buena acogida en el seno de algunos sindicatos, como Ustec-Stes, que ha señalado que hacer las pruebas en septiembre dará como resultado «un inicio de curso caótico, que se presenta complicado en plena resaca del Covid-19».

«No las haremos en vano por las condiciones que todos conocemos. Las haremos de septiembre a diciembre. Me parece que es mejor garantía para las personas que se quieren presentar y un reconocimiento a las que ya se las están preparando», apuntó por su parte el conseller, quien defendió que «la mejor solución es la que hemos tomado», en referencia a la posibilidad que había sobre la mesa de trasladarlas al año que viene, aunque haciendo lo propio con las del año siguiente, que pasarían a 2022.

La Generalitat, que encabeza el presidente Joaquim Torra, consta de 5.000 plazas para el cuerpo de profesores de secundaria, para escuelas oficiales de idiomas y para artes plásticas y diseño, tanto para maestros como para profesores, en el caso de esta última. El Departament d'Educació ya ha señalado que las pruebas de lenguas oficiales para quienes no acrediten conocimiento de catalán serán la primera semana de septiembre.

Galicia mantiene el calendario a pesar de la fuerte oposición

Galicia es la única comunidad autónoma que no se ha movido de sus planes iniciales sobre las oposiciones para docentes, que cuentan con una oferta de unas 3.600 plazas. A diferencia de Madrid, que reculó y las aplazó al año próximo, o de Cataluña y País Vasco, que las mantienen para este año pero avanzado el calendario hacia el otoño, la región gobernada por Alberto Núñez Feijóo se mantiene en el punto de partida con la postura contraria de sindicatos y de la oposición.

«Nuestra voluntad, por respecto a los miles de personas opositoras que en estos momentos están realizando un esfuerzo para prepararse en una situación tan compleja como la que estamos viviendo, es mantener el proceso, ya que todavía se está en plazo para llevarlo a cabo», afirmaba hace unos días la consejera de Educación gallega, Carmen Pomar, en una carta remitida a las principales fuerzas sindicales. Los sindicatos por su parte han mostrado su malestar, en una carta enviada a Pomar el pasado 8 de abril. «Las organizaciones sindicales que formamos parte de la Mesa Sectorial de Educación no hemos sido consultadas en ningún momento sobre las decisiones que se están adoptando por parte de la administración educativa al respecto de la situación creada por la emergencia sanitaria y el estado de alarma», arranca la misiva firmada

por CIG-ENSINO, CCOO-ENSINO, ANPE y FESP-UGT. En la carta lamentan el «hermetismo» y la «ausencia absoluta de interlocución» respecto a asuntos como «la celebración o no de las oposiciones en las fechas inicialmente previstas».

La negativa a mantener las fechas de las convocatorias no queda reducida a los sindicatos. Existe, por ejemplo, en la página web change.org una campaña que cuenta a la hora de cierre de esta edición con más de 8.300 firmas (el objetivo son 10.000) para que Galicia siga la estela de Madrid. «Dada la situación crítica que se está viviendo en el planeta, con todas las consecuencias que esta conlleva, nos parece que lo más ético sería aplazar las oposiciones para el curso que viene. Además, consideramos que si se está haciendo un llamamiento a la ciudadanía para que se quede en casa y asuma la responsabilidad de detener su día a día, seguir con el proceso normal de oposiciones es incoherente. Por solidaridad con todos, posponer las oposiciones como han hecho en otras comunidades es un gesto de empatía con los que llevamos muchos años estudiando. Estos momentos son muy duros como para seguir estudiando como si nada pasara», asevera en la citada página Xoana Goicoa, promotora de la iniciativa y que fue en 2016 parte de la candidatura En Confluencia Podemos dentro de las primarias de En Marea, la marca de Unidas Podemos en Galicia. Las críticas también llegan desde redes sociales. En Twitter se ha iniciado un movimiento contra la convocatoria bajo el hashtag #OPOñomeaestaOPO.

País Vasco retrasa las fechas pero mantiene la convocatoria

Otra comunidad donde habrá próximamente elecciones es el País Vasco que, al igual que Galicia, decidió aplazarlas con la declaración del estado de alarma.

El pasado 8 de abril, la viceconsejera de Administración y Servicios del Departamento de Educación, Olatz Garamendi, se reunió por videoconferencia con los representantes sindicales del profesorado de la red pública de educación y les trasladó la decisión de atrasar la fecha de la primera prueba para la Oferta Pública de Empleo 2020 del Departamento de Educación, que estaba prevista para el próximo 20 de junio, según informaba en un comunicado de prensa el ejecutivo vasco. «El Departamento de Educación ha tomado esta decisión debido a la ampliación del estado de alarma, y la necesidad de garantizar en todo momento la seguridad sanitaria que se ha de mantener en un proceso de admisión de estas características», explicaba el departamento en el comunicado, en el que se recordaba que se ofertarán un total de 1.148 plazas para los cuerpos de Profesorado de Enseñanza Secundaria y de Profesorado Técnico de Formación Profesional.

«Garamendi y su equipo han recordado, además, que previamente a la citada primera prueba, se ha de llevar a cabo la acreditación lingüística de todas aquellas personas candidatas que aún no la tengan acreditada», continuaba el texto, en el que también se aludía a que «el Departamento de Educación analizará las posibles nuevas fechas para el desarrollo de esta OPE, siempre en función de la evolución de la actual crisis sanitaria, y lo debatirá en posteriores reuniones con la representación sindical».

El resto de comunidades llevan sus convocatorias a 2021

Tras la suspensión de la citada reunión entre Celaá y los consejeros de educación, y el visto bueno ministerial para que cada comunidad autónoma hiciera lo que creyera conveniente, catorce de las diecisiete autonomías decidieron llevar sus convocatorias al 2021.

En Andalucía, donde se ofertaban 6.326 plazas, el consejero Javier Imbroda decidía aplazarlas, ya que era ese «el sentir mayoritario». En Aragón, donde la oferta era exigua, de tan solo 403 plazas, se decidió hacer lo mismo, dado que no se daban las garantías necesarias. Asturias, que fue uno de los primeros focos del coronavirus, tenía convocadas 757 plazas cuyo plazo de presentación acababa un día antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretara el estado de alarma. En las Islas Baleares, se prorrogarán las plazas de este año a las convocatorias de 2021 y 2022, según reflejó en una carta enviada al Ministerio de Educación y FP por parte del conseller Martí March.

Canarias movía, por su parte, sus 1.337 plazas al 2021, manteniendo la de maestros en el 2022. Cantabria retrasará a 2021 las oposiciones de Secundaria y otros cuerpos convocadas inicialmente para este año y garantiza que se mantendrían las 265 plazas previstas.

En Castilla-La Mancha, una de las regiones más afectadas por el coronavirus, Educación señalaba que, como consecuencia de la crisis se suspendían «los procedimientos de adjudicación de plazas durante el curso escolar mientras siga suspendida la actividad docente». La oferta castellano-manchega incluía alrededor de unas 700 plazas para estas oposiciones. En Castilla y León se retrasan hasta junio de 2021 los exámenes de oposición al Cuerpo de Maestros de Educación Secundaria, de Formación Profesional y de Música y Artes Escénicas. Entre todas las especialidades aunaban una oferta de 1.401 plazas.

En Extremadura, las de Primaria se aplazan hasta 2022 «buscando el bien común de todos los opositores», según aseguraba Esther Gutiérrez, su consejera de Educación. En la Región de Murcia, que en un primer momento mantuvo la convocatoria para el 20 de junio, se decidió finalmente aplazar la oferta de 575 plazas. Navarra contaba con 660 plazas que también serán aplazadas, sin fecha fija, al igual que La Rioja, que tenía una oferta de dos centenares de puestos. La Comunidad Valenciana, a su vez, tenía previsto este año ofertar

3.575 plazas de ingreso libre y 4.295 en total en el cuerpo de profesores de Secundaria y otros cuerpos, en unas oposiciones que se iban a celebrar 17 de junio y que se celebrarán también el año que viene.

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que dependen educativamente directamente del Gobierno Central, tenían una oferta de plazas de 84 en el caso de Melilla y otras 90 para Ceuta y ambas deben esperar a que se pronuncie el Ministerio de Educación y FP. En este sentido, la delegación de ANPE en Melilla, exigía hace unos días en un comunicado de prensa que el Ministerio «comunique ya a los docentes dependientes directamente de su jurisdicción, como lo son Ceuta y Melilla, qué se va a hacer sobre los procesos selectivos, pues de momento aquí esos procesos no han sido ni convocados, algo que otras comunidades sí hicieron anteriormente por lo que pueden realizar un aplazamiento sin pérdida de plazas».

Los sindicatos reclaman unidad de respuesta

La mayoría de las fuerzas sindicales con presencia relevante en el sector educativo demandaban hace semanas a Isabel Celaá que hiciera un esfuerzo por coordinarse con las distintas comunidades autónomas de cara a mantener un criterio común y evitar injusticias como la que producía el «efecto llamada» que se iba a dar en la Comunidad de Madrid al mantener abierta la convocatoria de plazas junto con Cataluña, País Vasco y Galicia, que podían poner un tope lingüístico para evitar que opositores de otras regiones se presentaran allí. Esta era la opción de CCOO, ANPE, STEs, CSIF y UGT, que querían evitar perjuicios a los aspirantes. «Aunque las comunidades autónomas tienen plenas competencias para convocar los procesos selectivos, el Ministerio ha buscado el máximo acuerdo y se han mantenido diversos contactos con las comunidades para definir las posiciones de todas ellas», precisaba el Ministerio en un comunicado, echando por tierra las aspiraciones de los sindicatos.

Entre las suyas, CSIF pedía al departamento liderado por Celaá que coordinase a las autonomías para marcar una fecha única y homogénea de celebración de las oposiciones en 2021, que debían celebrarse con garantías de que las plazas convocadas serán ofertadas en el momento acordado como necesidad para la estabilización de las plantillas docentes e «información urgente y detallada de los acuerdos conseguidos y de cuáles son los planes de cada Comunidad Autónoma, en caso de no alcanzarse acuerdos». CCOO, a su vez, lanzaba un comunicado advirtiendo de que «cualquier decisión que no esté coordinada a nivel estatal es perjudicial para el conjunto de aspirantes». «La Federación de Enseñanza de CCOO (FECCOO) considera que una decisión común sobre la convocatoria de las oposiciones en educación, en la que se anteponga la salud de las personas, debería haber sido lo correcto» señalaba el texto, en el que defendía que la decisión sobre las plazas docentes fuera «consensuada y unánime en el ámbito estatal, garantizando que no se pierda ninguna de las plazas previstas en 2020 y que se ponga por delante la salud de las personas aspirantes». Al parecer las plazas se mantendrán en todas las comunidades autónomas, aunque sea posponiendo las previstas para los años venideros.

No habrá curso en verano, los alumnos podrán suspender y repetir será «excepcional»

Mar Lupión

Por fin se ha despejado la incógnita. Tras la reunión de la conferencia sectorial de educación, gobierno y consejerías han acordado que, como norma general, los alumnos de primaria, secundaria y primero de bachillerato pasen de curso, aunque cada uno con notas diferentes. Los alumnos podrán suspender, pero las repeticiones serán «excepcionales» y necesitarán la autorización de la Administración. La EBAU se mantiene y los colegios permanecerán abiertos en verano, aunque sólo para actividades de apoyo.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional, que encabeza Isabel Celaá, ha anunciado que los alumnos serán finalmente evaluados. Se calificarán los contenidos impartidos durante el período de clases presenciales, es decir, hasta que el pasado 14 de marzo se decretara el estado de alarma. Todo lo visto desde entonces, tercer trimestre incluido, solo podrá servir para mejorar las notas, nunca para empeorarlas. Los docentes elaborarán informes para cada alumno en los que se indican qué tipo de plan de refuerzo requiere para compensar las complejas circunstancias en las que se está desarrollando la recta final del curso 2019/2020. Para ello, una de las ideas sobre la mesa es retomar el llamado plan PROA que se aplicó entre 2005 y 2012 para dar apoyo a los alumnos con necesidades especiales o con un menor rendimiento académico.

En cuanto a la posibilidad de continuar el curso en verano, Celaá asegura que el curso terminará en junio y no habrá período lectivo en verano, pero los colegios permanecerán abiertos para actividades «lúdicas». Las CCAA podrán decidir si organizar estas actividades o no.

La excepción, los preuniversitarios

Mención aparte para los estudiantes de segundo de Bachillerato. En su caso, serán las comunidades autónomas las encargadas de decidir la forma de evaluar, aunque se espera que se limite a lo visto en clase durante los dos primeros trimestres.

En cuanto a la EBAU, se mantiene. El Ministerio de Educación ya tiene en sus manos un borrador en el que se incluyen las líneas generales para la realización de la prueba. Por ejemplo, se estipula que no se va a reducir el temario de 2º de Bachillerato y que el diseño del examen será prácticamente el mismo al que están acostumbrados. Se aumentará la optatividad y en cada prueba de cada asignatura, parte de los contenidos serán materiales abordados durante el período de clases presenciales.

Se rechaza, además, la propuesta que pedía que el examen se celebrara a la vez en todas las comunidades y fuera igual para todos. Sobre esto, Maribel Loranca, secretaria del sector de Enseñanza de UGT, comenta en declaraciones a este periódico que «hay que recordar que el contexto es el de la emergencia sanitaria, primero; y el de la emergencia social, segundo. El objetivo del texto era abordar unas recomendaciones en este momento extraordinario. ¿Qué aporta para esta situación que la EBAU se celebre o no en la misma fecha en toda España? Es una propuesta que va dentro de una batería orientada a la recentralización de la enseñanza. Por eso fue rechazada, no aportada nada, no soluciona nada. Cosa diferente es que, en lo últimos tiempos, se ha pedido que hayan criterios comunes para que en todas las CCAA tengan el mismo grado de dificultad». Una opinión que no comparten desde ANPE: «Creemos que es necesaria una EBAU única en todo el Estado para evitar que se vulnere el principio de igualdad de oportunidades. Pero, ya que no puede ser, que sea lo más homologable posible», nos dice su presidente, Nicolás Fernández Guisado.

Ainara Zubillaga es directora de Educación y Formación en COTEC y nos explica que «en muchos países de nuestro entorno, se han suspendido exámenes equivalentes a la EBAU, como es el caso del Reino Unido, Francia o Italia. Han optado por recoger otras formas de evaluar más ajustadas a la situación actual y que no sometan a los alumnos, familias y profesores a una presión **extra**». Su reflexión va más allá: «no pasa nada por no hacer un examen. Se puede calcular la nota de corte a partir de las medias de Bachillerato. Tampoco creo que la EBAU determine tanto la competencia de un alumno para acceder o no a la educación universitaria. Hablamos de dos años académicos destinados a preparar un examen».

Una decisión secundada

La comunidad educativa ya se había pronunciado estos días acerca de la posibilidad del aprobado general. La mayoría abogaba por un «no» a esa medida y un «sí» a una evaluación más flexible.

En ese sentido se expresaban, por ejemplo, desde ANPE: «un aprobado general es una medida absolutamente injusta para aquellos alumnos que se han esforzado a lo largo del curso. Lo que pedimos es que las evaluaciones sean flexibles y prime la evaluación continua. Durante 6 meses y medio hemos acudido a las aulas, ese ha de ser el peso fundamental a tener en cuenta, que se valore el rendimiento del alumno, su madurez, su evaluación. Este último trimestre ha de ser para reforzar lo aprendido presencialmente».

Paco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, ve más inconvenientes que ventajas: «creo que no se debe decretar un aprobado general por muchas razones: primero, sería dinamitar lo que queda de curso, desvalorizar el trabajo de los docentes; segundo, creo mucho en la autonomía pedagógica de los centros y el profesorado. Pienso que la decisión ha de residir en ellos, conocen a sus alumnos, las dificultades que han tenido, tomarán en consideración a aquellos que no han tenido recursos para conectarse».

En la FAPA Francisco Giner de los Ríos llevan desde el principio pidiendo flexibilidad con los alumnos. Su presidente, Camilo Jené insiste en que culpa de esta situación no es del alumnado y sería muy injusto que pagara por ello. Hay que apostar por que el alumnado pase de curso y que en el siguiente, ya desde los inicios, existan más recursos educativos y que la evaluación continua comience desde el primer día de curso». Precisamente son las asociaciones de padres y madres junto con las de estudiantes las que más han insistido en una cuestión: que se reduzcan al mínimo las repeticiones.

Disparidad de opiniones sobre el fin de curso

Aunque la decisión esté tomada, nos interesamos por los profesores y cuál es, en su opinión, la manera más adecuada de valorar el desempeño de los estudiantes en un contexto tan complejo. Fernando Trujillo, experto educativo, forma parte de un estudio que analiza esta cuestión. Se trata de un cuestionario en el que se establecen 4 posibles escenarios: «el primero, en el que la Administración insta a los centros a que, desde su autonomía, sean ellos quienes decidan y se continúe con la enseñanza online sin modificar el currículo. Una especie de intento de seguir con una supuesta normalidad», nos cuenta. El segundo escenario contempla «un ajuste del currículo orientado a centrarse en los objetivos mínimos posibles». La tercera opción habla de evaluación positiva, eso sí, «condicionada a la realización de una serie de tareas. Es muy similar a lo que se ha aprobado en Italia». Por último, una evaluación positiva «sin condiciones».

A la hora de analizar resultados, vemos que todas las opciones presentaban tanto defensores como detractores. «La variable que marca la diferencia no es la edad de los docentes ni su formación, sino la etapa educativa en la que trabajan. El panorama es muy abierto. Eso sí, vemos un mayor apoyo de Infantil y Primaria a los escenarios de evaluación positiva y un apoyo más claro de Secundaria y Bachillerato a los escenarios 1 y 2, que no parten de una evaluación positiva», apunta Trujillo. En líneas generales, «la respuesta del profesorado es muy responsable y muy sensata, oscila entre el 2 y el 3. Mi opinión está también ahí, entre un ajuste de los contenidos y una evaluación positiva condicionada al trabajo del curso próximo o del siguiente».

Para Trujillo, la clave no está en junio, sino a largo plazo. Defiende que hay que «poner las luces largas. La solución está en el curso 2020/2021 y en el 2021/2022. Si ponemos las luces cortas, nos quedamos en el debate estéril de si los alumnos aprueban o no y lo que tenemos entre manos tiene mucho más peso». Y vuelve a poner de manifiesto que no todos pueden sumarse por igual a la teledocencia: «hay un problema

fundamental y es que en las circunstancias actuales no podemos garantizar ninguna de las claves del sistema educativo, que son equidad y calidad. Esto nos puede doler pero es así. No sabemos ni siquiera la cifra exacta de estudiantes que no están conectados. Ahora mismo se está manteniendo la docencia porque el esfuerzo que está haciendo el profesorado con recursos propios es absolutamente loable y admirable. Es lo que está garantizando la docencia, pero no podemos garantizar el aprendizaje».

Escuelas de verano

Era otra de las grandes incógnitas que sobrevolaba la comunidad educativa. Finalmente, Educación se ha optado por rechazar la vía de alargar el curso y dar clases en verano, y se permitirá que las comunidades autónomas organicen o apoyen la realización de actividades de refuerzo en el período estival «en formas diversas y combinadas con actividades lúdicas».

La solución tomada sigue así las reclamaciones de algunas familias y especialistas, que pedían al Gobierno dejar los centros abiertos para poder reforzar materias y suplir el tiempo perdido durante el confinamiento. Lo hicieron a través de una carta enviada a la ministra de educación, Isabel Celaá y a los consejeros autonómicos. Rubricaron el texto 12 organizaciones educativas y más de una treintena de expertos y exaltos cargos educativos de distinto signo político. Lo que buscaban, apuntaron entonces, es «que se aprueben medidas que frenen la brecha entre los alumnos más aventajados y los más desfavorecidos». Una iniciativa que entraña una gran complejidad organizativa. Así lo explicaba Ainara Zubillaga: «el hecho de abrir en verano es una medida necesaria, especialmente para aquellos alumnos que están viendo como el confinamiento profundiza la brecha educativa. Ahora bien, una cosa es decidir si se alarga el curso hasta julio y otra cosa es establecer que se abran los centros en julio con alguna oferta educativa. Creo que se está confundiendo. Se está asumiendo que si se abren los centros en julio serán los mismos profesores quienes asumirán la docencia. No quiere decir eso, no es así. Habrá que articular una oferta educativa para este perfil de alumnos».

El apoyo a la idea de abrir los colegios en vacaciones no es unánime. Trujillo expresa sus dudas acerca de esta idea: «hay que plantear la cuestión de para qué abrir los colegios en verano. Hablamos de niños que llevan encerrados quizá dos o tres meses, ¿los vamos a llevar al colegio a darles instrucción? ¿A hacerles exámenes? ¿En qué condiciones? Francamente, creo que nuestros estudiantes se merecen algo más, se merecen educación con mayúsculas». Aunque se muestra dispuesto a analizar propuestas de todo tipo, reitera su idea de «las luces largas»: «podemos hacer este año colonias escolares, campamentos, escuelas de verano; será bueno, sin lugar a dudas. Pero si en septiembre volvemos a clase como si nada hubiera pasado, entonces, ¿para qué sirve? Estoy más interesado en pensar juntos en qué vamos a hacer el curso que viene. ¿Cómo va a ser el primer trimestre? ¿Qué pasa si hay otro repunte? No hay ni un solo científico en el mundo que garantice que no habrá repuntes hasta que no haya vacuna. Es urgente pensar qué va a pasar el año que viene, planes de recuperación, planes de trabajo. La clave no es este verano, sino los dos próximos cursos».

Ciberdelincuencia, otro virus que acecha a la educación

Pablo Tejeda Rodilla

Desde que se anunció el cierre de los colegios, los centros han tenido que adaptar sus metodologías y temarios a las nuevas circunstancias de educación telemática, pero sin dejar de cumplir los requisitos de seguridad que impone el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Es un reto importante, especialmente si antes del confinamiento el centro educativo no contaba con las medidas de ciberseguridad pertinentes.

La falta de cortafuegos y barreas puede exponer al personal docente y a los alumnos a todo tipo de ataques. Los expertos consultados coinciden en que los ataques en este sector existen, pero la mayoría de los centros carecen de medidas para repelerlos.

Exceso de información personal

Rosa Pérez, directora de educación digital de la empresa de ciberseguridad Gaptain, explica que el principal problema que enfrentan los colegios es la falta de formación digital del profesorado. «Los colegios tratan mucha información personal en su día a día y tienen que prestar especial atención a los datos de los alumnos, ya que en su mayoría son menores. En la mayoría de las ocasiones no se tienen conocimientos suficientes sobre las medidas de seguridad que hay que llevar a cabo para gestionar esa información».

A la falta de conocimientos se une la ausencia de medios para tomar decisiones rápidas y seguras. «En las empresas privadas es habitual contar con un departamento informático o similar, pero en los colegios en pocas ocasiones cuentan con los medios necesarios para ello, suelen ser uno de los sectores que menos invierte en ciberseguridad pero, en el que año tras año aumentan los ataques», afirma la experta.

Otro de los escollos que encuentra una escuela antes de proceder al tratamiento de datos de los alumnos es la solicitud de consentimiento. Teresa Pereyra Caramé, responsable del Área de Protección de Datos y Tecnologías de la Información del despacho Roca Junyent, recuerda que la ley establece diferencias entre los mayores y los menores de 14 años, ya que «antes de dicha edad, serán padres o tutores quienes deban emitir este consentimiento y representarlos en el ejercicio de sus derechos en relación con el tratamiento de sus datos y el centro deberá desplegar esfuerzos razonables para comprobar la veracidad de ese consentimiento».

Pereyra también señala diferencias a la hora de abordar el tratamiento de los datos «en el caso de los menores de 14 se requiere que antes de comenzar se lleve a cabo una evaluación de impacto en la protección de datos de carácter personal, esto es, un análisis en el que el responsable o encargado del tratamiento evalúa la necesidad de llevar a cabo el tratamiento en cuestión, su proporcionalidad y analiza los riesgos concretos a los

que se expone la información de carácter personal durante el tratamiento con la intención de minimizarlos en lo posible». Para estas funciones, los centros docentes deben contar con un delegado de protección de datos que, en la mayoría de los casos, es una persona del equipo directivo.

Los puntos débiles en casa

Si en los centros docentes tienen dificultades para garantizar la protección de datos, en los domicilios es todavía más complicado. Según explica Diego Muñoz Beltrán, DevOps Engineer de BBVA Next Technologies, las redes Wi-Fi pueden representar una importante vulnerabilidad «en el caso de las conexiones inalámbricas domésticas, la autenticación suele realizarse mediante WPA-PSK (Pre-Shared-Key). Esto quiere decir que, cuando te conectas a tu punto de acceso, o router, sabes la clave de antemano. En el caso de las conexiones de grado profesional (habituales en escuelas), el sistema es algo más complejo; cuando los usuarios tratan de conectarse a la red necesitan hacer uso de unas credenciales de acceso (usuario y contraseña). Estas credenciales son contrastadas con un tercer elemento que es el encargado de decir "sí, este usuario puede acceder a los recursos"».

En muchas ocasiones los dispositivos personales no están actualizados o no cuentan con antivirus y cortafuegos que garanticen la seguridad. Muñoz Beltrán apunta que lo ideal es «poner a disposición de los profesionales una suite de herramientas que se puedan emplear para el trabajo en remoto. Si los recursos lo permiten, proporcionar terminales (ordenadores, teléfonos, tablets) exclusivos para la actividad docente, a ser posible gestionados por la propia organización, de forma que se impida al usuario una serie de operaciones, como instalar aplicaciones, y que fuerce otras, como obligar al usuario a tener una contraseña. Aplicaciones como MobileIron garantizan este nivel de seguridad».

Precisamente, antes de comenzar la actividad docente desde casa, los profesores deben estar correctamente asesorados sobre las herramientas que deben o pueden utilizar. La abogada Teresa Pereyra Caramé explica que «los profesionales deberían recibir indicaciones sobre cómo conectarse en condiciones de seguridad a los sistemas de información del centro o administración, las plataformas a utilizar y, en algunos casos, dado lo imprevisto de la situación, indicaciones sobre las plataformas de terceros que reúnen las condiciones suficientes de seguridad para ser utilizados en estos momentos.». Como explica, las plataformas de terceros pueden plantear serios problemas a nivel técnico y legal «en caso de que no se disponga de herramientas propias, o que se considere adecuado recurrir a una externa, el centro es el encargado de seleccionarla, comprobar su idoneidad, determinar si es necesario algún consentimiento o información adicional y proceder a cumplir con estas obligaciones informando de todo ello al profesorado». «Además, será necesario verificar los términos, condiciones y política de privacidad de la aplicación antes de usarla, configurar las opciones de privacidad, evitar el tratamiento de datos sensibles en su entorno y, en general, proporcionar instrucciones al profesorado y alumnado sobre el correcto uso de la plataforma.»

Respecto a las dificultades técnicas, el informático Diego Muñoz Beltrán, apunta que «las aplicaciones para el desarrollo de las clases deberían ser siempre gestionadas por el propio centro o red de centros. Se deben asegurar que los servicios, datos sensibles, recursos docentes, información, calendarios... se almacenan siempre en infraestructura, ya sea **on premise** o en la nube, accesible y gestionada por los centros educativos». Rosa Pérez, de Segureskola, añade que «cuando alojamos los datos en la nube estamos cediendo esa información a terceras empresas que los guardan en servidores que pueden estar situados en cualquier país o zona geográfica, puede parecer lógico pensar que la nube ofrece menos garantías que tener los datos almacenados en nuestro equipo. Pero muchas veces, tener nuestra información en nuestro equipo o en nuestro servidor local no implica una mayor seguridad».

¿Cómo están actuando los centros educativos?

En general, las comunidades autónomas no han proporcionado instrucciones concretas sobre cómo deben actuar los centros educativos en la situación de tele-docencia. Cada colegio está trabajando en función de sus recursos y tomando las medidas que la dirección estima oportunas. En este sentido se aprecian diferencias notables entre colegios públicos y concertados o privados.

La abogada Pereyra Caramé explica que la primera diferencia en el ámbito de la protección de datos radica en quién es el responsable de gestionar dicha información. «Los centros educativos privados son responsables de tratamiento, por tanto, tienen todas las obligaciones propias de dicha figura: necesidad de base legítima para el tratamiento, deber de información, elaboración del Registro de Actividades de Tratamiento, evaluación de impacto, despliegue de las medidas de seguridad necesarias, correcta atención de los derechos de los afectados, notificación de brechas de seguridad, etc... En el caso de los centros públicos, no ostentan la condición de responsables porque lo es la Administración Pública correspondiente. No obstante, los centros y profesores son parte activa del tratamiento de datos que se lleva a cabo y, por tanto, deberán seguir las directrices impuestas por dicha autoridad con el fin de que se dé cumplimiento a todas las obligaciones del responsable y se lleve a cabo un tratamiento de datos adecuado desde el punto de vista legal».

Las medidas en algunos colegios

En el colegio concertado El Salvador de Leganés, Madrid, ya contaban con protocolos y sistemas previos al confinamiento para realizar tele-docencia de forma segura. Silvia Díaz, coordinadora de la mochila digital, explica cómo están trabajando desde casa. «Por un lado contamos con la plataforma Raíces de la Comunidad de Madrid, donde se almacenan los datos personales de familias y alumnos, así como sus expedientes académicos, direcciones... Por otro lado, en nuestro centro tenemos incorporada una mochila digital. Esta mochila incluye un iPad para todos los alumnos de secundaria. Este dispositivo es propiedad del centro durante los 4 años que dura el ciclo y luego las familias pueden adquirirlo. Además, al comienzo del curso los padres firman un contrato en el que se les informa de las cuentas de usuario que se crearán a los alumnos en diferentes plataformas y se les especifica qué nivel de protección tienen esas cuentas. Entre otras plataformas se autoriza el acceso a Google Classroom que cuenta con grandes medidas de seguridad y que actualmente nos está permitiendo realizar las clases por videoconferencia. Para almacenar información de diversas actividades lectivas utilizamos iCloud drive, de Apple, que cuenta con los mayores estándares de seguridad de sistemas en la nube».

En cambio, en el centro público de La Rosaleda, en Málaga, no hay ningún protocolo establecido. Es cada profesor el que estudia la mejor forma de impartir su asignatura cumpliendo con los requisitos legales. Miguel Ángel Perera, profesor de educación física, dice que combina las plataformas proporcionadas por la Junta de Andalucía para actualizar el expediente académico con servicios de terceros. Así lo explica: «En este momento para comunicarnos con los alumnos y con los padres utilizamos principalmente whatsapp. Antes de la situación de confinamiento yo ya empleaba Google Classroom y ahora es un pilar fundamental de la clase. Esta herramienta permite colgar las tareas en carpetas confidenciales. Pido a los alumnos que graben la realización de los ejercicios y que suban las grabaciones a Google Classroom para poder evaluarlos. Sólo yo y el alumno tenemos acceso a esos vídeos. También utilizo Edpuzzle, una aplicación gratuita con fines educativos que me permite editar vídeos y crear cuestionarios. En general ningún profesor está haciendo videoconferencia en directo».

A pesar de que la educación es competencia de las CCAA, en lo referente al derecho a la protección de datos de carácter personal la normativa es única en toda la Unión Europea. En el colegio concertado, Nuestra Señora del Castañar, de Béjar, en Salamanca cuentan con una plataforma online propia para la gestión de información del centro. Gabriel Hernández, director del colegio, explica que al principio de curso los padres firman una carta de compromiso y se les proporciona acceso a la plataforma digital. Con esta herramienta pueden ver el expediente de sus hijos y hablar con docentes y alumnos. «El problema que hemos detectado es que muchas familias no tienen impresoras u ordenadores, lo que está dificultando la realización de las tareas. Cuando resuelven los ejercicios nos envían fotografías con los resultados. Por el momento, no estamos haciendo videoconferencias porque el sistema no ofrece esa posibilidad, pero ya estamos estudiando diferentes posibilidades de terceros como Zoom o Teams» explica.

En el centro público Les Dunes de Guardamar, Alicante, utilizan las herramientas que les ha proporcionado la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana. Juan Marcos Álvarez, profesor de tecnología, comenta que «la comunidad ha repartido tablets con internet a las familias más vulnerables, en nuestro centro 36 familias cuentan con una y cuando acabe la situación de confinamiento las devolverán. Para mantener la labor docente utilizamos dos herramientas de la consellería, Ítaca y Aules. A través de Ítaca mantenemos el contacto con los alumnos, pero muchos padres no se han descargado la aplicación, lo que nos obliga a utilizar el **e-mail** oficial del centro o de la consellería. Aules funciona como un Google Classroom, pero de la comunidad, antes no lo utilizábamos mucho y ahora la Generalitat ha tenido que reforzar los servidores. Por supuesto, al principio de cada curso solicitamos autorización a los padres para añadir información de sus hijos, incluidas imágenes, en estas plataformas».

Las vídeo-clases en directo

Una de las mayores preocupaciones de los centros docentes a la hora de mantener las clases con los alumnos en casa, es la posibilidad de realizar videoconferencias en directo. Unos centros siguen estudiando opciones, otros cuentan con sus propios recursos y algunos han optado por soluciones que no garantizan la seguridad plena de profesores, ni alumnos.

El informático Diego Muñoz Beltrán recomienda algunas aplicaciones seguras, como Microsoft Office 365 con toda su suite de herramientas (Teams, Office, Outlook...) para la comunicación. En este caso la solución es de pago y requiere una licencia y una autorización por parte del centro responsable. «Hay otras buenas herramientas que se pueden alojar en la infraestructura propia del colegio, por ejemplo, Moodle o Jitsi, ambas de código abierto, una característica que no las hace más seguras **per se**, pero que garantiza que pueden ser auditadas por cualquier individuo u organización y localizar más rápido los fallos de seguridad».

Independientemente de la aplicación elegida hay unos protocolos de seguridad que se deben seguir siempre, tal como explica Rosa Pérez de Segureskola, «debemos controlar el acceso y no dejar abierta una videoconferencia a cualquier usuario o perderemos el control de los asistentes y podríamos tener problemas de privacidad. Verificar que los datos o ficheros compartidos no contienen información privada o confidencial. Vigilar el entorno en el que se produce la videoconferencia para no emitir información personal. Y por último, al finalizar, tapar la cámara y deshabilitar el micrófono cuando no lo estemos usando».